CORTES GENERALES

DIARIO DE SESIONES DEL

SENADO

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JUAN JOSÉ LUCAS GIMÉNEZ

Sesión del Pleno

celebrada el lunes, 15 de diciembre de 2003

ORDEN DEL DÍA:

Previo

- JURAMENTO O PROMESA DE ACATAMIENTO A LA CONSTITUCIÓN DE LOS EXCELENTÍSIMOS SEÑORES SENADORES DON ANTONIO GERMÁN BETETA BARREDA, DON LUIS EDUARDO CORTÉS MUÑOZ, DON EDUARDO CUENCA CAÑIZARES, DON PEDRO FELICIANO SABANDO SUÁREZ, DON RAFAEL SIMANCAS SIMANCAS Y DON JUAN VAN-HALEN ACEDO. (Números de expedientes 500/000324, 500/000323, 500/000327, 500/000326, 500/000328 y 500/000325).

Primero

Actas:

- Lectura y aprobación, si procede, de las Actas de las sesiones anteriores, celebradas los pasados días 9 y 10 de diciembre de 2003.

Segundo

Dictámenes de Comisiones sobre proyectos y proposiciones de ley remitidos por el Congreso de los Diputados:

- De la Comisión de Presupuestos en relación con el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2004. (Publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie II, número 172, de fecha 15 de diciembre de 2003). (Número de expediente S. 621/000172) (Número de expediente C. D. 121/000173).
 - De la Comisión de Economía, Comercio y Turismo en relación con el Proyecto de Ley de medidas fiscales, administrativas y del orden social. (Publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie II, número 173, de fecha 16 de diciembre de 2003). (Número de expediente S. 621/000173) (Número de expediente C. D. 121/000174).
-

SUMARIO

Se abre la sesión a las doce horas y cinco minutos.

	Página
Juramento o promesa de acatamiento a la constitución de los Excelentísimos señores Senadores don Antonio Germán Beteta Barreda, don Luis Eduardo Cortés Muñoz, don Eduardo Cuenca Cañizares, don Pedro Feliciano Sabando Suárez, don Rafael Simancas Simancas y don Juan Van-Halen Acedo	10541

Se señor Beteta Barreda jura acatar la Constitución.

El señor Cortés Muñoz jura acatar la Constitución.

El señor Sabando Suárez promete acatar la Constitución.

El señor Simancas Simancas promete acatar la Constitución.

El señor Cuenca Cañizares promete acatar la Constitución.

El señor Van-Halen Acedo jura acatar la Constitución.

	Página
ACTAS	10541

	Página
Lectura y aprobación, si procede, de las Actas de las sesiones anteriores, celebradas los pasados días 9 y 10 de diciembre de 2003	10541

Se aprueban las actas por asentimiento de la Cámara.

	Página
DICTÁMENES DE COMISIONES SOBRE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS	10541

	Página
De la Comisión de Presupuestos en relación con el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2004	10541

	Página
De la Comisión de Economía, Comercio y Turismo en relación con el Proyecto de Ley de medidas fiscales, administrativas y del orden social	10541

El señor Alcalde Sánchez, Vicepresidente primero de la Comisión, presenta el dictamen del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2004.

El señor Murria Climent, Vicepresidente primero de la Comisión, presenta el dictamen del Proyecto de Ley de medidas fiscales, administrativas y del orden social.

El señor Ministro de Hacienda (Montoro Romero) presenta ambos proyectos de ley.

Se inicia el debate de las propuestas de veto.

El señor Bru Parra defiende las propuestas de veto del Grupo Socialista a ambos proyectos de ley. La señora Aroz Ibáñez defiende las propuestas de veto del Grupo Entesa Catalana de Progrés a ambos proyectos de ley. El señor Albistur Marin defiende las propuestas de veto del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos a ambos proyectos de ley.

Se suspende la sesión a las catorce horas y treinta minutos.

Se reanuda la sesión a las dieciséis horas y diez minutos.

El señor Quintana González, del Grupo Mixto, defiende sus propuestas de veto a ambos proyectos de ley. El señor Mur Bernad, del Grupo Mixto, defiende sus propuestas de veto a ambos proyectos de ley. El señor Cuenca Cañizares, del Grupo Mixto, defiende sus propuestas de veto a ambos proyectos de ley. El señor Fernández Cucurull consume un turno en contra. Vuelve a intervenir el señor Ministro de Hacienda (Montoro Romero). En turno de portavoces, hacen uso de la palabra los señores Cabrero Palomares, por el Grupo Mixto, y Albistur Marin, por el Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos; la señora Aroz Ibáñez, por el Grupo Entesa Catalana de Progrés, y los señores Cambra i Sánchez, por el Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió, Bru Parra, por el Grupo Socialista, y Fernández Cucurull, por el Grupo Popular. Cierra el debate el señor Ministro de Hacienda (Montoro Romero).

Se rechaza la propuesta de veto del Grupo Socialista al Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2004 por 71 votos a favor y 123 en contra.

Se rechaza la propuesta de veto del Grupo Socialista al proyecto de Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social por 72 votos a favor y 123 en contra.

Se rechaza la propuesta de veto del Grupo Entesa Catalana de Progrés al Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2004 por 80 votos a favor y 132 en contra.

Se rechaza la propuesta de veto del Grupo Entesa Catalana de Progrés al proyecto de Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social por 80 votos a favor y 132 en contra.

Se rechaza la propuesta de veto del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos al Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2004 por 80 votos a favor y 133 en contra.

Se rechaza la propuesta de veto del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos al proyecto de Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social por 80 votos a favor y 133 en contra.

Se rechaza la propuesta de veto del Grupo Mixto, señor Quintana González, al Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2004 por 80 votos a favor y 133 en contra.

Se rechaza la propuesta de veto del Grupo Mixto, señor Quintana González, al proyecto de Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social por 80 votos a favor y 133 en contra.

Se rechaza la propuesta de veto del Grupo Mixto, señor Mur Bernad, al Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2004 por 80 votos a favor y 132 en contra.

Se rechaza la propuesta de veto del Grupo Mixto, señor Mur Bernad, al proyecto de Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social por 79 votos a favor, 132 en contra y una abstención.

Se rechaza la propuesta de veto del Grupo Mixto, señores Cabrero Palomares y Cuenca Cañizares, al Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2004 por 80 votos a favor y 133 en contra.

Se rechaza la propuesta de veto del Grupo Mixto, señores Cabrero Palomares y Cuenca Cañizares, al proyecto de Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social por 80 votos a favor y 133 en contra.

De la Comisión de Presupuestos en relación con el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2004 10590

Comienza el debate de las enmiendas al articulado.

Título I. Artículos 1 a 12. Anexos I y II.

El señor Cabrero Palomares, del Grupo Mixto, defiende las enmiendas números 1 a 8 y da por defendida la número 583, del señor Quintana González, del mismo grupo parlamentario. El señor Aleu i Jornet defiende las enmiendas números 1288, 1289 y 1357 a 1359, del Grupo Entesa Catalana de Progrés. El señor Cambra i Sánchez defiende las enmiendas números 1662 a 1665, del Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió. El señor Mesa Ciriza de-

fiende las enmiendas números 837 y 900 a 902, del Grupo Socialista. El señor Azuara Carod consume un turno en contra. En turno de portavoces, hacen uso de la palabra los señores Aleu i Jornet, por el Grupo Entesa Catalana de Progrés; Mesa Ciriza, por el Grupo Socialista, y Azuara Carod, por el Grupo Popular.

Título II. Capítulo I. Artículos 13 y 14. Anexos IV, V y VI.

El señor Cabrero Palomares da por defendida la enmienda número 584, del señor Quintana González, del Grupo Mixto. La señora Novillo Moreno consume un turno en contra.

Título II. Capítulo II. Artículos 15 a 17. Capítulo III. Artículo 18.

No han sido objeto de enmiendas.

Título III. Artículos 19 a 35. Anexos X y XI.

El señor Cabrero Palomares, del Grupo Mixto, defiende las enmiendas números 9 a 24 y da por defendidas las números 585 a 629, del señor Quintana González, del mismo grupo parlamentario. El señor Aleu i Jornet defiende las enmiendas números 1290 a 1297, del Grupo Entesa Catalana de Progrés. El señor Cambra i Sánchez defiende las enmiendas números 1622 a 1628, el Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió. El señor Arjona Santana defiende las enmiendas números 838 a 845, del Grupo Socialista. El señor Barquero Vázquez consume un turno en contra. En turno de portavoces, hacen uso de la palabra los señores Aleu i Jornet, por el Grupo Entesa Catalana de Progrés; Arjona Santana, por el Grupo Socialista, y Barquero Vázquez, por el Grupo Popular.

Título IV. Artículos 36 a 45. Título VIII. Artículos 97 y 98. Sección 07 (Clases Pasivas).

El señor Cabrero Palomares, del Grupo Mixto, defiende las enmiendas números 25 a 28 y da por defendidas las números 630 a 635, 641 y 642, del señor Quintana González, del mismo grupo parlamentario. El señor Aurrekoetxea Bergara defiende la enmienda número 489, del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos. El señor Aleu i Jornet defiende las enmiendas números 1298 a 1306 y 1330, del Grupo Entesa Catalana de Progrés. El señor Cambra i Sánchez defiende las enmiendas números 1629 a 1631, 1637 y 1638, del Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió. El señor Romero Calero defiende las enmiendas números 846 a 854 y 873, del Grupo Socialista. El señor Barquero Vázquez y la señora Do Campo Piñeiro consumen un turno en contra. En turno de portavoces, hacen uso de la palabra los señores Cambra i Sánchez, por el Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió; Romero

Calero, por el Grupo Socialista, y Barquero Vázquez, por el Grupo Popular.

Título V. Artículos 46 a 56. Anexo III. Sección 06 (Deuda Pública)

El señor Cabrero Palomares, del Grupo Mixto, defiende las enmiendas números 29 a 31. El señor Aleu i Jornet da por defendidas las enmiendas números 1307 y 1308, así como las números 1309 a 1311, al Título VI, del Grupo Entesa Catalana de Progrés. El señor Mesa Ciriza defiende las enmiendas números 855 y 856, del Grupo Socialista. El señor Fernández Cucurull consume un turno en contra.

Título VI. Artículos 57 a 63.

El señor Cabrero Palomares, del Grupo Mixto, da por defendidas las enmiendas números 32 y 33, así como la número 636, del señor Quintana González, del mismo grupo parlamentario. El señor Cambra i Sánchez defiende las enmiendas números 1632 a 1634, del Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió. El señor Lerma Blasco defiende la enmienda número 857, del Grupo Socialista. El señor Sánchez Sánchez-Seco consume un turno en contra. En turno de portavoces, hacen uso de la palabra los señores Lerma Blasco, por el

Grupo Socialista, y Sánchez Sánchez-Seco, por el Grupo Popular.

Título VII. Artículos 64 a 96. Sección 32 (Entes Territoriales). Sección 33 (Fondos de Compensación Interterritorial).

El señor Cabrero Palomares, del Grupo Mixto, da por defendidas las enmiendas números 34 a 46, 455 a 457 y 478 a 480, así como la número 553, del señor Mur Bernad, y 637 a 640, del señor Quintana González, del mismo grupo parlamentario. El señor Aleu i Jornet defiende las enmiendas números 1313 a 1329 y 1615 a 1617, del Grupo Entesa Catalana de Progrés. El señor Cambra i Sánchez defiende las enmiendas números 1635, 1636 y 1868 a 1872, del Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió. El señor Mesa Ciriza defiende las enmiendas números 858 a 872 y 1270 a 1279, del Grupo Socialista. El señor Gil-Ortega Rincón y la señora Carrasco Lorenzo consumen un turno en contra. En turno de portavoces, hacen uso de la palabra el señor Aleu i Jornet, por el Grupo Entesa Catalana de Progrés, y la señora Carrasco Lorenzo, por el Grupo Popular.

Se suspende la sesión a las veintidós horas y cinco minutos.

Se abre la sesión a las doce horas y cinco minutos.

El señor PRESIDENTE: Señorías, se abre la sesión.

— JURAMENTO O PROMESA DE ACATAMIENTO A LA CONSTITUCIÓN DE LOS EXCELENTÍSIMOS SEÑORES SENADORES DON ANTONIO GERMÁN BETETA BARREDA, DON LUIS EDUARDO CORTÉS MUÑOZ, DON EDUARDO CUENCA CAÑIZARES, DON PEDRO FELICIANO SABANDO SUÁREZ, DON RAFAEL SIMANCAS SIMANCAS Y DON JUAN VAN-HALEN ACEDO (500/000324, 500/000323, 500/000327, 500/000326, 500/000328, 500/000325).

El señor PRESIDENTE: Asunto previo al orden del día. Procede el juramento o promesa de acatamiento a la Constitución de los excelentísimos señores don Antonio Germán Beteta Barreda, don Luis Eduardo Cortés Muñoz, don Eduardo Cuenca Cañizares, don Pedro Feliciano Sabando Suárez, don Rafael Simancas Simancas y don Juan Van-Halen Acedo, quienes serán llamados a la tribuna para prestar juramento o promesa de acatamiento a la Constitución. (*Pausa.*)

Excelentísimo señor don Antonio Germán Beteta Barreda, ¿juráis o prometéis acatar la Constitución?

El señor BETETA BARREDA: Sí, juro.

El señor PRESIDENTE: Habiendo prestado acatamiento a la Constitución, el excelentísimo señor don Antonio Germán Beteta Barrera ha adquirido la condición plena de senador. (*Aplausos.*)

Excelentísimo señor don Luis Eduardo Cortés Muñoz, ¿juráis o prometéis acatar la Constitución?

El señor CORTÉS MUÑOZ: Sí, juro.

El señor PRESIDENTE: Habiendo prestado acatamiento a la Constitución, el excelentísimo señor don Luis Eduardo Cortés Muñoz ha adquirido la condición plena de senador. (*Aplausos.*)

Excelentísimo señor don Pedro Feliciano Sabando Suárez, ¿juráis o prometéis acatar la Constitución?

El señor SABANDO SUÁREZ: Sí, prometo.

El señor PRESIDENTE: Habiendo prestado acatamiento a la Constitución, el excelentísimo señor don Pedro Feliciano Sabando Suárez ha adquirido la condición plena de senador. (*Aplausos.*)

Excelentísimo señor don Rafael Simancas Simancas, ¿juráis o prometéis acatar la Constitución?

El señor SIMANCAS SIMANCAS: Sí, prometo.

El señor PRESIDENTE: Habiendo prestado acatamiento a la Constitución, el excelentísimo señor don Ra-

fael Simancas Simancas ha adquirido la condición plena de senador. (*Aplausos.*)

Excelentísimo señor don Eduardo Cuenca Cañizares, ¿juráis o prometéis acatar la Constitución?

El señor CUENCA CAÑIZARES: Sí, prometo.

El señor PRESIDENTE: Habiendo prestado acatamiento a la Constitución, el excelentísimo señor don Eduardo Cuenca Cañizares ha adquirido la condición plena de senador. (*Aplausos.*)

Excelentísimo señor don Juan Van-Halen Acedo, ¿juráis o prometéis acatar la Constitución?

El señor VAN-HALEN ACEDO: Sí, juro.

El señor PRESIDENTE: Habiendo prestado acatamiento a la Constitución el excelentísimo señor don Juan Van-Halen Acedo ha adquirido la condición plena de senador. (*Aplausos.*)

ACTAS:

— LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LAS ACTAS DE LAS SESIONES ANTERIORES, CELEBRADAS LOS PASADOS DÍAS 9 y 10 DE DICIEMBRE DE 2003.

El señor PRESIDENTE: Punto primero del orden del día: Actas. Lectura y aprobación, si procede, de las actas de las sesiones anteriores celebradas los pasados días 9 y 10 de diciembre de 2003.

¿Alguna observación? (*Pausa.*) ¿Pueden aprobarse por asentimiento? (*Pausa.*) Quedan aprobadas.

DICTÁMENES DE COMISIONES SOBRE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS:

— DE LA COMISIÓN DE PRESUPUESTOS EN RELACIÓN CON EL PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA EL AÑO 2004 (S. 621/000172) (C. D. 121/000173).

— DE LA COMISIÓN DE ECONOMÍA, COMERCIO Y TURISMO EN RELACIÓN CON EL PROYECTO DE LEY DE MEDIDAS FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DEL ORDEN SOCIAL (S. 621/000173) (C. D. 121/000174).

El señor PRESIDENTE: Punto segundo del orden del día: Dictámenes de comisiones sobre proyectos y proposiciones de ley remitidos por el Congreso de los Diputados. De la Comisión de Presupuestos en relación con el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2004 y de la Comisión de Economía, Comercio y Tu-

rismo en relación con el proyecto de ley de medidas fiscales, administrativas y del orden social.

La presentación del dictamen del proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2004 se llevará a cabo por el representante designado por la Comisión, el senador Alcalde.

El senador Alcalde tiene la palabra.

El señor ALCALDE SÁNCHEZ: Gracias, señor presidente.

Señorías, con fecha de 25 de noviembre de 2003 fue publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales» el texto remitido por el Congreso de los Diputados, trasladándose, al amparo de lo dispuesto en el artículo 104 del Reglamento del Senado, este proyecto de ley a la Comisión de Presupuestos.

El plazo de presentación de enmiendas quedó fijado hasta el día 1 de diciembre. Se presentaron seis propuestas de veto de los senadores Cabrero Palomares y Cuenca Cañizares, del Grupo Parlamentario Mixto, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos; del señor Quintana González, del Grupo Parlamentario Mixto; del senador Mur Bernad, del Grupo Parlamentario Mixto; del Grupo Parlamentario Socialista; y del Grupo Parlamentario de Entesa Catalana de Progrés. Asimismo, se formularon a los distintos títulos, artículos y secciones 1.963 enmiendas.

El día 10 de diciembre, la ponencia designada, integrada por los senadores don Francisco Xabier Albistur Marin, don Segundo Bru Parra, don Sixte Cambra i Sánchez, don Manuel Cámara Fernández, don Eduardo Cuenca Cañizares, don Nicolás Fernández Cucurull, don José Mendoza Cabrera, don Fidel Mesa Ciriza y don Juan Pablo Sánchez Sánchez-Seco, emitió su informe incorporando al texto remitido por el Congreso de los Diputados diversas modificaciones.

El día 11 de diciembre se reunió la comisión y dictaminó el citado proyecto de ley introduciendo las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular números 1962 y 1963, la enmienda número 1.089 del Grupo Parlamentario Socialista, con una corrección y, dos enmiendas transaccionales sobre la base de las enmiendas 1.878 y 1.882 del Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria, así como dos enmiendas a las disposiciones adicionales quinta y séptima. El dictamen se ha publicado con fecha 15 de diciembre.

En el Pleno se debatirán las enmiendas mantenidas en los votos particulares presentados. Esto es todo cuanto tengo el honor de informar a esta Cámara.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

El dictamen del proyecto de ley de medidas fiscales, administrativas y del orden social, tiene la palabra el senador Murria.

El señor MURRIA CLIMENT: Gracias, señor presidente.

El proyecto de ley de medidas fiscales, administrativas y del orden social fue remitido por el Congreso de los Di-

putados el 25 de noviembre del presente año 2003 y publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales» el 25 de noviembre del mismo año. El plazo de presentación de enmiendas terminó el 1º de diciembre del presente año. Fueron presentados 6 vetos y 693 enmiendas, publicándose en los boletines oficiales de fecha 4 de diciembre.

La comisión se reunió para designar la ponencia encargada de informar el proyecto de ley el 25 de noviembre del presente año. Asimismo, la ponencia se reunió el 4 de diciembre del año 2003 y emitió su informe incorporando enmiendas al texto remitido por el Congreso. El informe fue publicado, asimismo, en el Boletín Oficial de las Cortes Generales de 11 de diciembre de 2003.

La comisión se reunió para dictaminar el proyecto de ley el 11 de diciembre, incorporando modificaciones al texto del informe. El dictamen fue publicado, asimismo, en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales» el 15 de diciembre de 2003.

Se han presentado votos particulares por los grupos parlamentarios Mixto, de Coalición Canaria, de Senadores Nacionalistas Vascos, de Entesa Catalana de Progrés, de Convergència i Unió y Socialista. A todo ello, deberán incorporarse las correcciones técnicas y enmiendas transaccionales que, en su caso, sean aprobadas durante esta sesión plenaria.

A estas alturas de la presente legislatura, quisiera agradecer el comportamiento y el buen trabajo realizado por todos los senadores que componen la Comisión de Economía, Comercio y Turismo, así como del personal a ella adscrito, pues sin su colaboración y buen hacer no hubiera sido posible el trabajo realizado por la misma.

Nada más y muchas gracias. (*Aplausos.*)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

En nombre del Gobierno, tiene la palabra el Ministro de Hacienda.

El señor MINISTRO DE HACIENDA (Montoro Romero): Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, tengo el honor de subir a esta tribuna un año más para presentar y defender, en nombre del Gobierno, el proyecto de ley de presupuestos generales del Estado para el año 2004 y el proyecto de ley de medidas fiscales, administrativas y del orden social.

Deseo, en primer lugar, agradecer las valoraciones y aportaciones de los diferentes grupos políticos en las numerosas comparecencias y reuniones de las últimas semanas, que están mejorando el proyecto inicial presentado por el Gobierno y la asignación de los recursos públicos para el próximo ejercicio.

Éstos, los presupuestos que hoy presento, están a caballo entre dos legislaturas. Con estos presupuestos se culmina una etapa de gobiernos del Partido Popular presididos por José María Aznar; una etapa de crecimiento con estabilidad, intensa creación de empleo y de significativa convergencia económica con la media europea. Por primera vez en la historia de nuestra democracia, las cuentas públicas se han saldado sin déficit. El Gobierno ha bajado los impuestos y la mayor recaudación ha permitido incre-

mentar la inversión, sanear la Seguridad Social y mejorar las prestaciones para las personas que necesitan más apoyo público.

Estos presupuestos abren, también, un nuevo tiempo político en nuestro país; con estos presupuestos se celebrarán unas elecciones generales en España y están destinados, si los ciudadanos españoles nos dan su confianza, a ser ejecutados desde un gobierno del Partido Popular presidido por don Mariano Rajoy, capaz de afrontar los desafíos y las oportunidades de la sociedad española en el próximo futuro.

Los Presupuestos Generales del Estado para el año 2004 siguen de cerca las principales preocupaciones de los españoles y, por esa razón, ponen su acento en la creación de empleo, la seguridad ciudadana y la bajada de los impuestos en un contexto de estabilidad presupuestaria.

Los ciudadanos saben que los presupuestos que apruebe esta Cámara serán los mismos que se cumplan fielmente a lo largo del próximo ejercicio. Saben, por experiencia, que los gobiernos del Partido Popular cumplen sus presupuestos; de hecho, el año 2003 se va a cerrar con un superávit del 0,5 por ciento del producto interior bruto. Superávit que se consigue con un elevado grado de ejecución del gasto —en torno al 98 por ciento—, y gracias a un crecimiento de los ingresos que se sitúa claramente por encima de lo previsto inicialmente.

De la misma forma que el déficit es un impuesto que se paga en años posteriores con intereses, el superávit nos permite bajar los impuestos de manera permanente y disfrutar de menores tipos de interés. Gracias a la estabilidad presupuestaria hemos eliminado la prima de riesgo con las economías más avanzadas, como es el caso de Alemania, e incluso algunos días el bono español a 10 años ha cotizado mejor que la deuda de esas economías. Para que nos hagamos una idea de lo que esto significa para el bolsillo de todos los españoles, basta con darse cuenta de que cada reducción de un punto básico de nuestro diferencial con la deuda alemana supone un ahorro de alrededor de 40 millones de euros en la nueva deuda emitida. Otro ejemplo claro de los beneficios de una apuesta creíble por la estabilidad presupuestaria es el siguiente: el próximo año la deuda pública en relación con el producto interior bruto estará por debajo del 50 por ciento; si mantuviésemos los niveles de 1995 los españoles deberíamos 152.000 millones más de lo que debemos ahora, esto quiere decir que cada ciudadano debería una media de 3.700 euros más que tendría que pagarse con mayores impuestos.

En los últimos años la estrategia de política económica de los gobiernos ha permitido dar paso a un nuevo modelo de crecimiento económico en España, un modelo cuyas características esenciales son las siguientes: la capacidad diferencial de crecimiento económico, la intensa creación de empleo, las nuevas condiciones de financiación de que disfruta nuestra economía y, por último, el intenso proceso de internacionalización acometido también por la economía española y, en definitiva, por nuestras empresas.

La economía española, en efecto, está demostrando una capacidad hasta ahora inexistente para crecer más que nuestros socios comunitarios tanto en las fases expansivas

como en las recesivas del ciclo económico mundial. Entre 1996 y 2002, período que incluye una etapa de expansión y otra de desaceleración económica internacional, el crecimiento promedio de la economía española ha sido del 3,4 por ciento, cifra que se sitúa 1,2 puntos porcentuales por encima del promedio comunitario. Esto se ha traducido en un importante avance en términos de convergencia real con nuestros socios de la Unión: del 78,2 por ciento de la renta per cápita comunitaria que alcanzábamos el año 1995 hemos pasado al 85,5 por ciento con que se cerrará el ejercicio 2003.

Las cifras más recientes confirman la capacidad de la economía española para seguir creciendo más que nuestros socios europeos cuando las cosas se han complicado profundamente en la escena internacional. En efecto, en la situación económica internacional en la que nos encontramos la economía española está creciendo al 2,4 por ciento en el tercer trimestre de este año, una tasa que multiplica por seis las que logrará el promedio del área euro en este ejercicio de 2003 y que demuestra que nuestro país está en la mejor situación posible para poder beneficiarse plenamente de una recuperación de la economía mundial que cada vez está más próxima.

Señorías, decía antes que la segunda gran característica del nuevo modelo de crecimiento de la economía española es, ante todo y sobre todo, su importante capacidad de crear empleo, un crecimiento que no es sólo el más social de todos los posibles, sino que es el que necesitaba y sigue necesitando un país que, como el nuestro, partía de tasas de desempleo claramente por encima del 22 por ciento en el año 1995; tasas de desempleo, por cierto, que no sólo eran elevadas, sino que se acompañaban de tasas de actividad del 50 por ciento frente al más del 55 por ciento que alcanzan actualmente.

Desde 1996 España ha logrado crear 4.300.000 nuevos empleos y se han afiliado a la Seguridad Social un promedio de 1.500 personas cada día. Gracias a esta espectacular evolución España cuenta hoy con 16.800.000 personas ocupadas, frente a las 12.500.000 del año 1995, una cifra, por cierto, esta última —los 12.500.000 de ocupación— que era prácticamente la misma que teníamos en el año 1977, al comienzo de nuestra democracia. Además, el empleo que se ha creado en España en estos años es cada vez de mayor calidad: prácticamente el 80 por ciento del empleo creado desde 1996 —más de 3.400.000 personas— es empleo indefinido y se ha dirigido sobre todo a los sectores de población que tradicionalmente han tenido más problemas para incorporarse en buenas condiciones al mercado de trabajo, es decir, las mujeres, que han sumado casi 2.200.000 empleos desde 1996; los jóvenes, cuya población ocupada ha crecido en más de 880.000; y los parados de larga duración, que se han beneficiado de la creación de 1.300.000 nuevos empleos.

La tercera característica del nuevo modelo de crecimiento económico español es la mejora sustancial de nuestras condiciones de financiación, con unos tipos de interés reales a medio y largo plazo desconocidos hasta ahora en nuestro país y que son la consecuencia directa del hecho de considerarse un país fiable en los mercados financieros in-

ternacionales, un país atractivo en el que invertir, un país en el que trabajar, y sobre todo un país atractivo en el que vivir; un país fiable, como lo demuestra el hecho de que la deuda pública española haya sido reconocida como una de las más seguras por parte de las más importantes agencias de calificación internacionales del mundo; un país atractivo para invertir, como lo demuestra el hecho de que las inversiones extranjeras directas en España se hayan multiplicado por cinco desde 1995 hasta situarse en los 22.518 millones de euros durante el ejercicio 2002.

Un ejemplo adicional en este sentido es el dato conocido recientemente de que la inversión neta en España correspondiente a las entidades de tenencia de valores extranjeros en el primer semestre del año 2003 ha ascendido a 5.905 millones de euros, con un aumento respecto del mismo período del año anterior del 44,48 por ciento. Somos hoy un país atractivo para trabajar y para vivir, como lo demuestra la elevada creación de empleo de estos años, el espectacular incremento en el número de inmigrantes afiliados a la Seguridad Social y la reciente revisión al alza de la población española.

Por último, como cuarta característica del modelo de crecimiento económico, quiero destacar la cada vez más firme presencia de nuestras empresas en los mercados internacionales. Desde 1996 hemos asistido al mayor proceso de internacionalización de toda la historia de la economía española, un proceso que nos hace ser hoy, con un grado de apertura superior al 60 por ciento, una de las economías desarrolladas más abiertas a los flujos internacionales de bienes y servicios, y una apuesta que ha permitido aumentar de manera decisiva la presencia directa de nuestras empresas en el exterior.

A finales de 2002, el stock de inversión directa en el exterior significaba el 30 por ciento de nuestro producto interior bruto, cifra que contrasta con el 6 por ciento que tenía esta variable en 1995 y que es demostrativa del cada vez más importante papel que le corresponde a España en el concierto internacional.

Señorías, el importante progreso económico logrado por España en estos últimos ocho años no ha surgido de la nada, sino que es fruto de un modelo de política económica coherente, asumido como propio por el Partido Popular y que se ha concentrado en potenciar los factores estables de competitividad en los que debe basarse el crecimiento a medio y largo plazo de toda economía desarrollada, un modelo que, como ha reconocido el Fondo Monetario Internacional en su último informe sobre la economía española, se basa en dos pilares fundamentales. En primer lugar, en un intenso proceso de reforma estructural y de privatizaciones, que ha logrado aumentar de manera muy significativa tanto nuestro potencial de crecimiento económico como la capacidad de adaptación de nuestra economía a perturbaciones de origen tanto interno como externo.

En segundo lugar, se basa en una apuesta creíble por la disciplina presupuestaria, entendida no como un dogma, sino como un instrumento muy poderoso a la hora de apoyar el crecimiento y la estabilidad macroeconómica. Afortunadamente, son cada vez menos los que ponen en duda los significativos efectos positivos que la estabilidad pre-

supuestaria ha generado y sigue generando sobre el comportamiento de nuestra economía.

Gracias a la estabilidad presupuestaria se elimina, como ya apunté antes, la prima de riesgo que tradicionalmente ha afectado a nuestra economía y que en el año 1995 llegó a estar situada en los 600 puntos básicos respecto del bono alemán a diez años.

Se mejora el funcionamiento de los estabilizadores automáticos. Ganamos margen para seguir apostando por la inversión pública. Podemos acometer reducciones permanentes de impuestos que aumentan la equidad y eficiencia de nuestro sistema tributario haciéndolo más favorable a la oferta de trabajo, al ahorro y a la inversión. Y, por último, se evitan presiones indebidas sobre la demanda agregada y se contribuye, de este modo, a garantizar que nuestro diferencial de inflación se mantenga en niveles compatibles con la competitividad exterior de nuestra economía.

Señorías, los presupuestos para el año 2004 han sido elaborados conforme a los preceptos de la Ley General de Estabilidad. Son unos presupuestos, por tanto, elaborados en el respeto al objetivo de equilibrio presupuestario y al límite de gasto no financiero, que fueron ratificados por esta Cámara el pasado 8 de abril.

Los Presupuestos Generales del Estado para 2004, el cuarto consecutivo que se cerrará en equilibrio, prevé un incremento del gasto no financiero, en términos homogéneos, del 3,9 por ciento, hasta alcanzar el límite de gasto de 117.260 millones de euros. Esto supone que el gasto crece por debajo del producto interior bruto y que, por tanto, el año que viene seguiremos aplicando los mismos principios de austeridad en el gasto público sobre los que ha girado la política de consolidación fiscal que estamos aplicando desde 1996.

Junto con esta evolución moderada del gasto, el presupuesto para 2004 contiene una prudente previsión de ingresos, con un crecimiento —antes de descontar la participación de comunidades autónomas y entidades locales—, del 5,9 por ciento.

Señorías, estos son unos presupuestos que potencian el crecimiento económico, la creación de empleo, la seguridad ciudadana, la solidaridad y, en definitiva, la calidad de vida de todos los españoles. Los presupuestos para 2004 reconocen la importancia que la política de gasto social tiene para el desarrollo de nuestra convivencia. Prácticamente, la mitad del total del gasto no financiero de la Administración central en 2004, es decir, 110.000 millones de euros, se destina a gasto social. Este gasto se incrementa un 7 por ciento en relación con el año 2003. Con estos presupuestos aumentamos los niveles de cobertura, los colectivos beneficiarios y el nivel de las prestaciones sociales.

Un año más, continuamos el proceso de separación de fuentes y consolidamos la estabilidad financiera del sistema de Seguridad Social con un nuevo superávit. Este saldo positivo va a permitir aumentar el fondo de reserva para pensiones en más de 3.000 millones de euros en 2004. Gracias a esto, y después de la última dotación de 2.000 millones de euros —aprobada por el Consejo de Ministros el pasado viernes—, el fondo contará con más de 15.000 millones de euros a finales del año que viene.

En 2004, habrá 71.633 millones de euros destinados a atender el gasto en pensiones —un 7,1 por ciento más que en 2003—, lo que nos permitirá no sólo mantener el poder adquisitivo de las mismas sino aumentarlas y, de forma particular, aumentar y mejorar las pensiones de viudedad.

Cinco mil ochocientos veintiocho millones de euros, un 8,8 por ciento más que en 2003, se destinarán a la financiación de las políticas de fomento del empleo. Más de 7.550 millones de euros van destinados a la atención de prestaciones familiares —ayudas por maternidad, pensiones no contributivas y apoyo a determinados colectivos desfavorecidos: los minusválidos, emigrantes y afectados por el síndrome tóxico— así como al conjunto de acciones incluidas en el plan de acción para personas mayores 2003-2007 y a garantizar el salario de los trabajadores en los casos de suspensión de pagos, quiebras o concursos de acreedores de las empresas en que trabajan.

Tres mil quinientos setenta millones de euros van destinados a financiar la Sanidad, una vez culminado el traspaso de competencias a las comunidades autónomas de régimen común. Con estos recursos se financia el fondo de cohesión sanitaria, a través del que se hace efectiva la igualdad territorial en el acceso a las prestaciones sanitarias y se garantiza la atención a todos los ciudadanos procedentes de la Unión Europea y de países con los que tenemos suscritos convenios de asistencia sanitaria recíproca.

Transferidas ya las competencias en la materia a las comunidades autónomas, se destinarán 1.543 millones de euros para garantizar una formación de calidad y la igualdad de oportunidades en el acceso a la educación, así como la continuidad de los estudios; en particular, más de 810 millones de euros, el 52,5 por ciento del total del presupuesto de gastos no financieros para esta política, y un 9 por ciento más que en 2003, se destinará a la concesión de becas.

La atención de la política de vivienda cuenta con 661 millones de euros, destinados a la financiación de las actuaciones previstas en el marco del Plan de vivienda 2002-2005, cantidad a la que hay que sumar los beneficios fiscales destinados a incentivar la política de vivienda, tanto en el IRPF como en IVA, por un importe superior a los 5.500 millones de euros, un 14,55 por ciento más que en 2003. Con ello, el esfuerzo total del Estado en política de vivienda asciende a 6.178,5 millones de euros, un 88 por ciento más de lo que se destinó a esta política en 1995.

Más de 8.000 millones de euros van destinados a la modernización de los sectores agrario y pesquero, fomentando la formación profesional, la incorporación de la mujer y de los jóvenes al medio rural, y contribuyendo al desarrollo de la industria agroalimentaria y de la transformación pesquera.

La inversión pública y, en particular, la inversión en infraestructuras, que permitirá seguir avanzando en proyectos básicos, como la ampliación de las redes de autovías y autopistas de alta capacidad, el aumento de red de ferrocarriles de alta velocidad, la modernización de los puertos y aeropuertos españoles, el desarrollo del Plan Hidrológico Nacional y las actuaciones encuadradas en el programa de protección y mejora del medio natural, como la política fo-

restal y la inversión en nuestros trece parques nacionales, se configura como un elemento imprescindible para aumentar el potencial de crecimiento de la economía.

De hecho, en el próximo año el esfuerzo inversor del sector público estatal alcanzará los 27.423 millones de euros, lo que supone invertir un 10,5 por ciento más que en 2003 y más del doble de lo que se destinó a esta finalidad en 1996.

Este esfuerzo inversor del sector público estatal tiene un doble impacto positivo sobre la economía española, por un lado genera un efecto expansivo directo sobre la demanda agregada y la actividad económica; por otro, se transforma en una mayor dotación de capital público, que aumenta el PIB potencial de nuestra economía. En concreto, el efecto inducido del mayor nivel de capital público previsto en los presupuestos para el 2004 sobre la inversión privada puede cifrarse en el entorno de 9.000 millones de euros, permitiendo, además, la creación de 50.000 nuevos empleos. Así, hemos estimado que el impacto del esfuerzo inversor del sector público estatal sobre la producción potencial de la economía española es de alrededor de ocho décimas de producto interior bruto.

El otro gran aval para garantizar el crecimiento de la economía es la dotación de la política de investigación e innovación tecnológica. En los presupuestos para 2004 se acentúa el esfuerzo en esta política con una dotación total superior a los 4.400 millones de euros, un 9,1 por ciento más que en 2003 y cerca de cuatro veces más de lo que se invirtió en 1995.

El presupuesto para 2004 da prioridad a los derechos fundamentales a través de mejoras en las dotaciones de crédito para los servicios públicos como la justicia, la seguridad ciudadana y la defensa. En este sentido, cerca de 5.750 millones de euros se destinan a atender los gastos relacionados con la seguridad ciudadana y, en particular, al desarrollo del Plan de Lucha Contra la Delincuencia. Cerca de 6.500 millones de euros se destinan a atender los gastos comprendidos dentro de la política de defensa, consolidando nuestro sistema de Fuerzas Armadas profesionales y dotando los recursos necesarios para adaptarnos al nuevo escenario económico internacional.

La política de justicia cuenta en 2004 con una dotación de 1.117 millones de euros, importe que financiará las actuaciones derivadas del Plan de Lucha Contra la Delincuencia y el desarrollo de la tercera fase del Pacto de Estado para la Reforma de la Justicia, que comprende, entre otras actuaciones, la implantación de juicios rápidos, la Carta de Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia, la asistencia jurídica gratuita y el turno de oficio.

Señor Presidente, las reformas tributarias realizadas durante estas legislaturas tienen un carácter estructural y han conseguido, además de reducir los impuestos que pagan los contribuyentes españoles, dotar a la economía española de un sistema impositivo que fomenta el crecimiento, la competitividad y el empleo. En el año 2004, las familias notarán de nuevo los efectos de la reforma del IRPF puesta en práctica desde enero de este año. A las menores retenciones que mes a mes tienen los contribuyentes se añade en el año 2004 el ahorro que experimentarán al realizar su pri-

mera declaración en el nuevo impuesto. Nuestras familias se ahorrarán 3.800 millones de euros en el pago del Impuesto sobre la Renta.

Gracias a las dos reformas del IRPF emprendidas por los gobiernos del Partido Popular, el impuesto medio pagado por los contribuyentes españoles en el año 2003 es un 25 por ciento inferior al satisfecho en 1998 y un 78 por ciento inferior para los que ganan menos de 12.000 euros al año. Los españoles tenemos ahora un impuesto más reducido, más eficiente, más justo y, por tanto, más equitativo.

Entre las medidas que seguirán irradiando sus efectos positivos durante el próximo año, permítanme que les destaque la deducción para las madres trabajadoras con hijos menores de tres años que trabajan fuera del hogar, las cuales pueden beneficiarse de una ayuda de 100 euros mensuales. Esta medida, que, de hecho, es un impuesto negativo sobre la renta, está siendo cada día más empleada y son ya cerca de 600.000 las madres que han recibido esta ayuda en lo que ha transcurrido de año.

También hemos introducido importantes reformas estructurales en el ámbito de la fiscalidad empresarial. Las medidas adoptadas desde 1996 han mejorado la tributación de las pyme, permitiendo que más del 80 por ciento de los declarantes del Impuesto sobre Sociedades tributen a un tipo más reducido, y también han favorecido la inversión productiva, la capacidad financiera, la internacionalización y la renovación tecnológica de las empresas españolas.

De hecho, las empresas españolas tienen ahora el régimen fiscal para las actividades de I+D+I más beneficioso de toda la OCDE. Hoy, de cada cien euros que nuestras empresas dedican a I+D+I pueden deducirse una media de 33 euros. Además, hemos eliminado el Impuesto sobre Actividades Económicas para los autónomos profesionales y pequeñas y medianas empresas, al tiempo que hemos promovido la congelación de los módulos en el IRPF y en el IVA.

En la imposición indirecta también hemos apostado por mantener, con carácter general, los mismos tipos impositivos que durante estos años. Es más, la congelación de los impuestos especiales en los últimos años ha supuesto para los ciudadanos y para las empresas españolas un ahorro acumulado de casi 1.800 millones de euros, a los que hay que añadir los 300 millones de euros estimados para el próximo año. Las reformas estructurales emprendidas tanto en la imposición directa como en la indirecta suman, en conjunto, un ahorro fiscal para el año 2004 superior a los 4.800 millones de euros.

Señorías, los impuestos han bajado pero el volumen de ingresos que recibe el Estado procedentes de la recaudación tributaria ha aumentado. De hecho, la recaudación líquida de los principales impuestos gestionados por la Agencia Tributaria ha crecido, conforme a las estimaciones para este año en más de un 80 por ciento en comparación con las cifras de 1995, crecimiento claramente superior al registrado por el producto interior bruto en este mismo período, que no llega al 70 por ciento.

La evolución favorable de los ingresos tributarios se produce gracias a los resultados de crecimiento de nuestra

económica, gracias a la creación de empleo, pero también gracias a la mejora de los servicios de apoyo al contribuyente, que favorecen el cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias, y gracias también al reforzamiento de la eficacia de nuestras unidades de lucha contra el fraude.

En este sentido, los resultados ordinarios de control de la Agencia Tributaria en el año 2002 ascendieron a 11.046 millones de euros, un 13 por ciento más que en el año 2001. Los datos del presente año, hasta agosto, suman 8.517 millones de euros, casi un 19 por ciento más que los del mismo período del año anterior. Pese a las dificultades derivadas de la necesidad de homogeneizar datos en las comparaciones interanuales a largo plazo, lo cierto es que en el período 1995-2002 los resultados de control de la Agencia Tributaria se han incrementado un 86,62 por ciento.

Señorías, uno de los mayores avances de los últimos años ha sido la contribución al proceso de descentralización política y administrativa del sector público. Este proceso, tanto en su vertiente financiera como tributaria, ha tenido como principal objetivo dotar a las administraciones territoriales de mayor autonomía y responsabilidad en ingresos y gastos.

Así, el desarrollo del Estado de las Autonomías en los 25 años de Constitución nos lleva a que el peso de la Administración central en el conjunto del gasto consolidado del sector público haya pasado de representar el 91 por ciento en 1978 al 53,5 por ciento actual. Este proceso ha ido acelerándose progresivamente. Entre 1978 y 1995 el sector público se descentralizó a un ritmo medio de 1,3 puntos anuales; entre 1996 y 2000 este ritmo fue de 1,58 puntos, y entre 2000 y 2003 aumentó hasta 2,23 puntos. Es, pues, en estos últimos años, con un Gobierno del Partido Popular que ostenta la mayoría absoluta, cuando el ritmo de descentralización ha sido en España más elevado.

En línea con la actual descentralización política y administrativa se hacía imprescindible emprender las reformas que dotaran a las administraciones territoriales de los recursos necesarios para hacer frente a ese mayor volumen de gasto. Durante los años 2002 y 2003 se ha puesto en práctica un sistema de financiación autonómica estable que otorga a las comunidades autónomas de régimen común mayores competencias en gasto y unos ingresos estables suficientes y con amplia capacidad normativa. Por primera vez en España se ha aprobado por unanimidad un sistema de financiación autonómica, un sistema que logra un equilibrio entre las diferentes aspiraciones y necesidades de todas y cada una de las comunidades autónomas, por lo que mereció el voto favorable de todas ellas.

La utilización de un conjunto adecuado de variables para identificar las necesidades de gasto de cada comunidad es lo que ha permitido alcanzar ese equilibrio. Este sistema, aceptado por todos, es solidario, estable y suficiente... (*Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.*) ... porque tiene en cuenta, en su debida proporción, las variables población, superficie, dispersión, insularidad, número de personas atendidas por el sistema sanitario y personas mayores de 65 años. Cualquier reforma

que pretenda modificar el actual sistema deberá contar al menos con el mismo consenso que el actual, respetando la solidaridad y suficiencia que este sistema ofrece a todas las comunidades autónomas.

Durante estos días estamos asistiendo a la formación de diversas coaliciones de gobierno de partidos de izquierda que proponen desequilibrar el sistema a favor de las comunidades autónomas más ricas y en perjuicio, sin duda alguna, de las más pobres. Ello supone una quiebra absoluta del principio de solidaridad, tanto entre personas, como entre territorios, principio éste recogido en nuestra Constitución. Por otra parte, cualquier incremento de financiación a favor de una comunidad que vaya a costa de las demás tiene necesariamente que derivarse de un incremento de los impuestos que pagamos todos los ciudadanos. En noviembre de 2002 se firmó un acuerdo con la Federación Española de Municipios y Provincias que ha dado paso a un nuevo sistema de financiación estable, corresponsable y moderno. A partir de 2003 los ayuntamientos tienen mayor capacidad normativa sobre cinco impuestos locales y ha desaparecido el Impuesto Sobre Actividades Económicas para más de dos millones 200.000 contribuyentes.

Asimismo la renovación, tras 20 años de vigencia del concierto económico con el País Vasco y la actualización del convenio económico con Navarra, han supuesto un paso decisivo en el proceso de normalización y vertebración de las haciendas territoriales en el conjunto de España. Los presupuestos para 2004 recogen precisamente la madurez de nuestro sistema de financiación autonómico y al tiempo instrumentan como primer año la cesión de los impuestos estatales a las entidades locales. Estamos asistiendo a una rápida culminación del proceso de descentralización administrativa emprendido hace 25 años, y año tras año las estructuras de nuestros presupuestos y de los de las entidades territoriales acusan estos cambios. Las comunidades autónomas y las entidades locales ganan autonomía y responsabilidad y sus haciendas comparten con la hacienda del Estado las obligaciones y los recursos.

Respecto al trámite parlamentario de los presupuestos y de la Ley de medidas fiscales, administrativas y del orden social, me gustaría destacar alguna de las mejoras introducidas: se han declarado exentas del IRPF las becas públicas y las concedidas por las entidades sin fines lucrativos para investigación en el marco del estatuto del becario de investigación y las ayudas públicas por acogimiento de menores; se amplía el régimen especial de entidades de arrendamiento de viviendas del impuesto de sociedades para aquellas entidades que hayan construido, promovido o adquirido viviendas para alquiler y cumplan, entre otros requisitos, que el contrato de arrendamiento no incorpore opción de compra y que las viviendas permanezcan arrendadas durante al menos 15 años.

Otra modificación importante es la prórroga del plan Prever, que además se amplía para coches seminuevos, con antigüedad no superior a cinco años. Otras medidas son las propuestas en torno al acontecimiento de la Copa América 2007, que va a celebrarse en Valencia.

Por otra parte, es importante destacar la subida en 2004 de las pensiones más bajas de los funcionarios, por la que

más de 210.000 pensionistas de jubilación o retiro y de viudedad acogidos a la regulación anterior a 1985 verán incrementada su pensión en un 3 por ciento y en un 4 por ciento respectivamente. Con esta medida se inicia una mejora progresiva de dichas pensiones, de acuerdo con el compromiso asumido por el Partido Popular en su programa de Gobierno. Adicionalmente, como todos los años, está prevista la actualización de la cuantía de todas las pensiones de acuerdo con la desviación real experimentada por el IPC en el período noviembre 2002-noviembre 2003, que ha ascendido, como sus señorías conocen, a 8 décimas.

Señor presidente, señorías, el fuerte avance que hemos vivido estos años en convergencia con Europa y creación de empleo no nos impide ver el camino que todavía falta hasta culminar el pleno desarrollo de la economía española. La novedad en este momento es que tanto el objetivo de convergencia real como el de pleno empleo están mucho más cercanos y la sociedad española ya no los percibe como objetivos utópicos. Ahora podemos avanzar con rapidez en la incorporación de la mujer al trabajo remunerado y podemos conseguir el pleno empleo antes de que termine esta década. Ahora estamos en posición de seguir apostando por un tejido productivo cada vez más innovador y con creciente proyección internacional. Ahora podemos seguir progresando en las prestaciones sociales, podemos afrontar con garantía el envejecimiento de la población y podemos mejorar la cobertura de las situaciones de dependencia y de exclusión social.

Después del esfuerzo de consolidación presupuestaria y del mantenimiento del equilibrio presupuestario en estos ejercicios de dificultades de la economía internacional y de la extensa reforma normativa de estos años, la Hacienda Pública está mejor preparada para contribuir a la consecución de estos objetivos económicos y sociales mediante la prolongación del equilibrio presupuestario, con un gasto público moderado, situado por debajo del 40 por ciento del producto interior bruto; nuevas bajadas de impuestos para estimular el ahorro, el crecimiento económico y el empleo y favorecer a los contribuyentes con rentas más bajas; un ritmo elevado y constante de inversión pública en infraestructuras e investigación y el fortalecimiento del sistema de protección social y de los servicios públicos básicos.

Muchas gracias, señor presidente. *(Aplausos.)*

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Iniciamos el debate de las propuestas de veto.

Según lo acordado por la Mesa y oída la Junta de Portavoces, se debatirán conjuntamente las propuestas de veto presentadas al proyecto de ley de presupuestos generales del Estado para el año 2004 y al proyecto de ley de medidas fiscales, administrativas y del orden social.

Se han presentado las siguientes propuestas de veto: dos del Grupo Parlamentario Socialista, referentes al proyecto de ley de presupuestos generales del Estado para el 2004 y al proyecto de ley de medidas fiscales, administrativas y del orden social; dos del Grupo Parlamentario de la Entesa Catalana de Progrés, referidas al proyecto de ley de presupuestos generales del Estado para el 2004 y al pro-

yecto de ley de medidas fiscales, administrativas y del orden social; dos del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, referentes al proyecto de ley de presupuestos generales del Estado para el 2004 y al proyecto de ley de medidas fiscales, administrativas y del orden social; cinco del Grupo Parlamentario Mixto: dos originariamente presentadas por los senadores Quintana González y Mur Bernad, referentes al proyecto de ley de presupuestos generales del Estado para 2004, y dos originariamente presentadas por los senadores Quintana González y Mur Bernad, y una originariamente presentada por los senadores Cabrero Palomares y Cuenca Cañizares al proyecto de ley de medidas fiscales, administrativas y del orden social; uno de don José Cabrero Palomares y don Eduardo Cuenca Cañizares, del Grupo Parlamentario Mixto, referente al proyecto de ley de presupuestos generales del Estado para el año 2004.

Tras la defensa de cada una de estas propuestas de veto cabrá un turno en contra; si no se hiciese uso de él, cabría un turno en contra final, al término de la defensa de todos los grupos de sus respectivos vetos. Sólo habrá, en cambio, un único turno final de portavoces de carácter general, en relación un todas las propuestas de veto.

Iniciamos las propuestas de veto del Grupo Parlamentario Socialista. Para un turno a favor, tiene la palabra el senador Bru.

El señor BRU PARRA. Muchas gracias, señor presidente.

Señor Montoro, nos encontramos hoy en esta Cámara ante los últimos presupuestos de la presente legislatura y ante los últimos presupuestos que va a presentar un gobierno del Partido Popular en años venideros. Pero no es mi intención anticipar aquí pronósticos electorales, sino simplemente resaltar el hecho de que éste, señor Montoro, va a ser su último debate, por lo que espero que, dado además lo tardío de la fecha, tan cercana ya a la Navidad, nos veamos imbuidos de ese espíritu y tengamos un debate más amable y también más razonable de lo que suele ser habitual.

Señor Montoro, como acostumbra usted a repetir —y con toda razón en este caso— unos presupuestos son la expresión económica, la expresión cuantificada de la voluntad política de un gobierno. Pues bien, como nuestra alternativa —este año sí que tocaba— ya fue expuesta por el señor Rodríguez Zapatero y debatida con usted en el Congreso de los Diputados, voy a intentar centrarme precisamente en lo que usted ha dicho, en esa voluntad política, en su concreción cuantitativa y en su adecuación a los problemas actuales de la economía y la sociedad española, y a cómo se abordan desde estos presupuestos.

Señor ministro, en reiteradas ocasiones —y al «Diario de Sesiones» me remito— le he señalado que los principales problemas de la economía española eran una inflación preocupante —sostenida ya desde 1999—, que supera considerablemente la media de la Unión Europea, y que este diferencial, cuya importancia ustedes, a mi juicio imprudentemente, han tratado siempre de minimizar, nos está pasando ya la factura de pérdida de competitividad de

nuestros productos, de un creciente déficit exterior que ya supone en aportación negativa el 1,1 por ciento del PIB, que la cuota de mercado a nivel mundial de nuestras exportaciones está estancada en cifras próximas a las de hace una década, mientras que por el contrario nuestros vecinos y competidores las están ensanchando; y todo esto no es en absoluto ajeno al segundo gran problema de la economía española, la bajísima productividad, que sigue descendiendo en términos absolutos y relativos y, a su vez, esta baja productividad viene condicionada por nuestra baja dotación de capital tecnológico, el escaso esfuerzo en formación de capital humano, y la precaria situación de nuestro país en cuanto a tecnología de la información y el conocimiento, y también en cuanto a investigación y desarrollo, y además, señor ministro, a diferencia de lo que usted ha dicho hace un momento, estamos perdiendo un importantísimo vector de desarrollo tecnológico, como es la inversión extranjera directa que está en saldo negativo desde hace años; estamos sufriendo un proceso de desinversión y esto es grave y preocupante.

Pues bien, ¿qué soluciones, qué remedios, qué instrumentos se contienen en estos presupuestos para estos problemas ya endémicos? Ninguno, señor Montoro; ninguno. Estos presupuestos no sirven, en absoluto, ni siquiera para empezar a paliar estos males, y no es ni una afirmación hiperbólica ni simplemente un mero afán descalificador. Voy a intentar justificárselo y espero que por su parte tenga a bien rebatirme con argumentos y datos y no se vaya por las ramas, como suele ser habitual.

Empecemos por la inflación. Durante la presentación de los Presupuestos Generales del Estado ha declarado lo siguiente: Hacemos una política presupuestaria estricta y rigurosa para contribuir a la reducción de precios.

Pues bien, de la elevada tasa de inflación del pasado año usted fue directamente responsable de más de medio punto por su subida de impuestos indirectos, así es que permítame que le pregunte: ¿Cuál es esa política? ¿Cómo va a tener esos efectos? ¿Por qué tendría que tenerlos? Le rogaría que me contestase, aunque —y a la prueba del IPC desde hace años me remito— por desgracia en todo caso su efecto no sólo es nulo, sino también nocivo.

Para contestarme a estas preguntas debería usted aclararse primero sobre el carácter de los presupuestos que presenta. Además, recordará usted que son preguntas que año tras año deja sin contestarme. ¿Son neutrales, como quiere y proclama el señor vicepresidente primero y ministro de Economía? ¿Son expansivos o son restrictivos? Le ruego que nos saque usted de la duda porque, fíjese, no me pasa sólo a mí. El año pasado, un periodista que le entrevistaba ya se lo planteó en estos mismos términos, ¿y sabe usted que respondió? Literalmente dijo: La duda es lógica. Y concluía afirmando que son restrictivos por el equilibrio y expansivos por el aumento de inversión y la bajada de impuestos.

Señor ministro, don Cristóbal, no sea usted casquivano en asunto tan serio y no nos deje, a quienes les requerimos para que se pronuncie con claridad, deshojando la margarita o entonando el «Qué será, será...», porque ésa es una conducta, con todo respeto, más propia de una «prima donna» veleidosa que de un ministro de Hacienda. Me re-

conocerá que desde Aristóteles tenemos algunas cosas claras en Lógica, entre ellas que no se puede ser y no ser al mismo tiempo; por tanto, ¿son expansivos o son restrictivos?

Le ruego de nuevo que nos lo aclare, si es que usted lo tiene claro, en cuanto a la productividad, a la competitividad, al necesario fomento de la investigación, de la sociedad de la información, de las nuevas tecnologías, partiendo de una situación en la que nuestro esfuerzo en I+D+I supone la mitad de la media europea, en la que no llegamos ni a dedicar el 1 por ciento del PIB cuando Francia y Alemania están por encima del 2 por ciento, en la que nuestro «stock» de capital tecnológico respecto al promedio europeo es el 40,8 por ciento, cuando para mayor inri en 1995 era del 43 por ciento; o sea, retroceso, al cabo de ocho años más de 2 puntos menos. Nuevamente utilizan la política del cangrejo. Cuando no practican la del avestruz y no quieren ver los problemas, la del cangrejo, caminar para atrás, desandar lo avanzado. Ésa es la tónica general y en todos los sentidos.

Según el informe del Foro Económico Mundial, hemos caído cuatro puestos en el «ranking» mundial de tecnologías de la información desde el año pasado; estamos por debajo de Estonia, de Malaysia, de Malta, y diez puntos menos en el parámetro de percepción empresarial sobre la promoción de investigación y desarrollo que efectúa el Gobierno.

¿Qué ha sido de los dos planes para el desarrollo de la sociedad de la información, Info XXI y «España.es»? Un fracaso, como ya reconoció el propio señor Piqué, por el incumplimiento de los objetivos de Info XXI. ¿Y de los planes nacionales de investigación científica, desarrollo e innovación tecnológica? Mírese el dictamen del Consejo Económico y Social al respecto: la historia de otro fracaso, la crónica de un incumplimiento anunciado.

El V Plan sitúa para el horizonte de 2007 el mismo objetivo que el plan anterior fijaba para el año 2003, incrementado en una décima. ¡Gran ambición, hay que reconocerlo! Tremendo esfuerzo para un país con un déficit tecnológico pavoroso y con una fortísima dependencia del exterior. A este respecto, según datos del INE correspondientes al mes de octubre pasado, nuestra balanza comercial en lo que a productos de alta tecnología se refiere es negativa tanto en su conjunto, con un déficit superior a los 10.000 millones de euros, como para todos y cada uno de dichos productos, con una excepción: la rúbrica de armas y municiones, en la que tenemos superávit. Y en cuanto a las solicitudes de patentes, ¿sabe usted cómo andamos? Se lo diré: Tenemos una cifra de 21 solicitudes por millón de habitantes, frente a la media de 154 solicitudes, de la Unión Europea.

Señor ministro, de aquí al «¡Que inventen ellos!» hay sólo un paso, y ese paso se da cada año en sus presupuestos, en sus dotaciones presupuestarias. Y no me venga usted con el incremento nominal, absolutamente insuficiente, del siete y pico por ciento en la dotación para la investigación, porcentaje que, traducido a cuantía, supone la mísera cifra de 145 millones de euros más. ¿Realmente pretende el Gobierno que con esa calderilla presupuestaria

se solucionen nuestros graves problemas? Aunque, por desgracia, señor Montoro, da igual lo que usted presupueste para el departamento de Ciencia y Tecnología. ¿Sabe por qué? Porque, como diría un castizo, no se quitan la pasta de las manos. No ejecutan el presupuesto, no gastan lo presupuestado. Y así, año tras año, con tres ministros ya en una sola legislatura, y los tres empatados en ineficiencia, el Ministerio de Ciencia y Tecnología ofrece siempre las cifras más bajas de ejecución presupuestaria. ¿Conoce la última? Pues bien, a 31 de octubre pasado se había realizado algo más del 46 por ciento del total presupuestado, y los programas 542E, Investigación y Desarrollo Tecnológico, y 542M, Fomento y Coordinación de la Investigación Científica y Técnica, estaban en el 48,2 y el 47,3 por ciento, respectivamente, es decir, a menos de la mitad del presupuesto ejecutado a falta de dos meses para concluir el ejercicio, teniendo en cuenta, además, que se trata de un ámbito estratégico, vital, para nuestro futuro.

Señor Montoro, reconocerá usted que esto no tiene nombre. Esto es penoso. Esto es, sencillamente, patético. Y como cada vez que observo esas cifras me deprimó, me va a permitir una ligera distensión. ¿Sabe usted cómo resumía el profesor Estapé los resultados de la política científica aplicada a la innovación industrial durante el franquismo? Con tres grandes inventos españoles, a saber, el «Chupa Chups», la fregona y el tapón irrellenable de las botellas de anís «El Mono».

Bromas aparte, no creo que la valoración que se haga de la etapa del Gobierno del Partido Popular en estas materias supere mucho esta visión pesimista. Señor ministro, nos ha hablado usted de superávit presupuestario, y yo le voy a hablar de déficit. (*El señor Martínez Oblanca: ¡Tres millones de parados dejasteis!*) Le voy a hablar de déficit social; de déficit tecnológico; de la situación de un país con la segunda menor proporción de gasto social sobre el PIB de la Unión Europea; con más de siete puntos menos respecto de la media, por debajo en este caso incluso de Grecia y Portugal, y sólo superados por Irlanda; de un país donde, como no podía ser menos, actúa nuevamente la política del cangrejo, por lo que hemos caído dos puntos por debajo de la situación en 1996; donde la desigualdad de la distribución de la renta ha aumentado en los últimos años, presentando —en este caso sólo por encima de Grecia y Portugal— el peor índice de la Unión: más de un punto por encima de la media.

Señor ministro, ya sé que a usted Jeremy Bentham le debe parecer un peligroso radical, pero yo sigo, contumaz y pertinaz, anclado en la idea de que la actuación pública debería procurar la mayor felicidad, la mayor satisfacción, el mayor bienestar, diríamos hoy, para el mayor número de personas. Sin embargo, usted —leído se lo tengo— define la política como el arte de dejar un poco disgustado a todo el mundo. Extraña definición, y extraño objetivo el que usted persigue. En lugar de pretender, como debiera, una distribución más igualitaria de la renta, busca usted una distribución más igualitaria del cabreo, si me permite utilizar esta expresión coloquial. Por tanto, a partir de ahora vamos a dejar a un lado el «óptimo de Pareto» —no pretenderemos llegar a esa situación idílica se-

gún la cual nadie pueda mejorar sin que alguien empeore— y vamos a perseguir el «óptimo de Montoro», si me permite que lo bautice así: una situación en la que todos estén un poquito disgustados, un poquito empeorados. Señor ministro, aunque me sorprenda su óptimo, no creo siquiera que sus políticas fiscales conduzcan a él, porque ustedes lo que hacen es empeorar bastante a muchos y mejorar sustancialmente a otros.

Ustedes intentan hacernos creer que las decisiones económicas son absolutamente neutrales, que se puede contentar a todo el mundo, aunque sea dejando a todos un poco disgustados. Y, señor Montoro, en el universo físico funcionan las leyes de la termodinámica y en el económico también existe la entropía. Las políticas económicas no son neutrales. En toda decisión alguien sale beneficiado y alguien perjudicado. Precisamente para comprobar la eficiencia de una política, se usan criterios como el de la eficiencia potencial o, como usted sabe perfectamente, criterios como el de Kaldor-Hicks. Pero ustedes nos sitúan en Jauja, en la país de las maravillas, en este limbo económico en el que ustedes han convertido a España, como ha escrito un perspicaz periodista económico, donde gracias a la mirífica y taumatúrgica acción del Gobierno Popular todos ganan y nadie pierde: productores y consumidores; empresarios y trabajadores; directivos y accionistas; funcionarios, contribuyentes, ahorradores, inversores, etcétera; todos estamos recibiendo beneficios permanentes sin pagar el menor coste por las decisiones económicas. Además, se empeñan sin el menor recato en seguir con estas políticas, y como no van a permitir que la realidad, vía estadísticas, vía información veraz, les estropee su relato, peor para las estadísticas, no se publican y en paz, o se publican tarde y mal, o se rompe la homogeneidad de las series para dificultar las comparaciones, que siempre son odiosas, situación, por cierto, de apagón estadístico que ha denunciado el informe del Fondo Monetario Internacional, al cual acaba de hacer referencia.

Pero, claro está, las cacareadas rebajas de impuestos se traducen en un incremento de la presión fiscal de 3 puntos desde que ustedes gobiernan. Las políticas de liberalización se sustancian en que, según el muy neoliberal Instituto Fraser, en España está retrocediendo la libertad económica, habiendo caído 14 puntos en el «ranking» mundial en un solo año.

Del recorte en gasto social ya hemos hablando extensamente. Del superávit virtual que usted nos presenta vamos a hablar también, porque el único superávit que existe es el de la Seguridad Social, que compensa contablemente con creces el déficit en el que incurre el Estado; es decir, que el aparente equilibrio presupuestario que usted pregona, —o el superávit contable, me da lo mismo—, descansa sobre las espaldas de los trabajadores que desde 1996 vienen realizando un esfuerzo contributivo que no se traduce, sino al contrario, en una elevación de la intensidad protectora, pagando así un nuevo, oculto y totalmente injusto impuesto sobre el trabajo.

Vamos a comprobar los datos. Desde 1996, la presión contributiva de las cotizaciones se ha incrementado en medio punto, medido como porcentaje sobre el PIB, mientras

que el gasto en pensiones y fondo de reservas se ha reducido igualmente en medio punto.

Señor Montoro, ¿acaso esto es un juego de suma más que cero, en el que todos ganan y nadie pierde? ¿Ha aumentado en porcentaje sobre el PIB la participación fiscal del Impuesto sobre Sociedades, como ha aumentado la del trabajo? ¿Es comprensible que en España, según los últimos datos que tuvieron ustedes a bien facilitar para el año 2000 —y desde entonces apagón estadístico al canto— resulta que solamente 180.000 personas declaran ganar más de 72.000 euros, 12 millones de las antiguas pesetas? ¿Acaso alguien puede creerse tamaño dislate? ¿El esfuerzo fiscal de quienes viven de una nómina y están absolutamente controlados guarda parangón con quienes ganando muchísimo más evaden impuestos con facilidad y, lo que es mucho más grave, con total impunidad?

Señor ministro, la asociación profesional de Inspectores de Finanzas del Estado ha hecho público un escrito firmado nada menos que por 1.200 miembros de los 1.400 que integran el cuerpo, ¿dónde figura nítidamente cuál es la situación fiscal en España, donde el pequeño contribuyente está asaeteado por la Agencia Tributaria, mientras que los grandes contribuyentes, las operaciones de ingeniería financiera, se escapan del control por falta de tiempo, por falta de medios, por falta, en definitiva, de voluntad política para controlarlas? ¿Dónde está el principio de equidad, señor Montoro? ¿Dónde se busca la igualación del esfuerzo fiscal? Por no hablar de que como se empeñan desde hace años en no deflactar la tarifa en un país con las tasas de inflación más altas de Europa, por cada punto de incremento del IPC ustedes recaudan 450 millones de euros más, es decir, 75.000 millones de las antiguas pesetas. Un impuesto más por la inflación, el impuesto silencioso y el más injusto de todos porque grava a todos pero más aún a los más desprotegidos, a los que no pueden defenderse contra él aumentando sus ingresos. O sea, ¿que todos ganan y nadie pierde? Señor Montoro, sinceramente, no me creo que usted se pueda creer esto.

Ya sé que usted se va a refugiar, como ha dicho antes —y algún palmero de sus filas lo recordaba—, en la manida coletilla de que los mejores presupuestos son los que crean empleo y en el milagroso modelo del crecimiento español, y no seré yo quien les discuta que es mucho mejor a efectos económicos que se cree empleo que no que se destruya. Pero esa opción no es la única, puesto que había otras alternativas a su disposición; aquella por la que ustedes han optado, en medio de las condiciones más favorables de crecimiento económico mundial de los últimos 50 años, revela su cortedad de miras, revela que todas las variables económicas de importancia a medio y largo plazo, como productividad y tecnología, se enfoquen, cuando no como el cangrejo como la tortuga, pero como una tortuga miope, con paso muy corto y mirada nada larga.

El modelo de crecimiento por el que ustedes han optado es vulnerable, poco avanzado, de escasa calidad, frágil en suma. ¿Que se crea empleo? Sí, aunque en absoluto el suficiente para un ciclo tan sostenido de crecimiento. Y le recuerdo que estamos todavía en la tasa de desempleo más alta de la Unión Europea, aunque usted, señor ministro, no

va a resistir la tentación de recordarme otras épocas olvidando por completo y falazmente otras condiciones económicas mundiales absolutamente diferentes. Pues bien, en aquellas épocas —que usted seguramente me va a recordar— países de nuestro entorno tenían tasas de desempleo tan altas como las nuestras o incluso superiores. Y hoy, años después del cambio de ciclo la tienen mucho más baja, en algunos casos a la mitad e incluso a la tercera parte que nosotros. Por tanto, cuando se sumerja en el baúl de los recuerdos, como no dudo que hará, espero que también me haga el favor de explicarme esto, por qué estamos clavados en el 11 por ciento y sin muchas expectativas de reducirlo sensiblemente, cuando resulta que la media europea es del 8 por ciento.

Decíamos que, en todo caso, se crea empleo. ¿Qué tipo de empleo? Precario. Y le recuerdo otra vez que el índice de precariedad de trabajo en España es uno de los más altos de Europa. Estamos doblando la tasa de temporalidad del trabajo en Europa. ¿Y dónde se crea empleo? En la construcción y en los servicios, pero no en los servicios ligados a la industria, no en el sector cuaternario, no en los servicios avanzados, sino siempre en sectores no expuestos a la competencia externa, en sectores que no producen bienes comercializables y que aportan bien poco a nuestra balanza comercial. En otras palabras, señor ministro, estamos inmersos en un proceso puramente endógeno en el que la creación de empleo, sostenida por la demanda interna y la construcción, por el aluvión de inmigrantes (son ya casi 730.000 los cotizantes en la Seguridad Social, casi más de un 4 por ciento del total de afiliados) incrementa la recaudación por cotizaciones sociales y, como he dicho antes, esto le permite cuadrar las cuentas y aparentar que bajan los impuestos. Y digo aparentar porque todas las bajadas no llegan a compensar la erosión que causa la permanente y elevada tasa de inflación, porque ustedes no deflactan la tarifa. Y lo que ocurre sobre todo es que, aunque sea con sueldos bajos y con empleos precarios, se incrementa la demanda efectiva y se retroalimenta el consumo, y así, recaudando más a través de los impuestos indirectos usted ha potenciado nuestro sistema impositivo.

Para acabar de precisar el cuadro le diré que la demanda interna se potencia también porque en España tenemos tipos de interés europeos, algo con lo que ustedes no tienen nada que ver, nada, señor ministro, aunque es algo común en la Unión Europea. No siga usted sosteniendo la falacia de que aquí los intereses son bajos por su mirífica y tautológica política.

Señor ministro, discútame usted lo siguiente. En el mes de septiembre el tipo de interés a corto estaba en la Unión Europea en un 2,15 por ciento, común a España con su gran milagro presupuestario, común a Francia con un déficit del 3,1 por ciento, común a Finlandia con un superávit del 4,2 por ciento, común a Grecia, común a Portugal, etcétera. Es decir, igual para todos los países, con déficit, con superávit y con equilibrio. ¿Y por qué? Porque ese tipo de interés procede exclusivamente de los efectos del euro, no de usted. (*Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.*) Y sin embargo, vamos a un índice también muy importante a largo plazo, el de la deuda pública a diez años.

Cifras oficiales: interés medio Unión Europea zona monetaria, 4,23, con un mínimo de 4,17 y un máximo de 4,23. Por tanto, todos los países que están en el euro tienen el mismo tipo de interés con una horquilla de una décima, mientras que el Reino Unido y Suecia, que están fuera del euro y que son países con bajo nivel de endeudamiento, tienen medio punto más que la media europea.

Así pues, dejen al euro en paz. Al euro lo que es del euro y a usted lo que es de usted. El tipo de interés no tiene nada que ver con usted. La inflación sí. Por lo tanto, España tiene tipos de interés europeo con tasa de inflación española; o sea, con tipos de interés negativos en términos reales; y con ese tipo de interés negativo en términos reales el público anticipa el gasto endeudándose y asumiendo riesgos futuros. Ya sabe usted que sobre el futuro poco podemos decir. En todo caso, que puede ser muy oscuro.

Esto explica esa anticipación del gasto u otra buena parte del crecimiento. A la política monetaria expansiva del Banco Central Europeo le añade usted su política fiscal también expansiva, como yo vengo diciendo año tras año y como acaba de reconocer el último informe del Fondo Monetario Internacional.

Por lo tanto, con la política monetaria expansiva más su política fiscal expansiva tenemos el «mix» que explica gran parte de nuestro diferencial de crecimiento. A todo ello, además, hay que sumar las aportaciones netas europeas, cuyo saldo financiero se cerró el pasado año con un saldo positivo a nuestro favor de 8.350 millones de euros, el 1,2 por ciento del PIB de 2002.

Recapitemos, si más del 1 por ciento del PIB procede de las aportaciones europeas que van a desaparecer en el año 2006 y 8 décimas del crecimiento —creo recordar— según sus propias declaraciones vienen inducidas por el gasto público, hasta el 2,4 que estamos, ¿qué queda? Pues 0,4 ó 0,5 ó 0,6 décimas. Ése es el crecimiento auténtico en términos nominales que genera por sí misma la economía española, pero como la inflación acabará este año en el 3 por ciento, dígame usted mismo qué es lo que estamos creciendo en términos reales.

Yo se lo diré: Menos que nada, tasa negativa. Tenemos un retroceso del PIB en términos reales del 0,7 por ciento. No puede discutirme porque es la realidad que reflejan los datos oficiales. Nuevamente aparece tan lejos, con un menor crecimiento real y una menor cantidad de bienes y servicios disponibles. Así es que por volver a la distensión, señor Montoro, diré que esto me recuerda el viejo chiste de aquel que una vez que se enteró de los hábitos alimenticios y de la vida sexual de las hienas no entendía en absoluto por qué se reían tanto.

Con todo respeto, señor ministro, no entendiendo su permanente autosatisfacción y su constante autobombo, porque la situación no está para tirar cohetes, entre otras cosas, porque además de lo que ya le he dicho, usted necesita una tasa alta de inflación, la necesita para que le cuadren las cuentas, porque frente a un deflactor del PIB, que es el verdadero indicador de la inflación generada por la economía española, que se fijaba en el 2,8 por ciento, estamos ya en el cuatro por ciento, con lo cual el crecimiento del PIB acabará siendo en torno a un punto superior al

previsto, y ésta es la auténtica razón de por qué, aunque estamos con crecimiento real negativo, no se dispara el déficit. La inflación es la que sale al quite, como siempre, y así le cuadran las cuentas. Señor Montoro, el Gobierno vive de la inflación. (*Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.*)

Voy concluyendo, señor Montoro. Creo que le he explicado suficientemente las razones por las que estos presupuestos son estériles. No aportan soluciones y, por eso, porque siguen aplazando que se haga lo que tiene que hacerse, lo necesario, son todavía más perniciosos porque, señor Montoro, la política no es el arte de disgustar a todos, ni siquiera es el arte de lo posible, es o debería ser el arte de lo necesario, y lo necesario aquí y ahora es afrontar seriamente nuestros problemas y proveer, además, con toda rapidez, las soluciones.

A pesar de la súbita alergia anticatalana que padecen, me permitirá citar, para concluir, al señor Cambó, que afirmaba que hay dos formas indefectibles de provocar el caos: una, pidiendo lo imposible, que no es nuestro caso, otra, retrasando lo inevitable, que sí es el suyo. Cuanto más lo retrasen, más duros pueden ser los efectos posteriores de esta especie de artefacto económico con espoleta retardada que usted ha contribuido, decisivamente, a fabricar.

Muchas gracias. (*Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.*)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.

¿Turno en contra? (*Pausa.*)

Propuesta de veto del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés.

¿Turno a favor? Tiene la palabra la senadora Aroz.

La señora AROZ IBÁÑEZ: Muchas gracias, señor presidente.

Señor ministro y señorías, intervengo en nombre del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés para defender los dos vetos presentados por mi grupo parlamentario al proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado 2004 y al de medidas fiscales, administrativas y del orden social.

Por lo que se refiere a la ley de Presupuestos Generales del Estado, el proyecto no ha experimentado ningún cambio significativo a lo largo de su tramitación en las dos Cámaras y, por tanto, señor ministro, buena parte de las razones expuestas por los distintos grupos parlamentarios a la hora de defender las enmiendas de devolución en el inicio del trámite parlamentario llevado a cabo en el Congreso va a volver a escucharlas al finalizar éste, como se ha puesto de manifiesto en la intervención que me ha precedido. En este sentido, hay que señalar que los proyectos de ley de presupuestos han recibido diecisiete iniciativas en contra, entre enmiendas de totalidad y vetos, lo cual indica que, por descontado, los presupuestos saldrán adelante con la mayoría absoluta del Grupo Parlamentario Popular y un amplio rechazo de la mayoría de los grupos parlamentarios.

La característica fundamental de los presupuestos del 2004 es el continuismo con respecto a los anteriores.

Siendo así, señor ministro, entenderá que mi intervención también sea una continuación de los argumentos con los que el año pasado defendí el veto a los Presupuestos Generales del Estado de 2003.

Su exposición ha sido, como siempre, pormenorizada —y mi grupo se lo agradece—, pero también ha sido, como siempre, enormemente autocomplaciente. El Gobierno no ve problemas ni ningún tipo de nubes en el horizonte en nuestra situación económica. No quisiera, sin embargo, caer en el mismo error pero en sentido contrario y ser catastrofista, pero mi grupo sí desea, con la presentación y defensa de este veto, poner el foco en las cosas que no van bien y señalar líneas alternativas en política económica para afrontar los retos que tiene planteados la economía y la sociedad española.

Como decía antes, estamos ante unos presupuestos continuistas en la filosofía y que consolidan la estabilidad presupuestaria —y en ello coincidimos, tal y como hemos venido expresando siempre que ha sido necesario—, pero que persisten en los defectos que vienen arrastrando los anteriores. Se trata de unos presupuestos poco realistas en sus previsiones macroeconómicas; se mantiene el modelo económico y, al igual que en 2003, se confía el grueso del crecimiento a la demanda interna con una aportación neta negativa al sector exterior; no atienden adecuadamente los retos que España tiene planteados para mejorar la competitividad; no procuran la convergencia social y como los anteriores, confirman el parón en las reformas estructurales, es decir, no hay ningún reflejo de reformas estructurales en los Presupuestos Generales del Estado de 2004.

El aspecto más destacado de estos presupuestos es, sin duda, la previsión de su cierre con un déficit cero, lo que completaría un ciclo de cuatro años en tal situación. Sin embargo, hay que recordar que, una vez más, las cuentas del Estado, con una previsión del déficit del 0,4 por ciento del PIB, se cuadran con el superávit de la Seguridad Social, y hoy usted, señor ministro, ha venido aquí a anunciarnos el superávit de las cuentas del Estado. Ahora bien, señor Montoro, cuando usted anuncia un superávit del 0,5 por ciento sobre el PIB debería explicar también con qué metodología consigue su señoría este resultado, porque si, como dice el Tribunal de Cuentas, la Cuenta General del Estado no es representativa de la situación patrimonial y financiera del Estado, ya me explicará usted cómo lo estima. En realidad, en las estimaciones del profesor Barea —que nos ofrece más fiabilidad que usted, señor Monto, se lo digo con respeto— hay en estos momentos déficit y no superávit.

Previsiones macroeconómicas. Los objetivos para 2004 están en función del crecimiento que el Gobierno asigna a la economía española, que es crecer al 3 por ciento en términos reales, una tasa de inflación del 2 por ciento y la creación de empleo suficiente para satisfacer el aumento de la población activa —unas 300.000 personas—, con un incremento de 1,9 por ciento y una reducción de la tasa de paro hasta el 11 por ciento de la población activa.

Pues bien, el crecimiento del producto interior bruto del 3 por ciento previsto para 2004 es idéntico al que previeron los presupuestos para 2003 y prácticamente igual al pre-

visto en los presupuestos de 2002 —2,9 por ciento— que, como se demostró y así lo señalamos en los respectivos debates parlamentarios, eran previsiones optimistas que no se cumplieron y tampoco en 2003 cabe esperar que se alcance el 3 por ciento previsto, de acuerdo con los datos del tercer trimestre, que sitúan la tasa de crecimiento en el 2,4 por ciento. Estos datos muestran algunos aspectos preocupantes, como que la demanda externa sigue empeorando y resta un punto y una décima al crecimiento. Este empeoramiento de la demanda exterior refleja una clara pérdida de competitividad debido al mantenimiento del diferencial de inflación respecto a la zona euro y a una fuerte caída de la productividad.

Otro aspecto preocupante —y éste en relación con la demanda interna— es la caída de la inversión empresarial, que se ha situado en el 3,1 por ciento, debido a la notable pérdida de impulso de los bienes de equipo, que crecieron un 1,5 por ciento frente al 3,1 del segundo trimestre —es decir, que se ha reducido a la mitad—, y esto significa que las empresas no están renovando sus instalaciones ni incrementando su capacidad productiva.

En cuanto a la inflación, se ha dicho bastante: el Gobierno se equivoca en las previsiones y no controla los precios. El crecimiento del IPC en noviembre sitúa la tasa interanual en el 2,8 por ciento; será difícil que quede significativamente por debajo del 3 por ciento, un resultado muy alejado del 2 por ciento que el Gobierno se fijó como objetivo y del promedio de la eurozona. La consecuencia inmediata es la revisión de numerosas partidas de gasto público y privado.

Señor ministro, se mantiene, por tanto, el diferencial en torno a un punto y la explicación ya no puede seguir amparándose exclusivamente en el mayor crecimiento de la demanda en España. Aquí hay una evidente falta de competencia en algunos mercados, como en el mercado de la energía y en el de las telecomunicaciones: en la energía la liberalización es puramente nominal, no hay competencia, y en el sector de las telecomunicaciones el ex monopolio Telefónica continúa suponiendo el 70 por ciento de la facturación y la Comisión Europea nos ha tirado de las orejas (*El señor vicepresidente, Caneda Morales, ocupa la Presidencia.*)

Además, hay causas que provienen del propio modelo de crecimiento de los últimos años. Los bajos tipos de interés reales se han aprovechado para financiar una muy importante contribución al crecimiento de la construcción, pero no se ha fortalecido el «stock» de capital, que puede hacer a la economía española más eficiente, es decir, más productiva y menos inflacionista. El empleo crece en un 1,9 por ciento interanual, pero nuevamente se refleja que este aumento es básicamente en la construcción (el 4,4 por ciento), en los servicios (el 2,8 por ciento), pero se está destruyendo empleo en la industria y en la agricultura y pesca.

Teniendo en cuenta los datos de crecimiento del PIB del 2,4 por ciento y del empleo del 1,9 por ciento en el tercer trimestre, la productividad aparente de nuestra economía ha disminuido una décima, quedando en el 0,5 por ciento —productividad muy por debajo de nuestros competido-

res—, lo que ya se está notando en nuestra competitividad, como decía anteriormente, aumentando la aportación negativa de la demanda externa a nuestro producto interior bruto.

En definitiva, señor ministro, nuestra economía crece, pero lo hace de forma desequilibrada, y es hora de que el Gobierno lo reconozca. Nos encontramos al final de la legislatura, pero los Presupuestos Generales del Estado para 2004 hubieran debido reconocerlo y el Gobierno hubiera debido corregir la orientación de su política económica, porque, de otra manera, 2004 va a ser un año perdido en los deberes que tiene que hacer la economía española.

La necesidad en el cambio de orientación de la política económica es algo que se está recomendando al Gobierno desde todos los ámbitos, desde el Gobernador del Banco de España a los mejores expertos económicos del país. Es necesario un crecimiento equilibrado, pero también hay que tener presente, señor ministro, que los factores que explican el crecimiento diferencial de España han llegado a su límite. Porque, ¿cuánto más dará de sí la demanda interna dada la intensidad del endeudamiento de las familias? ¿Qué pasará cuando Francia y Alemania hayan recuperado el crecimiento económico, aparezcan tendencias inflacionistas y el Banco Central Europeo suba los tipos de interés? ¿Qué va a pasar con el endeudamiento que tienen actualmente las familias cuando se aumenten sus hipotecas? ¿Cuánto más tirará la construcción cuando los análisis del Banco de España señalan que el precio de la vivienda está entre el 8 y el 17 por ciento por encima de su nivel de equilibrio a largo plazo? ¿Cuánto más podremos soportar el déficit exterior? Es hora, señor ministro, de un cambio en el modelo de crecimiento, que ha de estar basado en los sectores productivos con mayor inversión en tecnología, en una mayor competencia y en ganancias de productividad continuada, y esto requiere enfatizar algunas políticas entre las que destaca la contribución pública a la mejora de la productividad privada.

La mejora de la educación, la inversión en capital humano y en investigación, son grandes prioridades en nuestro país en este momento y hay que incrementar el esfuerzo inversor. Usted dice que en investigación y desarrollo hay un crecimiento por encima del previsto del PIB, pero estamos hablando de un auténtico esfuerzo en relación a estos objetivos. La inversión en educación es una gran prioridad, y usted me va a decir a continuación que en estos momentos la educación es una competencia transferida a las comunidades autónomas, pero, señor ministro, creo que los problemas no son de unos o de otros, los problemas en este caso son de la sociedad española. La prioridad de la educación, el objetivo de una educación de calidad, es un gran reto para nuestro país.

El déficit del Estado del bienestar español es histórico por el retraso con el que se desarrolló en España, y hay que afrontarlo. Este déficit se ha trasladado a las comunidades autónomas en materia de educación en dos etapas claves para obtener profesionales cualificados del sistema educativo: en la secundaria y en la educación superior, en las que España está muy por debajo de la media de la Unión Europea; en la educación secundaria estamos en el 70 por

ciento y en la educación superior estamos en el 60 por ciento. Por tanto, más allá de quién tiene la competencia, y más allá de que se haya aprobado recientemente un nuevo sistema de financiación de las comunidades autónomas, hay suficientes mecanismos de cooperación —debe haberlos— para afrontar este problema, para conseguir que España tenga la dotación de recursos necesarios en educación. No vale hacer reformas legislativas que pueden estar bien o mal (la reciente reforma sobre la calidad de la educación en España), si no hay recursos que la acompañen.

La distribución competencial, señor ministro, no ha de suponer una visión compacta y cerrada de las políticas públicas; por el contrario, debe funcionar la cooperación institucional para el desarrollo eficiente de las actividades públicas con sus correspondientes asignaciones de recursos. Aquí voy a hacer un paréntesis porque usted se ha referido al sistema de financiación autonómica, recientemente aprobado por todas las comunidades autónomas, y ha hecho una defensa legítima de este sistema de financiación que mi grupo reconoce que incorporó mejoras sobre el anterior. En cada reforma a lo largo de los años hemos ido mejorando, sin duda, sin embargo, señor Montoro, reserve determinados argumentos para la campaña electoral. En el Parlamento hay que ser más rigurosos y no se pueden distorsionar las propuestas, que usted conoce a través de la prensa o han sido filtradas por los servicios de propaganda de su partido. Por ello, le ruego sinceramente que lea con honestidad intelectual las propuestas que se hacen desde Cataluña en relación al sistema de financiación de las comunidades autónomas.

Como decía, los dos retos que hay que afrontar son el capital humano y el desarrollo tecnológico. En este sentido, a la inversión en I+D añadimos ahora otra i, la de innovación. Es verdad que también en este campo se hace un esfuerzo, pero consideramos que es insuficiente porque en España hay un déficit importantísimo; estamos en el 50 por ciento del gasto que dedica la media de la Unión Europea, con el agravante de que en España hemos sufrido un retroceso muy importante desde mediados de los noventa. Es cierto que la investigación es un bien superior y que crece más a medida que los países se hacen ricos pero, insisto, en España aún no hemos recuperado el nivel relativo de inversión en investigación de principios de los años noventa, y hay que recuperar el terreno perdido con rapidez.

En relación con la convergencia social, quiero reiterar algunos de los argumentos que utilicé el pasado año, puesto que estos presupuestos son de continuidad y no corrigen determinados problemas.

Uno de los objetivos que se propone el Gobierno en estos presupuestos es avanzar en la convergencia real, pero hay que tener en cuenta todos los términos de la misma. Así, es necesario considerar la renta per cápita —como variable central, por supuesto— en los determinantes del crecimiento, pero también en los niveles de bienestar social y, no nos cansaremos de repetirlo, estos presupuestos no procuran la convergencia social.

Es cierto que se mantiene el gasto social; también hay un incremento del 6,8 por ciento por encima del PIB nominal pero, señor ministro, cuando hay insuficiencias —y

las hay—, mantener o aumentar un poquito, significa retroceder, y en gasto social no estamos avanzando. Tenemos un diferencial importante con la media de la Unión Europea, de siete puntos, pero ¿qué significa ese diferencial de siete puntos? Más allá de las cifras, significa que de la riqueza producida en un año, las políticas públicas españolas dedicarán siete puntos menos del PIB que las europeas a procurar la igualdad de oportunidades en el acceso a bienes y servicios básicos y a asegurar ingresos a las personas menos favorecidas.

Desde su posición, señor ministro —la posición que viene defendiendo el Partido Popular—, no se puede valorar la política social sin mencionar el empleo y el ritmo de creación de puestos de trabajo, tal y como también ha señalado el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista. Son aspectos que, en su opinión, expresan la importancia otorgada por el Gobierno a lo social. Por descontado, hay que valorar positivamente la creación de puestos de trabajo pero, señor ministro, este hecho equivale a situar la creación de empleo en contraposición con el gasto social. Es como si el Partido Popular nos estuviera diciendo que se generan más y mejores empleos porque no se destinan recursos a gasto social; insisto, es una especie de contraposición entre la creación de empleo y gasto social. Es verdad que el hecho de generar empleo significa generar mayores recursos públicos, pero estos recursos públicos pueden ser empleados, o no, en servicios de bienestar y, desde luego, no observamos que la prioridad del Gobierno se encamine en esa dirección.

Pero, además, señor ministro, el debate no puede ser solamente de cifras porque nos podemos quedar con los siete puntos y eso nos dice muy poca cosa; hay que entrar en los contenidos concretos, entrar en las necesidades sociales y ver las que están atendidas y las que no. Hay algunas que están atendidas en España porque son ya derechos consolidados, como la educación, la sanidad o las pensiones, aunque pueda haber déficit, que lo hay y que se debe corregir. Pero luego hay nuevas necesidades propias de nuevas situaciones: la exclusión social, la integración de la inmigración, el envejecimiento de la población y la atención social que conlleva. Señor ministro, en España hay que hacer un debate, que ni se ha iniciado, sobre cómo vamos a afrontar estas necesidades, cómo vamos a mejorar la calidad de nuestros servicios de bienestar y la atención de las nuevas necesidades en este ámbito, así como su financiación. Este es un debate absolutamente necesario para la sociedad española que el Gobierno rehuye sistemáticamente, un debate que hay que hacer hablando de financiación. Y aquí, señor ministro, usted me va a decir: ¡Ya está proponiendo el aumento de los impuestos! No, señor ministro. Le estoy diciendo que hay que hablar de la financiación de unas necesidades sociales que estamos obligados a estudiar, a considerar y a atender como en todos los países desarrollados, que son necesidades emergentes en los países desarrollados. Y le digo que hubiéramos podido resolverlo, que hay margen para una financiación sin subir los impuestos, si el Gobierno hubiera sido más eficiente —esperemos que el próximo Gobierno lo sea— en la lucha contra el fraude fiscal, porque aquí tene-

mos un amplísimo margen para aumentar la reducción fiscal sin aumentar los impuestos.

Según la mayoría de estimaciones, el fraude fiscal, señor ministro, supera el 30 por ciento en prácticamente todas las figuras tributarias. Y hay indicadores muy claros del elevado fraude en estimaciones del Instituto de Estudios Fiscales en relación con la economía sumergida (un 21 por ciento del PIB) y en estimaciones del Banco de España (un 9 por ciento del PIB de dinero en efectivo que atesoran los particulares). El Gobierno debe reconocer ante la sociedad española que tenemos un grave problema de fraude fiscal. Y las explicaciones que ustedes están dando sobre el crecimiento de la economía sumergida y el fraude fiscal son muy insatisfactorias, porque consisten básicamente en negar la mayor y remitirse al crecimiento de la presión fiscal, como un argumento de autoridad de que el dinero aflora y el fraude disminuye. Esto no es así, señor ministro.

Respecto a las inversiones, es verdad que hay un esfuerzo inversor en este presupuesto, pero, en todo caso, yo quería referirme a las inversiones en Cataluña. También respecto a las inversiones en Cataluña hay un importante nivel de esfuerzo inversor en los presupuestos, pero debido fundamentalmente a las cifras del AVE, que distorsionan las asignaciones para otros ámbitos en los cuales también hay necesidad de inversión. Por ello, señor ministro, quiero insistir con toda normalidad —y espero que usted lo asuma del mismo modo porque las cuestiones en Cataluña están profundamente distorsionados— en que en el futuro éste o el próximo Gobierno —y lo digo aquí en el Parlamento— mantenga una inversión similar a la de este año en Cataluña. ¿Por qué? Sencillamente, señorías, porque hay que afrontar el gravísimo déficit que tiene Cataluña en infraestructuras. Probablemente, cause escepticismo en muchas de sus señorías porque se tiene la idea de que Cataluña es una comunidad rica, y es verdad, pero, como cualquier comunidad, tiene sus necesidades de inversión que no han sido atendidas suficientemente a lo largo de bastantes años. Y este gravísimo déficit de inversión en infraestructuras estrangula la economía catalana, y se ha convertido en una auténtica hipoteca sobre el crecimiento económico. Y no se lo digo yo, señor ministro, a pesar la legitimidad que me da ser senadora por Cataluña y representar al grupo parlamentario en esta Cámara con más votos de Cataluña; se lo dice la sociedad catalana, que es muy consciente de que esta falta de inversión pública ha provocado un enorme déficit de infraestructuras en Cataluña.

Las instituciones civiles más significativas del mundo económico se han pronunciado en este sentido y esperamos que los nuevos gobiernos de España y de Cataluña sean capaces a través de la cooperación y el diálogo de resolver este problema, que afecta a Cataluña pero afecta también al conjunto de España, señorías, porque Cataluña es motor económico y tiene la voluntad de seguir siéndolo, del desarrollo de España.

Y voy acabando, señorías, con una breve referencia al proyecto de ley de acompañamiento. Este proyecto regula materias que tengan relación directa con las previsiones de ingresos y gastos que integran los Presupuestos Generales

del Estado y que, por su naturaleza o vigencia indefinida, no pueden ser regulados por la misma. En virtud de este hecho y como señala el documento de introducción a los presupuestos de su ministerio, la valoración del contenido de la ley de Presupuestos Generales del Estado ha de hacerse conjuntamente con la ley de acompañamiento para tener una visión global de los mismos.

Si atendemos a este razonamiento, señor ministro, los Presupuestos Generales del Estado para el año 2004 serían los más extravagantes de la historia presupuestaria española, puesto que la ley de acompañamiento este año supera todo límite en la regulación de materias que no guardan relación directa con las previsiones de ingresos y gastos —desde la Ley de Sanidad Animal, a la Ley de Residuos, la retirada del carné de conducir, etcétera—, al tiempo que ha culminado en el deterioro del procedimiento legislativo, insertando hasta tres normas prácticamente completas, según nos han informado los servicios jurídicos de la Cámara, lo que, en conjunto, es el mejor exponente del deterioro del procedimiento legislativo que ha propiciado la mayoría absoluta del Partido Popular en esta Cámara.

Como decía antes, los presupuestos para el año 2004 están marcados por el continuismo, muestran poca credibilidad en sus previsiones, la orientación de la política económica que contienen no va en la dirección adecuada para sentar las bases de un crecimiento equilibrado, no hay un giro hacia las políticas públicas que España necesita y que se están impulsando en la Unión Europea para contribuir a la generación de capital humano, avance tecnológico, mejor diseño e innovación, como tampoco permiten avanzar en la convergencia social, un gran reto que tiene planteado la sociedad española, por todo lo cual, señor ministro, el Grupo Entesa Catalana de Progrés solicita la devolución de los dos proyectos de ley al Gobierno.

Gracias, señor presidente. Gracias, señorías, por su atención.

El señor VICEPRESIDENTE (Caneda Morales): Gracias, senadora Aroz.

En nombre del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, tiene la palabra el senador Albistur.

El señor ALBISTUR MARIN: Gracias, señor presidente.

Señor presidente, señorías, señor ministro, van para cuatro años ya que este portavoz del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos sube a esta tribuna para repetir prácticamente el mismo ritual, y es un ritual que está empezando a resultar de alguna forma tedioso. Me imagino que a usted le ocurrirá lo mismo, pero a la oposición realmente le resulta tedioso, porque no hay forma de llegar a entenderse, hablamos dos lenguajes muy diferentes.

La intención de la oposición es tratar de que aquello que vemos, contemplamos, analizamos, escuchamos en la actividad económica, en la vida cultural, en definitiva, en la vida cultural social, de alguna forma esté plasmado en los presupuestos, es decir, que aquellas que son verdaderas

prioridades de la sociedad, de los ciudadanos, estén plasmadas en los presupuestos. Sin embargo, cada año vemos que esto no sucede, sino todo lo contrario.

Voy a reiterar, como una especie de «leitmotiv» de toda mi intervención, que ustedes siguen este trámite únicamente para cumplir con una formalidad. No lo hacen porque los presupuestos constituyan un instrumento de gobierno, sino, como digo, por cumplir con una formalidad, ya que después, a lo largo del ejercicio, hacen ustedes lo que quieren. No se cumplen las previsiones del cuadro macroeconómico —no pasa nada—; modifican los créditos de acuerdo con las urgencias que la propia realidad plantea, y los presupuestos no responden a las verdaderas necesidades de la sociedad española.

Señor ministro, usted presenta un proyecto de presupuestos para el año 2004 que en este trámite de segunda lectura es ya otro proyecto completamente distinto de aquel que entró en el Congreso de los Diputados en el mes de septiembre, pues contiene nuevos objetivos y modificaciones legales. Como oposición nosotros manifestamos nuestra postura, que hasta este momento es de no credibilidad respecto de los objetivos propuestos y de su cumplimiento, además de un absoluto distanciamiento hacia los procedimientos y usos del Gobierno en la confección de los mismos y en sus trámites parlamentarios.

Los presupuestos han sido y siguen siendo una expresión de la manipulación del escenario económico del Estado, duro «marketing» político y mediático de sus jaleadores analistas económicos, cada vez más numerosos, para ocultar el desajuste con la demanda económica empresarial, la demanda de servicios y la reducción de costes sociales de los ciudadanos. Los presupuestos para 2004 son calcados a los de los cuatro años anteriores; no se ha dicho nada nuevo respecto del discurso que se hizo el pasado año, y sobre todo, en ellos no hay nada que merezca la pena destacar, y esto es preocupante. A nuestro modo de ver continúa la misma estructura de costes fijos que padece la sociedad y la economía española, pues no se proponen políticas activas para reducir el incontrolable e irresponsable coste de Televisión Española, que tiene un peso importante dentro del presupuesto; se siguen manteniendo políticas insuficientes, como el subsidio del carbón, sin impulsar políticas de desarrollo regional complementarias y sustitutorias en las zonas afectadas.

En estos presupuestos han olvidado que hubo un caso llamado Prestige, por el que ustedes elaboraron un plan para Galicia que no figura cuantificado en los mismos; que deben cientos de millones de euros a Asturias, Cantabria, País Vasco y Aquitania, deuda que tampoco figura en estos presupuestos, y que no incluyen previsión alguna ni acción positiva o inversión para que «nunca más» volvamos a encontrarnos en la misma situación.

Estos presupuestos tampoco plantean una sola medida económica ni legal para abordar los puntos originarios de una permanente tensión inflacionista que viene bien al Gobierno para cuadrar sus cuentas públicas y no reducir ingresos, aunque diga que baja los impuestos, pero lo cierto es que a los ciudadanos cada vez les cuesta más disfrutar de la vida, siendo para ellos más difícil ahorrar. Es-

tos presupuestos siguen ocultando un déficit superior al indicado al esconder en empresas públicas gastos, avales y créditos hoy por hoy no controlados públicamente, es decir, desde estas Cámaras, y que algún día deberán aflorar como compromisos del Gobierno y ser plasmados en los presupuestos.

Realmente estamos de despedida, señor ministro, y con esta exposición —que, como he dicho en el comienzo de mi intervención, resulta ciertamente tediosa y aburrida— reiteramos, esperamos que por última vez, que ustedes proponen objetivos de crecimiento económico que no les importa incumplir, no rindiendo siquiera cuenta alguna del porqué. Saben que, pese a la cháchara técnica y al recurso a las comparaciones con los sufridos gobiernos europeos, la economía española en ésta, la segunda legislatura del Partido Popular, ha crecido muy poco. Ninguno de los últimos cuatro años ha llegado al 3 por ciento porque ha crecido —dicho entrecomillas— de forma natural, sin impulso público gracias al consumo de unos ciudadanos que no ahorran debido los bajos tipos de interés, la incertidumbre de la Bolsa y la devaluación de sus márgenes de ahorro con la inflación permanente. Además, se ha fomentado públicamente la cultura del consumo como signo de posición social y de progreso. La sociedad está hipotecada y cualquier cambio de tendencia en la política monetaria y financiera que sea impulsada desde el Banco Central Europeo puede llegar a bloquear la fuente de crecimiento que es el consumo interior.

Ustedes hacen literatura de ficción cuando cada año dicen, por ejemplo, que para el año 2003 crecerá el 3 por ciento el producto interior bruto, con una aportación de la demanda interna del 3,2 por ciento, compensada por el sector exterior, con un menor crecimiento del 0,2. Nada de esto ha sido realidad. La demanda interna está lanzada y no se controla y está a la espera de la subida de los tipos de interés. El saldo exterior también crece negativamente y ustedes no tienen ni mecanismos de control ni políticas de expansión de la actividad exportadora. La economía, como consecuencia, sí soporta un mayor endeudamiento y un mayor déficit aunque se quiera ocultar. Ustedes vuelven, para reiterar su inercia en la redacción de proyectos presupuestarios, a proponer este año un aumento del producto interior bruto del 3 por ciento, de nuevo contando con la alegría de la demanda interna y con un contexto de la economía europea e internacional aparentemente más favorable.

¿Se cumplirán sus profecías? Quizás, ¡ojala!, nadie tiene interés en que no sea así, pero le aseguro que no porque ustedes desde estos presupuestos hayan introducido mecanismos o acción alguna que permita corregir tal objetivo y compensar el desequilibrio entre una demanda interna, que crecerá más, y una demanda externa, que continuará siendo negativa, por lo menos aparentemente y con las señales que actualmente tenemos. Porque ustedes saben que la inversión pública prevista, las acciones de fomento de la investigación tecnológica, el crecimiento de las infraestructuras, la inversión energética, la dotación de servicios no es suficiente como para influir significativamente en el crecimiento del producto interior bruto. Por-

que ustedes saben que las únicas predicciones de su fórmula mágica que se cumplen son las de la inflación, en esas han acertado siempre y han sido superados.

Este año han acertado en el crecimiento del IPC, el 3,1 por ciento, pero con la sorpresa de lo que ustedes pensaban que iba a suceder al revés. El deflactor del producto interior bruto no es del 2,8 por ciento, como ustedes habían predicho, sino del 4,4, como ustedes se han apresurado a corregir; lo cual quiere decir que la inflación no está controlada y hay una consecuencia clara: que el crecimiento nominal del producto interior bruto ustedes lo estiman ahora en el 6,6 por ciento, un punto por encima de lo que ustedes habían previsto, lo que pone de manifiesto que aunque la economía española crece poco, como antes he indicado, el déficit público no se deteriora, lo han dicho las personas que me han precedido en el uso de la palabra; es la elevada y creciente inflación la que está cuadrando las cuentas públicas del Gobierno, aunque descuadre las cuentas privadas de los ciudadanos. Ustedes actúan así porque están enamorados de la inflación. Yo creo que es la mejor forma de decirlo; disfrutan con ello, favorece a sus amigos adinerados, a los amigos de determinados sectores hoy poderosos, como el sector inmobiliario, el sector de la energía, el de la distribución mayorista, pero les importa poco que, como consecuencia de todo esto, se deteriore a los ciudadanos asalariados.

Ustedes han demostrado a lo largo de esta legislatura que no combaten la inflación porque ésta explica y fundamenta una parte de la bonanza económica española, pero no tardará en pasar factura, como ya hizo ahora hace una década, precisamente a finales de la década prodigiosa, que termina el año 1992 con un triste año 1993, de fatal recordatorio. Y es así, aunque el señor vicepresidente segundo del Gobierno y Ministro de Economía se permita el lujo de no comparecer en esta Cámara cuando se le solicita su comparecencia para explicar cuáles son las políticas que el Gobierno va a plantear en cuestiones como la de la inflación. El señor vicepresidente no se ha dignado a responder a esta petición del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, ¿no tenía nada que explicar? ¿No podía explicar nada? ¿Esta Cámara no es digna de la comparecencia de un vicepresidente para explicar un tema que es clave en la economía española? No lo sé; lo cierto es que éste es el resultado.

Señor ministro, después de cuatro años subiendo a esta tribuna, como le estaba diciendo, para presentar una enmienda a la totalidad de los presupuestos, debo concluir que ustedes no redactan un proyecto de presupuestos como instrumento de gobierno; ustedes cumplen —reitero— un trámite formal, y ni siquiera escuchan, porque para ustedes gobernar es hacer lo que a ustedes les conviene en cada momento, sin necesidad de dar cuentas ni cumplir sus planes; no lo necesitan. Si ustedes quisieran gobernar, teniendo como instrumento de política de gobierno estos presupuestos o unos presupuestos cualesquiera, harían lo siguiente. Harían unos presupuestos orientados a reducir el crecimiento de los precios, particularmente en los epígrafes de primera necesidad; harían una política fiscal más restrictiva, para controlar a los sectores más incidentes en

la inflación; acompañarían el incremento de las pensiones, del salario mínimo, con una política de control y restricción de precios; abordarían políticas precisas para impulsar mejoras de productividad y competitividad; establecerían un plan concertado con comunidades autónomas, universidades, centros de investigación y empresas, para realzar la investigación tecnológica e implantar los instrumentos y cultura de la sociedad de la información; propiciarían a su vez un plan de ahorro individual y familiar para controlar el grave endeudamiento fomentado como signo de prosperidad y modernidad; y harían crecer la facturación del gasto social en la contribución al producto interior bruto para homologarnos con Europa, respondiendo así al creciente envejecimiento de la población, junto con el crecimiento de la marginalidad y de la exclusión.

Sería todo un acontecimiento, en una democracia manipulable como es la que ahora se vive en España, que un gobierno con compromisos electorales a corto plazo se preocupase por políticas de gobierno de futuro para sus ciudadanos. Pero, para resolver problemas, aun en períodos electorales, hay que reconocerlos y plantearlos. Para desarrollar una economía y una sociedad, hay que tener voluntad de influir sobre el curso de la economía de un Estado, y más siendo miembro de una comunidad europea con la que se debe acabar convergiendo.

Lo más destacado de estos presupuestos, como ya se ha citado anteriormente —y además también por algún analista político—, es que son anodinos; que no hay nada que destacar; que no sirven para desarrollar ni llevar al Estado y a las comunidades autónomas a una verdadera posición digna en Europa. Sirven para que el Partido Popular y el Gobierno sigan haciendo lo que consideran que son sus exclusivas necesidades.

Estamos de despedida, señor ministro, y estos momentos suelen ser oportunos para hacer balance y recordar que las decisiones tomadas nos han llevado alguna vez a algún sitio, que estamos situados en algún sitio; y en este caso, tras cuatro años de compartir con usted este veto al proyecto de ley de presupuestos, me veo en la necesidad de concluir algo que es evidente: estamos lejos de Europa, estamos tan lejos como hace cuatro años, o quizá peor, no acabamos de acercarnos a Europa, somos como el ciclista, que no acaba de incorporarse al pelotón. Estamos en manifiesta desconvergencia. Por ejemplo —y con datos que no son míos, sino que cito a la universidad Pompeu i Fabra y a sus trabajos recientemente publicados—, en la década de los noventa los recursos públicos destinados a financiar la Sanidad, las pensiones, el desempleo, la asistencia social, las incapacidades y la inclusión social, equivalían al 24 por ciento del producto interior bruto; la media europea entonces era del 28 por ciento. En el año 2003 la proporción del gasto público social respecto al producto interior bruto se sitúa, ya según sus datos, en el 19,2 por ciento, mientras que la media europea sigue siendo del 27,6 por ciento. En Francia y en Alemania es por ejemplo del 29 por ciento. El Gobierno español tiene el gasto público en protección social más bajo de la Unión Europea. El desempleo registrado en las oficinas del Inem mantiene la misma proporción que el año 2002 —hace exactamente un año—, se in-

crementan las contrataciones por influencia de la inmigración, pero aumenta la precariedad, la temporalidad, y se reduce de forma significativa la contratación fija. Asimismo, se incrementa el número de afiliados a la Seguridad Social, pero el 16 por ciento de los nuevos afiliados proceden de la inmigración y con contrato temporal.

España es el tercer país de la Unión Europea con menor tasa de actividad y, sin embargo, es el primero en porcentaje de empleo temporal sobre el total del empleo, exactamente el 30 por ciento.

Este Gobierno, que al inicio de la legislatura prometió, como compromiso personal del presidente, que por fin se iba a alcanzar el nivel del 1,3 por ciento en investigación y desarrollo en relación con el producto interior bruto, se ha encontrado con que la cruda realidad es muy diferente. Apenas se llega al final de su segunda legislatura al 0,9 por ciento, incluidos los gastos destinados a la Defensa, que representan el 52 por ciento del presupuesto destinado por el Gobierno a investigación y desarrollo. No voy a entrar a discutir ese hecho porque ya lo hemos hecho suficientemente y es una discusión inútil.

España se encuentra a la cola de la investigación científica europea, y no precisamente por culpa de sus científicos e investigadores. No es sólo cuestión de recursos, sino también de actitudes: intervencionismo en las líneas de investigación; reducción de las ayudas, sólo a un proyecto cada tres años; retrasos en la aportación financiera de los proyectos aprobados; condicionamiento de los contenidos de la investigación por prejuicios éticos de carácter partidista; descoordinación con las comunidades autónomas; desincentivación de la iniciativa privada, que no invierte en I+D ni con reformas fiscales de última hora para tapan el fracaso de un ministerio creado con toda pompa y por el que han pasado tres ministros; y finalmente, en España, investigar, es una osadía, cuando no un milagro.

Europa ha marcado el objetivo de dedicar el 3 por ciento del producto interior bruto a investigación y desarrollo. Para seguirles, no para alcanzarles, manteniendo el actual diferencial de un punto porcentual sobre el producto interior bruto, los presupuestos en investigación y desarrollo para el año 2004 deberían duplicarse, aunque no en ese 0,3 que he oído por ahí antes, sino en toda la cantidad de recursos destinados a ciencia y tecnología, que es poco.

Como cita un ilustre analista económico, los países que hacen bandera de la modernidad tecnológica son los representantes de la vieja Europa, Francia y Alemania. Estos dos países tienen un déficit público por encima del 3 por ciento, pero en la comparación de la brecha social y digital —que es una forma de medir la ubicación tecnológica en la que nos encontramos— ellos están en la primera división y España, con déficit cero, está a punto de bajar a segunda.

España es el segundo país de la Unión Europea en porcentaje de población con estudios primarios y secundarios que no sigue ningún estudio, lo que se llama fracaso escolar. Es el segundo país de la Unión Europea con menor población que tiene al menos un nivel de estudios superiores.

Y otro hito sonrojante de la europeidad de España es precisamente la confirmación, no reconocida por el Partido Popular y su Gobierno, de que una parte relevante de

la economía cotidiana discurre por circuitos fuera de la ley —y vuelvo a citar un reciente estudio que se ha hecho público.

Su ministerio, señor ministro, actúa como si la economía ilegal y el dinero negro no existieran, o por lo menos no se cita en estas Cámaras, pero de nuevo la realidad aflora y los análisis realizados con datos del Banco de España concluyen que 23 meses después de la incorporación definitiva del euro en la economía española, la economía sumergida ha atesorado 6.000 millones de euros, es decir, el efectivo en manos de las familias —una forma de medir el dinero negro existente— supone el 10 por ciento del producto interior bruto, el doble que en la eurozona.

Para colmo de nuestra distancia con Europa, el pasado día 5, en el Consejo de Ministros de Transporte de la Unión Europea, se acaba de reconocer que los Pirineos existen y que impiden nuestra relación con Europa; es decir, que estamos mal situados en Europa, que estamos descolocados. (*El señor vicepresidente, Rojo García, ocupa la Presidencia.*) Y por si esto fuera poco, nos han cambiado la penetración en Europa por los Pirineos por un canal que está en Centroeuropa. Por tanto, actuaciones como el proyecto ferroviario Zaragoza-Somport-Canfranc-Pau y las autopistas Burgos-Burdeos, Lérida-Toulouse, Barcelona-Toulouse y Barcelona-Marsella dormirán el sueño de los justos porque en el Consejo de Ministros de Transporte de la Unión Europea del pasado 5 de diciembre se ha perdido la oportunidad de que los Pirineos sean viables, permeables y comunicables. No sabemos por qué, y ustedes tampoco lo han explicado, pero los seis proyectos clave para comunicar las regiones pirenaicas con Europa no han sido incluidos en la red transeuropea de transporte. Y las consecuencias de esa decisión son el retraso en el desarrollo, el incremento de costes por congestión y la pérdida de calidad de vida en las regiones, comarcas y comunidades autónomas transpirenaicas. No hay peso político para influir.

Señor ministro, la legislatura se acaba, y han dejado ustedes una tarea pendiente que los presupuestos que pretenden aprobar no contempla ni aborda. Ustedes viven en otro mundo —no digo si es bueno o malo, sino sólo que viven en otro mundo—, pero conviene acercarnos a la dura realidad de los ciudadanos.

Para terminar, señor presidente, voy a hacer referencia a la ley de medidas fiscales, administrativas y del orden social, la ley de apañes, como podríamos denominarla. Hasta ahora nuestro grupo no había presentado a dicha ley una enmienda a la totalidad; pero, como ya he dicho, tras el hastío de repetir siempre lo mismo y comprobar que siempre se producen los mismos hechos este año hemos decidido hacerlo. Mi grupo ha presentado esta enmienda a la totalidad sobre la base de un argumento que ha hecho suyo y que ya apuntamos el otro día, con motivo de la modificación del Código Penal. Como los argumentos de los que estamos en esta Casa siempre parecen pobres o no merecen la atención que deberían, voy a citar los de un catedrático de Filosofía del Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid, que me han parecido oportunos. Y digo que son de un catedrático, para que después nadie me acuse de plagio, como le ha ocurrido a uno de mis compañeros. Dicho

catedrático dice lo siguiente. El Senado por fin parece haber encontrado esa misión que no aparecía clara en la Constitución. No es Cámara de segunda lectura, porque leer, lo que se dice leer, allí no se lee nada. Todo va en ella a tanta velocidad, que no da tiempo para semejantes lujos. Pero es, sin embargo, indispensable como Cámara para una novedosa práctica: legislar de matute —lo dice un catedrático—. Todo aquello que se quiere poner en vigor con prisas y poca reflexión va en una enmienda inesperada, adherida a cualquier ley que esté tramitándose en el Senado. Eso es lo que se llama coloquialmente colgar enmiendas. En el arte de colgar enmiendas la mayoría absoluta del Partido Popular, tan constitucionalista ella, ha adquirido una rara habilidad y una ilimitada osadía. Lo ha venido haciendo a lo largo de estos meses hasta extremos escandalosos. Cualquier ley, por importante que sea, se modifica o se rellena de preceptos extraños mediante el procedimiento de colgar en ella a última hora alguna enmienda. Hay ejemplos para todos los gustos, porque muchas de las leyes que pasaban por allí han salido provistas de esos colgajos legislativos. La llamada ley de acompañamiento estrena más de cien.

No voy a hacer más comentarios. Creo que lo dicho es obvio y evidente. Nuestra opinión, que coincide con la de este señor catedrático, coincide también con la que se contiene en las observaciones generales del informe del Consejo Económico y Social. Señorías, a la ley de acompañamiento que llegó a esta Cámara procedente del Congreso de los Diputados ustedes han presentado 112 enmiendas en plazo, ocho, en el trámite de ponencia —aparte de las técnicas, nuevas—, y 19 más en comisión, todavía abierta la ponencia. Es decir, han presentado 139 enmiendas nuevas respecto de la ley que se aprobó en primera instancia en el Congreso.

El Consejo Económico y Social realiza una serie de observaciones que reitera cada año y la primera y la más importante no es otra que el menoscabo de la seguridad jurídica que provoca el uso de una ley que regula una profusión de materias normativas dispersas, de difícil localización y entendimiento para el ciudadano obligado por ellas. Desde el punto de vista de la técnica legislativa, en opinión de este Consejo, esta ley no es el lugar más apropiado para efectuar correcciones de tipo técnico que no revisten la entidad suficiente como para figurar en una ley de medidas fiscales, administrativas y del orden social. Por otro lado, por otro, esta ley no se limita a aspectos directamente relacionados con la ejecución del presupuesto y se utiliza en ocasiones para introducir modificaciones normativas de calado que exceden de su carácter de complementariedad a la Ley de presupuestos, como es el caso —citan ellos— de las numerosas modificaciones parciales introducidas cada año en el Régimen Económico y Fiscal de Canarias, o las modificaciones de carácter contable que afectan al Código de Comercio, a las que yo añadiría las perpetuas y casi constantes modificaciones a las leyes de cajas de ahorros, la modificación que este año se ha realizado —y con esto me quiero solidarizar con el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió— al acuerdo sobre el Plan Hidrológico, que es una de las vergüenzas políticas mayores de los últi-

mos tiempos, las modificaciones como la Ley de Tráfico, etcétera.

El CES dice que quiere llamar la atención —y nuestro grupo también— y reiterar su disconformidad con la práctica habitual de incorporar materias nuevas no incluidas en el texto sometido a dictamen de este Consejo en el proyecto de ley que se presenta al Parlamento, lo que supone, cuando se trata de adiciones sustanciales, una merma de las competencias consultivas que son propias del Consejo en su función asesora en el proceso de elaboración normativa, y yo diría una absoluta falta de respeto a los grupos políticos presentes en este Senado.

Señor ministro, señor presidente, termino mi observación con el segundo argumento que nos ha llevado a presentar la enmienda a la totalidad a la ley de medidas fiscales, que es su afán de intervenir en las competencias organizativas de las cajas de ahorro. Vuelven a hacer ustedes una nueva modificación de las enmiendas que ya introdujeron en el Congreso, y llama la atención que ahora, además, hayan hecho un cambio de redacción respecto al texto allí introducido. Siguen buscando la cuadratura del círculo y ahora excluyen de la nueva redacción la referencia al consejo de administración y a la comisión de control, limitando la representación solamente a la Asamblea. Parece una retirada, una componenda para alcanzar acuerdos con la oposición y creo que es una solución—trampa porque el consejo y la comisión los nombra la Asamblea. Ustedes desean influir en ésta y les voy a decir por qué.

Hemos leído hasta la saciedad que este precepto incluido en la Ley de Acompañamiento es un artículo contra la ley vasca de cajas de ahorro a la que el Partido Popular tacha de discriminatoria y, cómo no, de excluyente. La ley vasca pondera la representación de las corporaciones municipales e impositores con parámetros de ponderación, como el número de oficinas, depósitos y habitantes, parámetros también utilizados por otras comunidades autónomas. Se trata de determinar el grado de implantación —lo que se llama territorialidad— de la caja de ahorros en cada comunidad autónoma. Éste es un criterio más racional, justo, equitativo, adecuado y respetuoso que el criterio de proporcionalidad a los depósitos que sólo para algunos grupos quiere establecer el precepto que estamos debatiendo.

El principio de territorialidad es inherente al concepto social de las cajas de ahorro, y quisiera hacer una pregunta a los señores del Grupo Parlamentario Popular. Supongamos que cualquier señor, por ejemplo, el presidente de la compañía más importante que pueda existir en el Estado español desde cualquier punto de vista —desde el de su facturación, su volumen de riqueza, su influencia política y económica, etcétera— tiene depositados 60 millones en una sucursal de la Caja Madrid de Toledo. ¿Debe ponderar lo mismo este depósito que los depósitos de 100.000 impositores que tengan en conjunto 60 millones de euros?

Por otra parte, ¿qué se entiende por depósitos? ¿Deben computarse los depósitos de Repsol, Iberdrola, o de la Dirección General del Tesoro a la hora de nombrar a los representantes de los impositores en las oficinas? A nuestro modo de entender, el criterio de proporcionalidad de los

depósitos supone un aumento de la exclusión financiera al reducir el peso de impositores y vecinos de los núcleos pequeños en los órganos de gobierno de las cajas de ahorro. Como ustedes saben, el 35 por ciento de los municipios, aquellos que son menores de 1.000 habitantes, sólo poseen para la intermediación financiera una sucursal de una caja de ahorros, porque ninguna entidad financiera...

El señor VICEPRESIDENTE (Rojo García): Senador Albistur, vaya terminando.

El señor ALBISTUR MARIN: Terminó ya, señor presidente.

Un intento también de deslocalización de las cajas de ahorro a favor de los grandes núcleos urbanos con unos objetivos. No olvidemos que hay importantes sectores económicos que pretenden la privatización de las cajas de ahorro; sectores económicos vinculados en su mayoría al Partido Popular. La deslocalización regional de las cajas es un paso previo en este proceso de privatización. Si lo que pretende el Partido Popular en el fondo es privatizar las cajas para que unos sectores económicos intervengan en los beneficios de la privatización, debería plantearlo directamente y no buscando subterfugios en la LORCA o intentando hacer esa modificación partiendo de esta ley. Salvo que tengan otros fines inconfesados aparte del de ir contra el nacionalismo vasco, el Grupo Parlamentario Popular debería retirar este precepto puesto que es una chapuza antológica y una falta de respeto hacia las competencias de las comunidades autónomas.

Señor ministro, tengo que manifestarle mi reconocimiento personal y, por qué no decirlo, también mi aprecio personal. Han sido cuatro años de trabajo con usted y uno siempre aprende algo, pero estamos en diferentes posiciones políticas y también económicas por los resultados que estamos viendo. Le deseo mucha suerte. No sé si volveremos a vernos en esta tribuna. Si el pueblo lo quiere, uno volverá aquí aunque no sé si será de nuevo como portavoz de presupuestos. Le agradezco sinceramente la relación mantenida con usted, pero ya ve que estamos en desacuerdo con los presupuestos y con la ley de acompañamiento.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Rojo García): Gracias, senador Albistur.

Se suspende la sesión hasta las cuatro de la tarde.

Eran las catorce horas y treinta minutos.

Se reanuda la sesión a las dieciséis horas y diez minutos.

El señor VICEPRESIDENTE (Caneda Morales): Señorías, se reanuda la sesión. Buenas tardes.

Para defender las propuestas de veto del Grupo Parlamentario Mixto compartirán el tiempo el senador Quintana y el senador Mur.

Tiene la palabra por quince minutos el senador Quintana.

El señor QUINTANA GONZÁLEZ: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, señor ministro, se vuelve a someter a debate, como cada año, la ley general de presupuestos y su ley de acompañamiento. Y una vez más, tenemos que constatar que la ley de acompañamiento se acaba convirtiendo en un auténtico compendio de innovaciones legislativas con un cierto carácter heterodoxo y dispar. Desde luego, en cualquier caso, tiene poco que ver con el cometido legislativo que una ley de acompañamiento debería tener.

Creemos que con esta práctica legislativa y parlamentaria se coarta el debate, se impide la participación de los grupos parlamentarios y se hace política al margen de los sectores sociales a los que después van a afectar esas modificaciones legislativas que hoy se someten a consideración.

En este proyecto se afectan nada menos que cincuenta disposiciones con rango de ley y una ley orgánica y, desde luego, no encuentran su razón de ser en una más eficaz aplicación del programa económico del Gobierno, como diría el Consejo de Estado al referirse a las características y finalidad de la ley de acompañamiento.

Por modificar hasta se va a modificar la legislación sobre tráfico permitiendo a los agentes que retiren el carné de conducir de manera directa. Creo que únicamente aquel que fue capaz de comparar el tocino con la velocidad sería capaz de establecer una similitud y comparación directa en lo que tiene que ver una medida legal como ésa con la necesidad de acompañar legalmente a las medidas presupuestarias y económicas del Gobierno.

Eso sí, modificaciones como ésa que se nos traen aquí por ese mecanismo ya están siendo publicitadas con spots al efecto en las televisiones. Ayer podíamos ver ya como el Gobierno anunciaba modificaciones en la Ley de Tráfico incluso antes de poderla debatir aquí, y después se dice maliciosamente que el Gobierno no tiene respeto por las Cámaras. ¿Cómo no lo va a tener? Tiene todo el respeto del mundo por las cámaras, por las cámaras de televisión, no por las otras, claro.

Además, las reformas de carácter tributario contenidas en el proyecto de ley de acompañamiento son de nuevo considerables, sin que se acompañe la propuesta de creación y aumento de tasas con una memoria económica que sirva para valorar adecuadamente el alcance de las mismas, con lo que se desprovee a los titulares del Poder Legislativo, es decir, a todos nosotros, de la capacidad de pronunciarse sobre las mismas contando con todos los elementos necesarios para ello.

Continúan ustedes con la técnica del aumento de la presión fiscal a través del aumento de la imposición indirecta. Por cierto, con el inestimable apoyo de alguna comunidad autónoma como es el caso de Galicia.

Recuerdo que hace poco tiempo el señor Ruiz Gallardón, alcalde de Madrid, propuso alguna modificación impositiva en el ámbito de su término municipal, y tal situación, que provocó desasosiego en el Partido Popular porque chocaba con la tan cacareada política de bajada de impuestos, sirvió para crear un auténtico problema de Estado y para que todo se convulsionara y poco menos que estu-

viéramos al filo de la navaja de lo que podía suceder con una propuesta de ese estilo.

Pues bien, en Galicia el Gobierno del Partido Popular inventa un impuesto y sube tres, y no hay absolutamente nada que pueda hacer variar la postura del Gobierno gallego ni considerar esto, cuando menos, un problema de Estado, igual que el que pudo crear el señor Gallardón. Esto no está en sintonía con las manifestaciones del Partido Popular, que en su política estatal nos dice todos los días —como ha repetido hoy el ministro— que está aquí para bajar los impuestos.

El próximo año los gallegos pagaremos la luz, la gasolina y el gas más caro que el resto del Estado. Los gallegos pagaremos casi el doble por nuestro recibo de la basura, concretamente más del 40 por ciento para que nos recojan la basura, y el doble por el recibo del agua. También pagaremos los gallegos la gasolina y el gasóleo un céntimo más caro, según dicen para presuntamente financiar la sanidad, y todos sabemos que va a ser popularmente conocido como el céntimo del plan Galicia. La realidad es ésta y eso es lo que tenemos que enfrentar.

A pesar de ello, ustedes continúan diciendo que en España bajan los impuestos. Personalmente, tengo que pensar que ustedes están dispuestos a practicar el separatismo de Estado, es decir, considerar que Galicia no es España, y por tanto lo que suceda en Galicia a nivel impositivo para nada quita la valoración global que, respecto a la presión fiscal en el Estado, ustedes puedan tener y trasladar a la sociedad.

Por si esto fuera poco, en la ley de acompañamiento ustedes afectan de manera significativa a importantes sectores económicos con modificaciones no consultadas al sector implicado. Mención especial merece en este apartado la regulación introducida en materia del régimen de la cuota láctea. Como siempre, las medidas se centran, otra vez, en el régimen sancionador de la tasa suplementaria; es decir, en castigar a todo aquel que produzca más de lo debido en vez de utilizar la ley de acompañamiento y el ejercicio presupuestario para analizar y buscar las causas de esa sobreproducción y, sobre todo, para garantizar la capacidad productiva de las explotaciones en un sector básico para Galicia.

Les recomiendo que, en vez de citar tanto a Adam Smith, le lean todavía más de lo que lo hacen, sobre todo aquella parte en la que ese economista que tanto les gusta dice que la misión primera de un gobierno es no causar a la gente más problemas, vejaciones y opresión de lo estrictamente necesario. Les aseguro que lo único que reclama hoy el sector lácteo en Galicia es que el Gobierno les deje en paz, que les deje trabajar y producir. Nada más le piden al Gobierno, igual que en su día vaticinó Adam Smith.

Además, desde el punto de vista del Bloque Nacionalista Galego, los presupuestos generales del Estado que se someten a nuestra consideración son la demostración evidente de la falta de compromiso del Gobierno con Galicia. Hemos pasado un último año marcado por el «Prestige» y la guerra. El presupuesto para el año 2004 que se somete hoy a nuestra consideración tiene en cuenta una de esas causas: la guerra, y la tiene tan en cuenta que en la pro-

puesta presupuestaria aplica la necesidad de aumentar los gastos en Defensa e introduce, vía Ministerio de Ciencia y Tecnología y supuestas inversiones en I+D, la compra y tecnificación superior del armamento del Ejército español. Se tiene en cuenta esa causa, la de la guerra, pero no la otra, la del «Prestige».

En el «Prestige» ni se sabe ni se espera, y en vez de hacer una auténtica evaluación de los daños del ecosistema ustedes siguen empeñados en considerar al mar y lo que significa únicamente desde una perspectiva turística. Para ustedes el problema del «Prestige» es que las playas estén limpias, y yo les puedo asegurar que el problema medioambiental que originó el «Prestige» significa algo bastante más profundo para el conjunto de los gallegos y las gallegas, y sobre todo algo más profundo para un sector productivo tan importante como es el complejo mar-industria en nuestro país. En el año de nuestro particular Chernobyl —y no son palabras mías, son palabras del ministro Álvarez-Cascos—, en el año de la mayor catástrofe ecológica sufrida por el Estado —y no son palabras mías, son palabras del señor Aznar—, la parte del territorio del Estado directamente afectada recibe ahora en estos presupuestos la racanería del Estado. La gran hazaña del Gobierno para combatir los efectos del «Prestige» se centra en dos aspectos: primero, en exponer el Plan Galicia y, segundo, en asegurar que en estos presupuestos se aumenta el 30 por ciento de la inversión consignada para Galicia con respecto al año anterior.

A pesar de la catástrofe, Galicia recibe en estos presupuestos el 4,6 por ciento de la inversión total que se efectúa en el Estado. Si siguiéramos cualquier criterio demográfico, veríamos que ese porcentaje queda debajo de lo que nos correspondería por nuestra tasa demográfica, que está hoy en el 6,5 por ciento del conjunto del Estado. Se consignan en este presupuesto 1.045 millones sobre los 22.758 consignados para el conjunto del Estado, y esa asignación para Galicia después de la catástrofe del «Prestige» queda por detrás de Madrid, Cataluña, Andalucía, Castilla y León y Valencia, que tendrán muchísimas necesidades que yo creo que es preciso atacar, pero que todos coincidirán conmigo en que no tuvieron que padecer una catástrofe como la del «Prestige». Por tanto, ¿dónde está el compromiso? ¿Dónde está la variación? Todos podremos entender que matemáticamente el 30 por ciento por encima del cero sigue siendo cero, y el 30 por ciento a mayores, que ustedes alardean de tener, en este presupuesto, en inversión consignada a Galicia con respecto al año pasado, nos sigue dejando por debajo de la media que nos correspondería si no hubiera ningún tipo de catástrofe.

Además, de la inversión consignada para Galicia, la mayor parte se refiere a obras ya programadas antes del «Prestige». Por tanto, una de dos, o este Gobierno tiene una capacidad de predicción tal que no sólo es capaz de prever los accidentes, sino que ya coloca las obras para atacarlos antes de que se produzcan, o nos están tomando el pelo. Elijan ustedes la que quieran, pero la realidad es que los 17,7 millones de euros directamente relacionados con el «Prestige» suponen únicamente el 0,08 por ciento

de la inversión prevista en todo el Estado. Esa es la realidad numérica incontestable.

Para acabar, el Plan Galicia, el gran plan que según el señor Aznar iba a acabar con todos nuestros problemas, no sólo presentes sino también futuros, ésa era la consideración que se daba al plan el día que se presentó en la Plaza de María Pita de La Coruña, un plan de choque para atacar el problema provocado por el «Prestige» y para a medio y largo plazo conseguir que Galicia recuperara su tono económico y convergiera con Europa.

Pues bien, ¿cuál es la realidad? La realidad es que de los 12.459 millones de euros consignados en el Plan Galicia, el propio Gobierno empieza ya por aceptar que tan sólo 5.200 millones, esto es, el 42 por ciento, significan nueva inversión; el resto de las obras consignadas en el Plan Galicia, esto es, nada menos que el 58 por ciento, eran obras ya programadas por el Gobierno con un carácter plurianual tan a largo plazo que muchas de ellas se tendrían que ejecutar después del año 2010. ¿Dónde está el plan de choque cuando, en realidad, de lo presupuestado sólo el 42 por ciento significa obras nuevas? Por si no quedara ahí el problema, de esos 5.200 millones de euros para obras nuevas, dentro del Plan Galicia, resulta que 1.470 millones de euros se destinan al inicio de la planificación del AVE del Cantábrico, que nunca se realizará antes del año 2010. ¡Largo lo fían! Además, 1.000 millones de euros son para la limpieza de playas, con lo cual no podemos considerarlo como inversión sino, únicamente, como la necesidad de atacar un problema concreto en un momento oportuno; y, 300 millones de euros, están destinados a créditos a devolver por los beneficiarios, si los hubiera. Ésa es la realidad del Plan Galicia, que ustedes nos presentan como la solución a los problemas de todo nuestro país.

Todo esto ocurre en el año de la solidaridad, en el año en que la sociedad civil del Estado se ha volcado con Galicia en un ejercicio de solidaridad ejemplificado en los miles de voluntarios que, unidos a los voluntarios gallegos, trabajaron sin descanso en las playas.

El Gobierno no está a la altura de la calidad solidaria de los ciudadanos a los que representa. Tenemos un Gobierno que en el año del Prestige nos regala un superávit de 3.500 millones de euros; y, en el mismo año, la Xunta de Galicia presenta en sus cuentas un déficit de 40 millones de euros.

El señor VICEPRESIDENTE (Caneda Morales): Concluya, senador Quintana, por favor.

El señor QUINTANA GONZÁLEZ: Acabo ya, señor presidente.

¿Qué quiere decir esto? Que después de soportar la catástrofe, los gallegos pagamos, con nuestro déficit y subidas de impuestos, la irresponsabilidad del Gobierno central, en cuyas competencias recaía la solución de un problema como el del «Prestige».

Mientras tanto, un nuevo barco se pasea hoy por las costas de Galicia; no es el único, son 35 cada semana, pero, eso sí, el presidente Fraga ya ha dicho que si se mueve un centímetro, allí hay una fragata para hundirlo de un caño-

nazo. Desde luego, la querencia del Partido Popular por hundir barcos empieza a causar preocupación.

Nada más y muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Caneda Morales): Muchas gracias, senador Quintana.

Para la defensa de su veto, tiene la palabra el senador Mur Bernad, del Grupo Parlamentario Mixto.

El señor MUR BERNAD: Gracias, señor presidente.

Señor ministro de Hacienda, gracias por estar presente, a esta hora temprana de la tarde, en este debate sobre los presupuestos generales del Estado y la ley de medidas.

Subo a esta tribuna en nombre del Partido Aragonés, y como senador de la Comunidad Autónoma de Aragón, para defender dos enmiendas de veto: la primera, a los presupuestos generales del Estado para el año 2004 y, la segunda, al proyecto de ley de medidas fiscales, administrativas y del orden social.

En el tiempo compartido que tengo en este turno, intentaré explicar el porqué de esta posición política ante las leyes más importantes de cada ejercicio, ya que a través de ellas se muestra la expresión cifrada de un programa político; en este caso, el del Gobierno del Partido Popular.

Soy consciente de que mi intervención y mis vetos serán puramente testimoniales, dado los usos y costumbres del grupo mayoritario en esta Cámara, cerrado a la negociación y al acuerdo, y creyendo todavía que las mayorías parlamentarias confieren la verdad y la razón absoluta; sin embargo, esta posición circunstancial —la de las mayorías—, no debe impedir ni excusarme de la defensa de los principios en los que uno cree, intentando aportar ideas y propuestas constructivas. En este sentido, confío en la pedagogía que podamos hacer en este debate de manera que, si no son aceptadas ahora, dada la proximidad de las elecciones hará, estoy seguro, que el Partido Popular recoja alguna en los programas electorales que presente ante los ciudadanos. Por tanto, soy de los que creo que nunca se pierde el tiempo cuando se trabaja con rigor y seriedad.

A estas alturas del debate y de la tarde ya se han dicho casi todas las objeciones y críticas que se pueden hacer a los dos proyectos de ley que nos ocupan. Los portavoces que han intervenido con anterioridad ya han dicho, a través de un análisis crítico, cosas que yo puedo compartir, pero también quiero aportar la visión que desde Aragón tenemos de estos presupuestos generales del Estado, una comunidad autónoma que espera mucho de la acción inversora del Estado a través del Gobierno central, y que exige que se cumpla el mandato constitucional de la solidaridad entre territorios y clases sociales.

Estos presupuestos de 2004, señor presidente, se pueden calificar de continuistas, de puro trámite, con pocas novedades en su planteamiento, estructura y filosofía. Son el reflejo de una dogmática obsesión por el equilibrio presupuestario y con una clara renuncia a influir sobre el curso de la economía del país. Son unos presupuestos de un Gobierno liberal para un Estado en el que todavía existen, y a veces se agrandan, las diferencias entre los territorios y sus habitantes. Unos presupuestos que renuncian a la

igualdad de derechos y oportunidades para todos los ciudadanos. Y prueba buena de lo que estoy diciendo es el aplauso con que estos presupuestos fueron acogidos por los círculos empresariales. Estos presupuestos y la filosofía que los inspira lo fijan todo a la buena marcha del mercado, desconociendo fenómenos como la globalización, el poder fáctico de las empresas transnacionales y la influencia de las políticas económicas europeas. El equilibrio presupuestario está basado en un crecimiento sostenido y mayor que las economías de nuestro entorno para el año 2004. Son, me atrevería a decir, los presupuestos de la macroeconomía en detrimento de los presupuestos de la microeconomía. Tenemos que crecer a un ritmo superior al tres por ciento, y la inflación no debe superar el 2,9 para que estos presupuestos puedan cumplirse.

Y si estas previsiones son correctas, el tiempo nos lo dirá, pero el Gobierno ya está acostumbrado a modificarlas en función de la realidad que, como dice el refrán, es bastante tozuda y persistente. Una realidad que puede cambiar las previsiones, entre otras razones, porque la demanda interna se puede resentir por el alto grado de endeudamiento de las familias, un repunte de los tipos de interés que en algún sector, como las hipotecas de las viviendas, resultaría dramático para los ciudadanos, y todo ello en un contexto de debilidad del mercado del trabajo. En un contexto mucho más favorable no se han cumplido las previsiones de los Presupuestos Generales del Estado de 2002 y 2003, por tanto, ¿por qué vamos a creernos que ahora va a ocurrir una cosa distinta? La prudente previsión que en el sector de la construcción ha fijado el Gobierno en el tres por ciento de crecimiento para el 2004, ya nos da alguna pista de la prudencia con que debería haber actuado en estos presupuestos, puesto que utiliza índices de crecimiento menores a los de los años 2002 y 2003. Persiste, a nuestro juicio, la amenaza de una recuperación de las economías europeas con alzas en los tipos de interés y el efecto de la incorporación de los nuevos países a la Unión Europea, estoy seguro que van a influir también en nuestra política económica y presupuestaria. También por el lado de los ingresos, señor presidente, este presupuesto puede tener problemas si la tasa de actividad es menor a lo previsto y, por tanto, se resiente la recaudación.

Permítame un minuto, ya que estamos con los presupuestos para, aprovechando la presencia del señor ministro de Hacienda, recordar que nos hemos quedado sin saber cuál es el criterio del Gobierno del Estado español sobre una figura impositiva que ha sido objeto de bastante polémica en los últimos meses, me refiero al Impuesto de Sucesiones y Donaciones. Ya sé que la recaudación no es del Estado, por tanto, el señor ministro puede decir que eso no le importa. Pero a mí me gustaría saber cuál es el criterio sobre un impuesto cedido a las comunidades autónomas, que se ha echado al debate público y mediático, y no sé si el Partido Popular y el Gobierno al que sustenta tiene un criterio homogéneo para toda España, tiene criterios parciales en función de si gobierna o no en una comunidad autónoma, o simplemente es un debate estéril que han lanzado para entretener a la clientela a través de los medios de comunicación. En

todo caso, había pedido una comparecencia para aclarar este asunto en profundidad, no ha sido posible y no sé si será posible conocer el criterio del Gobierno antes de la campaña electoral.

Tengo que ir resumiendo, señor presidente, y decir que estos presupuestos no nos gustan porque no se van a poder cumplir las previsiones de crecimiento, porque no cumplen el mandato constitucional reflejado en los artículos 47, 138 y 142 de la vigente Constitución Española, ya que en ellos no se atiende a los principios del equilibrio territorial y solidaridad entre sus habitantes. Desde Aragón, además, los vemos con una gran preocupación, ya que no existen partidas suficientes para las obras de regadíos, pendientes desde hace años y, sin embargo, se destinan partidas cuantiosas a las obras del trasvase del Ebro, que han pasado a ser la máxima obsesión del Gobierno de España en materia hidráulica.

Igualmente, infraestructuras básicas como la autovía Lleida-Huesca-Pamplona, el ferrocarril Canfranc-Zaragoza-Teruel-Valencia y tantas y tantas como fueron prometidas en su día con los programas electorales del Partido Popular vemos que no tienen reflejo presupuestario.

En definitiva, la España interior no cuenta con los presupuestos necesarios para su equiparación económica y social a las zonas costeras, que son, al parecer, según se desprende de estos presupuestos, la única prioridad del Gobierno, además de Madrid.

Y también nos preocupa, señor ministro, que no exista ninguna previsión presupuestaria que permita cumplir el artículo 48 del Estatuto de Autonomía de Aragón, una ley orgánica, ahora que está tan en cuestión el debate sobre la financiación de las comunidades autónomas y la modificación de los regímenes fiscales, respecto de la que les recuerdo que ya obtuvimos en el año 1996 un acuerdo para modificar el Estatuto de Autonomía, con un artículo 48 que sigue esperando en el limbo, a ver si el Gobierno alguna vez se decide a adoptar medidas para su aplicación.

Voy a abordar también muy rápidamente el veto a la ley de medidas que se nos presenta, pues, a mi juicio, adolece de una serie de defectos formales, sobre dispersión normativa, inseguridad jurídica y falta de respeto al trámite parlamentario, pues, recordando lo que han expuesto ya otros portavoces y lo manifestado en las últimas semanas en otros debates también con el mismo procedimiento de colgar a través de enmiendas del propio Grupo Parlamentario Popular cuestiones muy interesantes para todos los españoles, están viciando una ley que tenía un exclusivo objeto, cual era acompañar a las medidas de ejecución del presupuesto que se presenta.

No obstante, lo que han manifestado el Consejo Económico y Social y el Consejo de Estado en sus dictámenes me excusa cualquier profundización en la crítica, muy argumentada, a esta ley de acompañamiento que ustedes una vez más vuelven a presentar. Y no sé además por qué no siguen diciendo lo mismo que afirmaban ustedes respecto a esta ley de acompañamiento cuando el Partido Popular estaba en la oposición, señor Montoro, porque ustedes fueron muy críticos con el Gobierno del Partido Socialista diciendo que utilizaba también de manera irregular este pro-

cedimiento. ¿Por qué ustedes lo han copiado, incluso si me permiten, lo han mejorado en su utilización?

En la actual tramitación parlamentaria de este proyecto de ley, con la cantidad de normas que aborda, puesto que va a modificar casi 50 normas con rango de ley, decretos legislativos y una ley orgánica, es imposible entrar en el detalle de ninguna de ellas. Pero a nosotros, en Aragón, nos preocupa una de manera muy, muy especial, y es la obsesión que tiene el Gobierno en lo que se refiere al trasvase, así como la utilización que hace de esta ley de acompañamiento para declarar la urgente expropiación que da lugar a las obras de infraestructura para la realización de las transferencias de los recursos hídricos del Plan Hidrológico Nacional. Y todo ello sin contar con las necesarias declaraciones de impacto medioambiental ni esperar a los recursos judiciales que están tramitándose, así como a la opinión de la Unión Europea, que debería pronunciarse.

Pero las sorpresas en este aspecto no acaban aquí. Nos hemos enterado ahora, precisamente en la tramitación parlamentaria, que el Grupo Parlamentario Popular, volviendo a tener otra vez la iniciativa legislativa que el Gobierno a pesar de su uso y abuso no ha autorizado en este caso, ha tenido la feliz ocurrencia de presentar la enmienda número 661 para modificar de manera sustancial, drástica, radical la Ley de Aguas. Y todo ello bajo una excusa que se nos antoja absolutamente pueril, porque ustedes podían no haber justificado esa enmienda y sencillamente haber manifestado que la presentaban porque les daba la gana o, en la terminología hidráulica acuñada por el Partido Popular, «por cañetes». Evidentemente, argumentar que el plazo para la transposición de la directiva europea 2060 termina el día 22 de diciembre de este año como excusa para presentar esta iniciativa por esta vía tan irregular y tan excepcional me parece que no se lo creen ni los chiquillos el día de los Santos Inocentes, señores del Gobierno del Partido Popular.

Digan ustedes que su mayoría absoluta les da pie suficiente para hacer lo que les dé la gana. Y tienen razón, porque la pueden introducir cuando quieran, como así han hecho. Evidentemente, la van a aprobar con sus votos, pero no intenten convencernos, porque ello expresa absolutamente lo contrario. El procedimiento que ustedes han utilizado es la mejor prueba de que no están seguros de lo que están haciendo, de que tienen que ir parcheando esa Ley del Plan Hidrológico Nacional con esa modificación en la ley de acompañamiento porque parece que se les quedaba corta. Tenían todavía algún obstáculo debido a los problemas surgidos en el Delta del Ebro, y a otros muchos que sin duda seguirán apareciendo, y han querido apuntalar un proyecto, señores del Gobierno del Partido Popular, señor ministro, que le recuerdo una vez más es innecesario, no va a solucionar ningún problema, sino que va a crear otros, va a aumentar los desequilibrios y con el que seguramente lo único que obtendrán será algún voto más en el litoral de la cuenca mediterránea.

¡Pero si ustedes ya han ganado por mayoría absoluta, señorías! Realmente no entiendo por qué realizan ustedes un esfuerzo tan grande únicamente para obtener algún que otro voto más, desequilibrando España en su conjunto, y

sobre todo —y esto es aún peor—, a través de unos procedimientos todo lo democráticos que permite su mayoría absoluta, pero que evidentemente no son respetuosos con la voluntad popular, con el trámite parlamentario en general, ni con el del proyecto de ley de presupuestos y de acompañamiento que en este momento estamos debatiendo en particular.

Señor presidente, señor ministro, señoras y señores senadores, les hablo desde la visión aragonesa, que es también una visión de Estado. En este momento debo recordar a sus señorías que ustedes no son los únicos que tienen visión de Estado, sino que en Aragón también la tenemos, eso sí, salvo que se empeñen en arrinconarnos, en imponernos tantas normas, leyes y trasvases que nos obliguen a sentirnos extraños en un Estado que, a través de los presupuestos, leyes, enmiendas y de la ley de acompañamiento hace un flaco servicio al territorio aragonés, a sus habitantes y a la España interior, es decir, a toda esa España que a ustedes parece no preocupar, quizá porque consideran que ésta no tiene problemas o sencillamente porque representa un número de votos inferior al de aquellos territorios a los que ustedes quieren favorecer con esas normas tan injustas que, como he dicho antes, no sólo no van a resolver ningún problema, sino que originarán muchos otros.

Ustedes deberían reflexionar sobre todo esto porque no todas las leyes se cumplen. Hay muchas normas que se aprueban pero se incumplen, y nada me agradaría más que, en lo que se refiere al trasvase del Ebro y a las modificaciones que suscita el proyecto de ley de acompañamiento de los presupuestos para el ejercicio 2004, ésta fuera una ley que, aprobada con la mayoría de sus votos, no se cumpliera porque imperara la razón y el sentido común.

Nada más, y muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Caneda Morales): Muchas gracias, senador Mur.

A continuación, y para defensa del veto presentado por los senadores Cabrero Palomares y Cuenca Cañizares, tiene la palabra el senador Cuenca.

El señor CUENCA CAÑIZARES: Señor presidente, señorías, señor ministro, quiero comenzar manifestando que subo a esta tribuna en nombre de Izquierda Unida para hablar de política. No voy a establecer un debate de números, algo que ni siquiera le voy a cuestionar ni a discutir, sino que, como digo, vengo a hablar de política, de criterios, de prioridades y de un modelo social y político que, ya anticipo, vemos de diferente forma a como lo ven ustedes. He querido aclarar este extremo porque —e insisto en ello— no pretendo establecer debate alguno sobre números, sino plantearlo, en primer lugar, sobre los criterios y objetivos que armonizan el presupuesto que ustedes han elaborado, y en segundo lugar, sobre los criterios y prioridades que a nuestro juicio deben plantearse.

No oculto que a Izquierda Unida le preocupan considerablemente los antecedentes económicos con los que está llevando a cabo este presupuesto. Son varios los elementos que toman ustedes como referente, y el primero de ellos, que nosotros combatimos —y quiero dejar esto muy claro,

señor ministro—, ya tuvo usted tiempo de plantearlo en otro foro, donde dijo que nosotros somos unos «gastones». En este sentido debo anticipar a su señoría que, al igual que no voy a rebatir los números, acepto a priori que somos «gastones», y lo somos a la hora de generar políticas sociales, a la hora de invertir públicamente y a la hora de corregir desequilibrios, tanto sociales como territoriales.

Como le decía, hay sobre todo un concepto sobre el que ustedes trabajan para elaborar el presupuesto. Siempre se han tenido en cuenta varios criterios a la hora de elaborar un presupuesto: se ven las necesidades y en función de esas necesidades se ve cómo se generan los ingresos para afrontar esa política de gastos y desarrollar esos objetivos y esas prioridades que tiene un presupuesto.

Ésa es una forma de gobernar y otra es marcar unos objetivos con otros compañeros de viaje europeos —luego hablaremos de ello— y a partir de ahí condicionar todas y cada una de las políticas. Me estoy refiriendo, señor ministro, al Pacto de estabilidad, un pacto que establece que puede haber un déficit entre el 0 y el 3 por ciento. Ustedes han dicho que 0 y la duda que a nosotros nos invade es por qué no puede haber un arco entre 0 y 3, y no podemos tener un posible endeudamiento para poder realizar ciertas políticas, políticas que más adelante iré detallando. Si hubiera un solo punto entre el 0 y el 3 cambiaría radicalmente la situación en algunas políticas, fundamentalmente sociales, y se corregirían esos déficit que existen en nuestro país. Pero además no sería malo, por ejemplo, que tuviéramos un punto negativo, porque la situación nos acompaña y porque los bajos intereses nos permitirían perfectamente diferirlo en el tiempo y afrontar en estos momentos inversión pública y desarrollo de alguna de las políticas que anteriormente manifestaba.

Suponiendo que fuera rígido el déficit entre el 0 el 3 por ciento y suponiendo que estuviéramos dentro de ese arco y pudiéramos desarrollar políticas, como decía anteriormente, sería una lógica de respeto de todos los socios o compañeros de la Unión Europea. Pero usted sabe bien que asistimos a momentos bastante preocupantes en cuanto al cumplimiento del Pacto de estabilidad. Sabemos que hay dos países que necesitan resolver unas prioridades, unos objetivos y que no tienen más remedio que avanzar en el endeudamiento, con lo que nos demuestran claramente que esto no era un corsé, una cosa cerrada y bloqueada y que nos iba a llevar a una supuesta catástrofe. No, dos países de las características de Alemania y Francia no lo van a cumplir y no van a tener ni sanción ni regañina, tan sólo unas palabras diciendo que no gusta y que no queda bien. Nosotros partimos del hecho de que eso no era un elemento tan cerrado ni tan bloqueado y que, por tanto, se podía y se puede. Aun así, le decimos que a nosotros no nos importaría estar entre el 0 y el 3 por ciento en esos márgenes de endeudamiento para desarrollar esas políticas a las que anteriormente hacía referencia.

El segundo concepto sobre el que elaboran el presupuesto es el equilibrio presupuestario. Y ustedes hacen algo tan sencillo como es equilibrar el déficit contable con las cuentas de la Seguridad Social de los últimos años. Y la primera interrogante que nos surge en este punto es por

qué el superávit que nos da la caja de la Seguridad Social no se destina a incentivar políticas de esa materia, y estaríamos hablando de las pensiones, de conseguir que ninguna pensión en nuestro país esté por debajo del salario mínimo interprofesional, de facilitar políticas activas en torno a la generación de empleo y continuar fomentando que esa caja pueda tener en el futuro mejores resultados. Pero ustedes hacen un equilibrio presupuestario con una técnica, que es coger de un lado, cuando lo que están analizando clarísimamente, como decía anteriormente, es un problema presupuestario.

Un tercer elemento que plantean ustedes es reducir los impuestos directos, y recientemente hemos podido comprobar cómo el 10 por ciento de los contribuyentes de rentas más elevadas se han beneficiado del 50 por ciento de la rebaja fiscal. Se reducen los impuestos directos para unos pocos, se benefician unos poquitos de la gran tarta de la rebaja fiscal y, sin embargo, se aumentan los impuestos indirectos, que repercuten en la inmensa mayoría de la ciudadanía. No solamente se aumentan los impuestos indirectos, sino que algunas administraciones de algunas comunidades se ven obligadas a implantar algunas figuras nuevas, como es el céntimo sobre los hidrocarburos, para financiar servicios públicos, ya que desde el Gobierno del Estado se detraen o se recortan partidas que luego cada una de las comunidades tiene que soportar.

Por tanto, nosotros decimos que la política fiscal aplicada es injusta en la distribución de los esfuerzos entre los ciudadanos; los impuestos han crecido 2,3 puntos del PIB en el conjunto del Estado, en el período comprendido entre los años 1995 y 2000, concentrándose especialmente los impuestos sobre el consumo 1,5 puntos adicional, lo que les hace ser protagonistas dentro del sistema tributario; estamos en el 51,7 frente al 48,3 en que estábamos en 1995, y le recuerdo esa fecha porque es el momento en que llegan ustedes al Gobierno, trasladando un mayor esfuerzo relativo a las personas con menores ingresos.

Las sucesivas reformas del Impuesto sobre la Renta no sólo implican una pérdida de ingresos —estamos hablando de unos 7.200 millones anuales, un punto del PIB, cuando la presión tributaria española es inferior en algo más de 3 puntos del PIB de la media europea—, sino que sobre todo las rebajas se concentran, de manera excesiva, en las personas con rentas más elevadas, como se puede comprobar en la última memoria tributaria, a la cual he hecho referencia anteriormente mediante algún dato. *(El señor vicepresidente, Rojo García, ocupa la Presidencia.)*

El cuarto elemento sobre el que ustedes elaboran el propio presupuesto es no abordar el fraude fiscal, y no lo hacen porque se aumentan los mínimos para su fiscalización. Ahora cada vez se aumentan más los márgenes para evitar que te fiscalicen y que, por tanto, no te persigan a la hora de contribuir. Se aumentan esos mínimos y vemos indicadores del Banco de España que señalan que cada vez hay más dinero negro, seguramente en manos de unos poquitos. Señor Montoro, en el periódico «El País» aparece claramente cómo el Banco de España plantea que hay una cantidad de millones de euros que están en manos de unos pocos, porque la inmensa mayoría de los ciudadanos de

este país tiene dificultades para llegar a final de mes, para poder pagar la hipoteca, para comprar las cosas más básicas, para afrontar el inicio del curso educativo; es decir, tiene dificultades. Por ello, me gustaría que usted, si lo tiene a bien, contestara si es cierta esta noticia; si es cierto o no que existen estos miles de millones, 56.000 millones de euros, no sabemos en manos de quiénes, aunque presumimos que será en manos de muy poquitos, cuando la inmensa mayoría de los ciudadanos, repito, está pasando dificultades. Eso sí, esos ciudadanos que tienen dificultades están controlados y supervisados a través de su nómina mensual y de su Impuesto sobre la Renta, frente a una inexistente política de control del fraude fiscal.

El quinto elemento son las previsiones del IPC sobre las que, cuando se elabora el presupuesto, señor ministro y señores del Gobierno, ustedes no terminan nunca de acertar. El último dato que se nos da del IPC establece claramente que hay que poner 1.120 millones de euros adicionales para la actualización de las pensiones. ¡Perfecto! Nosotros estamos de acuerdo, pero deberían ustedes tener en cuenta que si se hace eso —con lo que estamos de acuerdo— no debería subir tan sólo el 2 por ciento el salario mínimo interprofesional, porque si entendemos que los mayores y los pensionistas deben mantener el poder adquisitivo, entendemos igualmente que toda la masa de trabajadores productivos de este país deben mantener su poder adquisitivo, no tienen que tener pérdida en la capacidad de compra, y eso significa que el salario mínimo interprofesional no puede subir el 2 por ciento, sino que tiene que igualarse clarísimamente a los márgenes que se están planteando.

Por tanto, señor ministro, señores del Gobierno, señores del Partido Popular, partimos de unos criterios bastante duros a la hora de elaborar el propio presupuesto, y ese presupuesto, ¿tiene una finalidad adecuada? Nos encontramos con un presupuesto que no satisface a nadie: no le gusta a los sindicatos, no le gusta a las comunidades, no le gusta fundamentalmente a las entidades y a los agentes que trabajan en el ámbito social, y, por lo que hemos visto aquí, las formaciones políticas no están de acuerdo, y por eso han presentado innumerables vetos. Entonces, ¿a quién satisface el presupuesto que han elaborado ustedes, señores del Partido Popular? Eso sí, yo he recibido una cartita en la cual los empresarios me confirman que el presupuesto va en la línea acertada, que es la continuidad de la política del Partido Popular de los últimos ocho años, del señor Aznar, y que se sienten bastante contentos. Faltan algunas cosas. Les gustaría dar una vuelta de rosca. Eso sí, lo ponen más o menos con otro léxico en el escrito que me han enviado, pero parece que a ellos sí les gusta. Sin embargo, al resto no le gusta. Parecería lógico, señores del Gobierno, que tuvieran ustedes la intención, al menos, de dialogar con los sindicatos, de dialogar con la oposición para ver la posibilidad de acercamiento y de encuentro sobre algunas de las materias, etcétera. Le voy a plantear algunas de las cuestiones por las que a nosotros no nos gusta la propuesta del presupuesto que ustedes han traído.

Mientras que ustedes se suman al discurso del pleno empleo, cada vez es mayor la tasa de temporalidad, y cuando hay mayor tasa de temporalidad, hay problemas no

solamente sobre el consumo sino también sobre el desarrollo y la productividad futura. Se prometió rebajar la tasa del paro a la media comunitaria. Las previsiones para 2004 en los presupuestos se sitúan en el 11 por ciento, similar a las de 2002 y 2003 y superior a la de 2001, que estaba en el 10,5. Todo ello —tengo que decírselo— alejado de los registros comunitarios. Nos parece que el Gobierno sigue ignorando la prioridad del empleo de calidad y de la modernización del tejido productivo, pero no solamente lo sigue ignorando, sino que podemos comprobar claramente, porque en los últimos tiempos asistimos a cierta conflictividad en el Inem, que el Estado no aporta recursos de prestaciones contributivas asistenciales para políticas activas. En nuestro país, el de mayor tasa de paro en el ámbito de la Unión Europea, las políticas activas de empleo son insuficientes, representan el 0,7 por ciento del PIB frente al 0,9 que dedica el promedio de la Unión Europea. Además, el desequilibrio respecto de las subvenciones de los empresarios que proviene de los salarios de los trabajadores es palmario: el 39 por ciento de las políticas activas frente al 15 por ciento de la Unión Europea.

Y hay un interrogante, señor ministro. ¿Dónde está en estos presupuestos, señor ministro, la financiación de la ley del empleo recientemente aprobada? De igual modo ocurre con la formación profesional, las escuelas taller, las casas de oficio y los talleres de empleo en los presupuestos para este año próximo de 2004.

Por lo tanto, en política social no nos podemos creer lo que ustedes plantean. No contribuyen, no caminan. Pero, además, como le he dicho anteriormente, deberían al menos evitar en estos presupuestos que no haya ninguna pensión en nuestro país por debajo del salario mínimo interprofesional, y las hay. Eso sí, ustedes hacen un buen trabajo de campaña informativa vendiendo lo de las escaleras mecánicas que suben y bajan, pero la verdad es que una viuda o un viudo, un abuelo, a final de mes, tiene dificultades para pagar el arrendamiento de su vivienda, afrontar las poquitas compras que puede hacer y, por lo tanto, vivir lo mejor posible. Eso sí, los inundan ustedes con ese famoso anuncio de las escaleras mecánicas que más parece que fomenten a cierta empresa que se dedica a esa cuestión de las escaleras mecánicas y los ascensores que a explicar detalladamente la política económica de su Gobierno y no solamente de aplicarla. Ustedes, en vez de dedicar una parte fundamental de esto al «agit-prop» —y le explico lo que esto significa en el argot de la izquierda: agitación y propaganda— deberían dedicarla a corregir las pensiones que estén en el salario mínimo interprofesional, no solamente en materia social sino también en algunos apartados más.

En Educación, lo presupuestado para el Ministerio de Educación ni siquiera llega para poner en marcha la LOCE, la Ley de Ordenación de la Calidad. Pero no sólo eso, sino que derechos constitucionales importantes en este país no se pueden cumplir, como son los derechos constitucionales a la educación de los niños y niñas de cero a tres años. Ya sabemos que la educación es materia transferida a las comunidades autónomas, pero lo que estamos planteando es que un Gobierno que se crea verdadera-

mente el derecho a la educación no debe impedirla y debe generar políticas y financiación suficiente para que no suceda que para ningún niño ni ninguna niña de cero a tres años no sea un derecho la educación. Pero igualmente para abordar el fracaso escolar, para fomentar la educación de adultos, que deja muy dudoso el objetivo del derecho a la educación que recoge la Constitución para educación de adultos. ¿Por qué? Porque no hay programas, no hay financiación y no hay presupuestos destinados a las transferencias a las comunidades autónomas para todo lo relativo al desarrollo de la educación pública.

He hablado del fracaso escolar, de la educación de cero a tres años, de la educación de adultos y apenas hay presupuesto para la educación compensatoria de desigualdades; eso sí, los datos que nos indican algunos ministerios es que cada vez va a haber más personas que tienen que estar incorporadas a estos programas y, sin embargo, hay menos recursos económicos, menos para formación del profesorado y, en consecuencia, cada vez menos de todo.

Y no solamente ocurre en educación, sino también en sanidad, donde clarísimamente el aumento nominal del 5,9 por ciento es insuficiente para poner en marcha la ley de coordinación y de ordenación del sistema sanitario, o para colaborar con las diferentes comunidades autónomas a la hora, fundamentalmente, de corregir esos desequilibrios. Sería bueno, señor Montoro, que le preguntara usted a la ex—presidenta del Senado, actualmente senadora y presidenta de la Comunidad de Madrid, si está satisfecha con cómo se hizo la transferencia sanitaria en dicha comunidad y cómo tenemos que suplantar esos desequilibrios y esos ahorros que ustedes generaron como Gobierno de la nación.

En consecuencia, creemos que se debería haber puesto más dinero también en esos apartados.

La vivienda pública es otro de los elementos más ignorados. Ya no le queda al señor Álvarez-Cascos ninguna posibilidad de retocar su página web del Ministerio de Fomento porque no le cuadra, no es posible. Es una de las asignaturas abandonadas y olvidadas. Cada vez hay menos dinero para fomentar la vivienda protegida y una cultura tendente al alquiler. Eso sí, parece que cada vez va cundiendo más ese planteamiento que su Partido empieza a hacer en algunas comunidades, como Madrid, de eliminar la vivienda protegida. A lo mejor por ahí va el planteamiento que ustedes hacen en torno a esta cuestión. En definitiva, estamos ante la disminución de presupuestos importantes en materia, fundamentalmente, de políticas sociales.

En infraestructuras ustedes no van más allá del esfuerzo en torno al Plan Hidrológico Nacional, a las autovías de alta capacidad y los trenes de alta velocidad como grandes proyectos de desarrollo, pero en ningún momento a llevar a cabo políticas de desarrollo sostenible, fundamentalmente dirigidas a la inmensa mayoría, en detrimento, en nuestra opinión, de energías renovables o de la prevención de desastres ecológicos como el que hace un momento se ha mencionado del «Prestige» y que posteriormente recalcaré.

Por lo tanto, estamos clarísimamente ante una política antisocial que manifiesta su Gobierno en estos presupues-

tos; eso sí, se plantean ustedes algunos mecanismos. Ya le he hablado en alguno de los objetivos que tenían ustedes para aumentar los ingresos y le podría indicar uno nuevo, como es la prioridad en la construcción y la especulación urbanística que empieza a destilar su Gobierno. Ustedes han convertido el Estado en una gran inmobiliaria, con un plan de desinversión patrimonial en todos y cada uno de los organismos de la Administración Central para poner en circulación 40.000 inmuebles inventariados que van a ser objeto de especulación. Parece ser que ustedes también van a entrar en ese mercado, que van a empezar a recalentar, van a poner precio y, por lo tanto, referencia de valor de mercado de suelo como si ustedes fueran una inmobiliaria más al uso.

Por contra, nos encontramos unos presupuestos con un gasto militar desorbitado que supone aproximadamente el 8 por ciento del presupuesto. Todo ello entendemos que debe ser por su obediencia debida, por su disciplina —nunca mejor dicho, y en eso sí que son ustedes unos chicos bastante colaboradores, y más vale que lo fueran con todos los sentimientos y los intereses de su país— y colaboración con el señor Bush y con la estrategia militar norteamericana, con esa estrategia en la que ustedes se han metido que exige comprar más armamento, más helicópteros, más fragatas y, en definitiva, destinar más dinero.

Podían ustedes destinar algo de dinero, por cierto, para investigar y esclarecer la muerte de nuestros amigos militares españoles del Yakovlev, o para modernizar internamente y mejorar todo el personal destinado a las Fuerzas Armadas. Pero no, ustedes están más preocupados por comprar más armas, más aviones, más helicópteros, etcétera. Y no solamente eso, sino que camuflan partidas que deberían estar estipuladas y definidas, como corresponde en un presupuesto por programas, en el Ministerio de Defensa. Asimismo, aumentan ustedes claramente una parte destinada a la investigación, desarrollo e innovación y la ponen ahí, cuando está claramente destinada a investigación y desarrollo militar y todo lo relacionado con ello.

Señor ministro, señores del Grupo Popular, estos presupuestos son antagónicos a los que nosotros defenderíamos. Y por si en su próxima intervención usted hiciera alusión a esto último, ya le digo que no tiene usted más que esperar unos días, tras la votación de mañana en el parlamento catalán, para comprobar cómo se pueden aplicar claramente recetas de izquierda para gobernar en este país. Antes ya se ha hecho alusión a ello, y estoy seguro de que eso será objeto de cuestionamiento.

Estos presupuestos tienen un tinte militarista, al existir una mayor dotación para Defensa. Y podrían haber hecho el mismo esfuerzo ante el problema creado por el «Prestige», pero ni siquiera han adoptado medidas a ese respecto, engañando —permítame utilizar la palabra— a las comunidades autónomas —es el caso de Galicia y de algunas más—, porque ustedes legislan aquí, pero al final cargan los costes a esas comunidades, y elaborando planes —también es el caso de Galicia— que asimismo cargan a las comunidades. Pero, eso sí, señor ministro, usted cierra los presupuestos con superávit, contento; y que los demás ten-

gan problemas y difieran a todos y cada uno de sus administrados los costes posteriores.

Así pues, señor ministro, insisto en que estos presupuestos son rechazables para Izquierda Unida. Nosotros los plantearíamos desde otros principios, con otros criterios y, por tanto, con otras prioridades.

Pero, además, ustedes utilizan el proyecto de ley de medidas fiscales, administrativas y del orden social de cajón de sastre, debiendo estar todos pendientes hasta el último minuto de las enmiendas que introducen de rondón.

Ahora bien, señor ministro, señores del Grupo Popular, creo que en estos momentos deberían ustedes reflexionar, porque no es normal el nivel de desprestigio, de tensión y de descrédito que está teniendo el Senado. Ha pasado de ser una Cámara a la que apenas se daba valor y que casi no se conocía a estar saliendo a colación constantemente en los medios de comunicación y siendo objeto de dimes y dires por todos sus planteamientos. Porque, señorías, el Gobierno y el Partido Popular autoenmiendan sus proyectos de ley siempre por la vía del Senado; por ejemplo, aprovechan una ley sectorial para modificar el Código Penal —la última ocurrencia mediática del Partido Popular la traen a esta Cámara—, por si alguien pretende hacer un referéndum, una consulta popular, profundizar en la democracia. Lo han hecho a pesar de todos los informes que lo desaconsejan. Y ahora, en un proyecto de ley que debería ser un instrumento para la mejor gestión de los presupuestos, pretenden ustedes quitar el carné de conducir a los españoles. Pero, ¿con qué garantías lo van a hacer? Quizá no se lo deba preguntar a usted, sino al ministro del Interior. ¿Cuáles serán los elementos objetivos que lleven a esa retirada del carné? ¿Cuál será el mecanismo? Parece ser que se han equivocado, y que van a corregir esa medida. Y así, mañana o pasado mañana nos encontraremos corrigiendo esta y otras cuestiones.

En definitiva, ustedes aprovechan el proyecto de ley de medidas fiscales —una ley, repito, que debería servir para la mejor gestión de los presupuestos— para incluir todo aquello que al final de año los ministros no han podido hacer o no habían recordado. Al igual que todos los ministros aprovechan el último trimestre del año para gastar las partidas presupuestarias que no habían utilizado, y tienen una actitud frenética —¿verdad, señor ministro?— por gastar rápidamente, en este caso ocurre algo parecido: a todo el mundo se le han ocurrido cosas, y lo mismo modifican una materia objeto de ley orgánica, que nos quieren quitar el carné de conducir.

Está claro que estamos ante una ley parche, de «amañamiento» anual de todo aquello que propone cada uno de los ministros. Eso sí, se hace a pesar de la falta de apoyo, el desánimo y la falta de consenso no sólo del resto de las formaciones políticas, sino también de los organismos que en estos momentos deberían dictaminar sobre este extremo. Da igual que sean los servicios jurídicos de esta Cámara, da igual que sea el Consejo de Estado, da igual que sea el Consejo Económico y Social; todos y cada uno de estos organismos, al igual que muchos otros, desaconsejan una y otra vez cada año que se utilice esta ley para introducir de rondón todos los asuntos planteados o que el Go-

bierno había olvidado, sobre todo porque a lo que conduce es a un desánimo y a confundir a la gente. Pero, eso sí, nos hurtan la participación, nos hurtan la posibilidad de que estas cuestiones se discutan en materia sectorial y que todas las formaciones políticas podamos efectuar un debate sobre algo tan importante como modificar derechos que afectan a los derechos de las personas, y por ello hay tipología de ley. Con esta ley tipo, con esta ley cajón de sastre que permite incluir todo, ustedes cumplen un objetivo, pero desde la oposición tendremos que replantearnos qué es lo que nos queda por hacer.

Nada más, señor ministro, señores del Grupo Parlamentario Popular, confío en que éste sea su último presupuesto. Me despido esperando que el próximo año no estén ustedes para presentarlo, y como diría aquel de la izquierda, «bye, bye», a ver si pasan ustedes dentro de poco a la oposición. (*Rumores en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.*)

El señor VICEPRESIDENTE (Rojo García): Gracias, senador Cuenca.

Turno en contra. Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador Fernández.

El señor FERNÁNDEZ CUCURULL: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, intervengo en nombre del Grupo Parlamentario Popular para tratar de argumentar en este turno en contra las razones por las que vamos a rechazar las distintas propuestas de veto presentadas a los Presupuestos Generales de 2004 y a la ley de medidas que lo acompañan, así como para defender el proyecto aprobado por el Gobierno con las aportaciones que, tanto en el Congreso de los Diputados como en este trámite parlamentario del Senado, se han incorporado al mismo.

Para comenzar, he de decir que los Presupuestos Generales del Estado para 2004 representan una continuidad en las políticas desarrolladas por el Partido Popular desde su acceso al Gobierno en 1996, y que tan importantes éxitos en materia de creación de empleo y convergencia económica con el resto de los países de la Unión Europea han reportado a España. En este último caso, nos hemos acercado más de 6 puntos porcentuales a la renta per cápita comunitaria, pasando de un 78,2 a un 85 por ciento a finales del presente año.

El proceso de consolidación presupuestaria, iniciado hace ahora ocho años, está en el origen de la desaparición del déficit público, que se situaba en torno al 7 por ciento en 1995, así como en la reducción de la deuda pública, que ha pasado de suponer un 68 por ciento del producto interior bruto en 1995 a un 53 por ciento en la actualidad, es decir, 15 puntos porcentuales menos en términos de producto interior bruto.

Aunque se haya puesto reiteradamente de manifiesto, parece necesario destacar una vez más, a la vista de los argumentos escuchados en el día de hoy por los grupos parlamentarios que han presentado el veto, que la eliminación del déficit y la reducción de la deuda pública no constituyen un objetivo por sí mismo, sino que son instrumentos

que se sitúan en la base del modelo económico de los últimos años. (*El señor vicepresidente, Caneda Morales, ocupa la Presidencia.*) Y esto es así porque la eliminación del déficit y la reducción de la deuda han permitido destinar recursos que antes se aplicaban a atender las cargas financieras derivadas del endeudamiento a cuestiones indudablemente más prioritarias, como las inversiones en infraestructuras o el aumento de los gastos sociales; al mismo tiempo, han influido positivamente en la reducción de los tipos de interés.

Simultáneamente, las políticas económicas que los presupuestos del año 2004, al igual que los de años anteriores, traducen en cifras, han incidido en otro aspecto que consideramos fundamental: las rebajas de los impuestos destinadas principalmente a las familias y a las pequeñas empresas, y que han tenido un impacto directo sobre el ahorro y la inversión. Pero, además, esas rebajas fiscales han demostrado en la práctica lo que el Partido Popular sostuvo durante mucho tiempo, con la incredulidad de los grupos que ahora proponen el veto: la posibilidad de incrementar los ingresos fiscales a partir de reducciones de las cargas impositivas, familiares y de las pyme o, dicho de otra manera, pagando menos impuestos individualmente acabamos pagando más entre todos, porque como consecuencia de la traducción en inversión y empleo de las rentas generadas del ahorro fiscal somos más los que pagamos aunque paguemos menos cada uno, concretamente un 25 por ciento menos de media comparado con 1998 y un 78 por ciento en el caso de las rentas inferiores a 12.000 euros al año. Todo ello, y a pesar de lo que se ha oído, sin que se haya producido una relajación en la actividad de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en el control de la lucha contra el fraude. Baste citar como datos relevantes que la recaudación líquida de los impuestos gestionados por la Agencia en el período 1995-2002 se ha incrementado en un 80 por ciento, mientras que el producto interior bruto lo ha hecho en un 69,6 por ciento; que los resultados de la lucha contra el fraude en dicho período se han incrementado en un 86,62 por ciento, y que el número de denuncias de delitos contra la Hacienda Pública puestos en conocimiento de las autoridades judiciales ha pasado de 203 en 1995 a 553 en 2003, es decir, ha habido un aumento del 272 por ciento.

Según he puesto de manifiesto, como criterio orientador básico de la política económica reflejada en los presupuestos, se ha tenido como objetivo prioritario la creación de empleo bajo la idea de que ésta es la mejor política social que existe. De esta manera, y como ha señalado el señor ministro de Hacienda en su intervención, hemos pasado de 12,5 millones de cotizantes a la Seguridad Social en 1995, a más de 16,8 millones de cotizantes en 2003, un incremento de más de 4,3 millones de cotizantes, habiendo reducido la tasa de desempleo medida en términos de la Encuesta de Población Activa de un 22 a un 11 por ciento, es decir, a la mitad.

Esto a su vez ha permitido pasar de una situación de Seguridad Social en quiebra, que no estaba en condiciones de asegurar el futuro de los españoles una vez finalizada su vida laboral, a una Seguridad Social en superávit, que

viene destinando año a año importantes recursos a la creación de un Fondo de Reserva que supone la mayor garantía de futuro para el conjunto de los españoles. Los Presupuestos Generales del Estado para 2004 permitirán aumentar dicho fondo en 3.000 millones de euros, con lo que la suma total acumulada a final de 2004 superará los 15.000 millones de euros.

Por otra parte, el Gobierno emprendió una política de liberalizaciones que ha conducido a que nuestra economía sea actualmente una de las más abiertas del mundo. Una de las consecuencias más inmediatas de ese proceso es el abaratamiento de los precios de la energía eléctrica y de las telecomunicaciones que los consumidores han podido disfrutar en los últimos años. Pero además hay que tener en cuenta que el proceso de transferencias de soberanía monetaria, implícito con nuestra incorporación a la Unión Aduanera, implica que la pérdida del principal instrumento de política monetaria, los tipos de interés, debe ser compensado mediante dicha política de liberalización, y simultáneamente con las ya citadas de consolidación presupuestaria.

Hay otra característica esencial de las propuestas que presenta el Gobierno y apoya mi grupo parlamentario que no me gustaría dejar de recordar y que entra en contradicción directa con las afirmaciones que se contienen en las distintas propuestas de veto. Los presupuestos son fiables y creíbles, y esto es así porque el Partido Popular ha conseguido en el transcurso de estos años, mediante su adecuada ejecución, convencer al conjunto de la sociedad española de que lo que figura en los presupuestos no lo es a título indicativo, sino que al final de cada ejercicio lo ejecutado coincide con lo programado. Por ejemplo, a 31 de octubre de 2003 —último dato disponible— el grado de ejecución del presupuesto en términos de obligaciones reconocidas sobre crédito total por programas se situaba en casi el 82 por ciento, lo que quiere decir que permitirá situarla en el cien por cien a finales del ejercicio. Y esta fiabilidad comienza por las previsiones macroeconómicas. El crecimiento del 3 por ciento del PIB en términos reales es una cifra avalada por los principales organismos internacionales y por el propio Banco de España. Al mismo tiempo, los datos de inflación del presente ejercicio 2003 reflejan una clara tendencia descendente en relación con las cifras del año anterior y apuntan a un acercamiento progresivo hacia el objetivo del 2 por ciento fijado por el Banco Central Europeo.

Todas estas características que acabo de señalar definen de manera global no sólo el presupuesto de 2004, sino el de los ejercicios anteriores, puesto que como señalé al comienzo de mi intervención suponen una continuidad en una orientación que consideramos beneficiosa para el conjunto de los ciudadanos españoles, lo que se traduce en un presupuesto que atiende las prioridades básicas que, a nuestro juicio, deben orientar la política del Gobierno en el próximo ejercicio: en primer lugar, y como ya se ha indicado, el empleo.

De manera acorde con el objetivo de conseguir el pleno empleo al final de la presente década, se estima una creación de 300.000 nuevos empleos, pero al mismo tiempo

también se tienen otras prioridades mediante el incremento de los recursos destinados a la Justicia, el 7,5 por ciento; a la seguridad ciudadana, el 6 por ciento; a las infraestructuras, el 6,4 por ciento; a la investigación, desarrollo e innovación, un 7,3 por ciento; todo ello sin olvidar los gastos sociales que se incrementan en un 6,8 por ciento y suponen más del 50 por ciento del gasto total, manteniendo, además, el poder adquisitivo de todos los pensionistas e incrementando por encima de la media las pensiones mínimas y las de viudedad.

No me gustaría, a efectos de que no se pueda hablar de autocomplacencia o de triunfalismo, dejar de hacer mención expresa a que ni el Gobierno ni el Partido Popular consideran que con estos presupuestos y con la ley de medidas que los acompaña se vayan a solucionar como por ensalmo los problemas que de manera genérica afectan a nuestros conciudadanos, pero dicho esto, también opinamos que en los últimos años, con errores y con aciertos, hemos avanzado en la dirección correcta y que gracias a la política económica puesta en marcha por los gobiernos del Partido Popular, la sociedad española se ha transformado para mejor. Ciertamente es que como consecuencia de esa transformación se han generado nuevos problemas que habremos de afrontar desde estos presupuestos que ahora, con humildad, pero con convencimiento, tratamos de defender.

Los presupuestos elaborados por el Partido Popular son ciertos, estables, modernos y aumentan la igualdad de oportunidades. No son una suma de necesidades, sino que atienden prioridades y, además, los efectos de dichos presupuestos pueden identificarse claramente.

España es un país que crece económicamente. Lo ha hecho de forma ininterrumpida durante ocho años consecutivos, con independencia, y me atrevería a decir que, a pesar de, la coyuntura internacional, y ese crecimiento se ha traducido en su mayor parte en empleo, nuestra primera prioridad, como ya he reiterado. Además, ese empleo crece, en contra de lo que hoy hemos oído aquí, reduciendo la temporalidad, puesto que la mayor parte del empleo creado desde 1996 es estable. Eso no es mérito del Gobierno, sino de la propia sociedad española a la que el Gobierno ha contribuido a devolver la confianza mediante medidas como la reducción de impuestos. Aun así, y a pesar de los notables avances, tenemos importantes desafíos, especialmente en el trabajo de las mujeres, de los jóvenes y de los parados de larga duración.

Entre todos hemos contribuido a despertar una sociedad dinámica, a lo que el Gobierno contribuye mediante la puesta en práctica de medidas tendentes a favorecer la igualdad de oportunidades como, por ejemplo, las ayudas a las madres trabajadoras. En cualquier caso, hay una idea que, afortunadamente, tiende a estar cada día más presente en nuestros ciudadanos, la de que el déficit público supone más impuestos y tipos de interés más elevados.

En relación con otra cuestión más directamente relacionada con la denominada ley de acompañamiento, los distintos vetos presentados coinciden en sus consideraciones al señalar que, en su opinión, la ley excede de su finalidad de complementar a los presupuestos.

Es ésta una discusión que comienza a ser vieja y que, desde luego, no se inició con el Gobierno del Partido Popular. En cualquier caso, es evidente que pensamos que, por un lado, no hay ninguna limitación formal que haya sido vulnerada en la tramitación de la ley ni que se derive de su contenido y, por otra, que dicho contenido viene a reforzar las orientaciones marcadas en la ley de presupuestos, conteniendo un conjunto de medidas coherentes cuyo aplazamiento terminaría perjudicando a los ciudadanos a los cuales están destinadas.

También, antes de acabar, hay otra cuestión sobre la que me gustaría incidir especialmente, y es el reflejo en los presupuestos de 2004 de la descentralización política. El gasto de las administraciones territoriales, comunidades y ciudades autónomas, diputaciones, cabildos, consejos y ayuntamientos, es hoy el 47 por ciento del total, frente al 9 por ciento en 1978 o el 32 por ciento en 1995.

En estos últimos años se ha puesto en marcha por consenso un nuevo modelo de financiación de las comunidades y ciudades autónomas, un nuevo modelo de financiación de las corporaciones locales, la renovación del concierto vasco, la renovación del convenio navarro y múltiples trasposos de competencia, entre ellas, las más importantes de sanidad y educación.

Por tanto, frente a quienes hablan de regresión autonómica hay que decir que, a la vista de las cifras que acabo de señalar, que muestran un avance de 15 puntos porcentuales en estos ocho años, es decir, casi dos puntos por año en la asunción de gastos por parte de las administraciones territoriales, la mencionada regresión sólo existe en la mente de los que la proclaman.

En relación con el asunto del «Prestige» me gustaría decir algo brevemente. Desde luego, a estas alturas seguir diciendo que en el tema de la catástrofe del «Prestige» no se ha hecho nada, sinceramente es empeñarse en negar la evidencia.

Por acabar por el final. Como todos saben, el Consejo de Ministros aprobó el pasado viernes una solución técnica viable para extraer las 13.000 toneladas que todavía quedan en el pecio, operación que se llevará a cabo entre los meses de mayo y septiembre del próximo año 2004, por un coste total de 66 millones de euros. Es, desde luego, un hecho sin precedentes. Casi me atrevería a hablar de una hazaña tecnológica porque el único referente más inmediato que hay, que es el hundimiento de un petrolero en Japón en 1997 de 50.000 toneladas, nos dice que ese petrolero sigue hundido sin que se haya adoptado ninguna solución al respecto.

Por otra parte, el Gobierno ha impulsado un cambio en las normas reguladoras de la seguridad marítima, las mismas que han hecho que, por ejemplo, un petrolero de similares características a las del «Prestige» no haya podido acercarse a menos de 250 millas de la costa gallega.

En cuanto a limpieza y regeneración medioambiental, de las 700 playas afectadas por la catástrofe, en este momento queda rastro de la misma en diez. Al mismo tiempo, se han acometido proyectos de investigación para tener la certeza de los efectos que haya podido causar y poder actuar sobre los ecosistemas afectados.

Además, se pretende que los costes, que a día de hoy ascienden a 800 millones de euros, puedan, desde un punto de vista jurídico, ser imputados a los causantes. Para ello, el Gobierno ha iniciado las correspondientes actuaciones judiciales y administrativas.

En cuanto a indemnizaciones a los afectados, ya se han destinado 130 millones de euros, con lo cual entendemos que se han amortiguado los efectos sociales y económicos sobre los sectores afectados.

En relación con el Plan Galicia, he de volver a repetir las cifras, que son elocuentes por sí mismas. Hay una inversión de 12.500 millones de euros, de los cuales 5.000 millones de euros corresponden a proyectos nuevos, y en el presupuesto para 2004 se prevén 1.045 millones de euros, un 37 por ciento más que en el presupuesto de 2003; de los mismos, 280 millones de euros irán destinados a líneas de alta velocidad y 174 a carreteras, siendo el incremento en nuevas infraestructuras de un 130 por ciento; asimismo, se destinan más de 113 millones de euros a puentes, lo que supone un incremento del 36,9 por ciento, y más de 20 millones de euros a aeropuertos. En materia de medio ambiente la inversión será de 92 millones de euros, con un incremento del 50 por ciento sobre el año anterior, a lo que hay que añadir los proyectos científicos y tecnológicos a los que antes he hecho mención. Todo ello son realidades tangibles y constatables.

También me gustaría decir a los que reprochan la falta de estas partidas en los presupuestos, que se olvidan de que en el modelo presupuestario que se corresponde con los presupuestos que tramitamos hay importantes inversiones que se canalizan a través de entes gestores y, por tanto, figuran en el Capítulo VIII y no en el VI ó VII. En cualquier caso, éste es un debate artificial, porque lo importante es la construcción de las infraestructuras, y eso lo están viendo los ciudadanos de Galicia con sus propios ojos. En este caso, la postura contra el Gobierno se basa más en la descalificación y en la demagogia, porque el Gobierno está batiendo récords a la hora de paliar los daños de la catástrofe.

Por último, volviendo al comienzo de mi intervención, tengo que decir que la clave de los presupuestos está en continuar asegurando la mejor política social que existe: la creación de empleo, y la mejor justicia social: la que procede de la igualdad de oportunidades. Al mismo tiempo, seguirá aumentando nuestra convergencia con nuestros socios europeos mediante la progresiva reducción de nuestros déficit en materia de formación profesional, infraestructuras e investigación y desarrollo de nuevas tecnologías.

El Partido Popular ha recuperado el respeto por el presupuesto y ha reinstaurado su valor de contrato con la sociedad, de plasmación de los compromisos políticos asumidos y de prometer sólo lo que se puede cumplir, y los ha transformado en un instrumento de generación de credibilidad y confianza. Son ya cuatro años consecutivos sin déficit y ocho de reducción del endeudamiento, que es, precisamente, el que hace que las prioridades no coincidan con lo que importa a los ciudadanos. Han sido años de esfuerzo, de control del gasto, de reformas estructurales y de

transferencias a las autonomías, como antes he comentado. Ocho años de crecimiento por encima de la media europea, más de cuatro millones de nuevos empleos, casi 17 millones de afiliados a la Seguridad Social. En definitiva, tenemos la casa en orden para aprovechar la recuperación de la economía internacional.

Finalizo ya, señor presidente. Consideramos que los Presupuestos Generales del Estado de 2004 y las medidas que los acompañan responden a las necesidades básicas que demanda la sociedad española. Rechazamos tajantemente las afirmaciones de trampa, falsedad u ocultación que se recogen en los vetos, y volvemos a reiterar que son unos presupuestos que seguirán generando la confianza que las familias y empresas españolas han experimentado en los últimos años. Es esa confianza la que ha hecho que la sociedad española sea consciente de sus propias capacidades, adormecidas durante años, y la está impulsando a seguir trabajando en la consecución de una España más próspera y, al mismo tiempo, más solidaria.

Nada más y muchas gracias. *(Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)*

El señor VICEPRESIDENTE (Caneda Morales): Muchas gracias, senador Fernández Cucurull.

¿Desea intervenir el señor ministro? *(Asentimiento.)*

Tiene la palabra el señor ministro de Hacienda.

El señor MINISTRO DE HACIENDA (Montoro Romero): Muchas gracias, señor presidente.

En primer lugar, quiero agradecer la intervención del senador Fernández, portavoz del Grupo Parlamentario Popular. Ha sido el suyo un discurso sólido, un discurso coherente, de plasmación de lo que es el programa del Partido Popular en la acción del Gobierno. En definitiva, ése es el sentido del grupo parlamentario que apoya al Gobierno, ver con satisfacción que los planteamientos que ofrece la sociedad se plasman, efectivamente, no sólo en un proyecto de presupuestos, sino en toda la acción de Gobierno a la hora de acometer la tarea que le encomendó la mayoría de la sociedad, que votó para que se constituyera un Gobierno del Partido Popular, en concreto en marzo del año 2000.

He traído esta mañana a la Cámara un proyecto de presupuestos que está articulado como un instrumento de la acción de Gobierno para crear empleo y para converger con la Unión Europea. Ése es el sentido de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2004, ése es el sentido de unos presupuestos que completan dos legislaturas, las del presidente José María Aznar, y son los presupuestos que abren una nueva categoría política para nuestro país, esperanzado a la hora de conseguir la sociedad de pleno empleo, a la hora de avanzar definitivamente hacia la igualdad de nuestra renta con la que tienen los países más avanzados de la Unión Europea. Empleo y convergencia real, señoría, son los dos grandes vectores de los presupuestos del año 2004, los dos grandes ejes sobre los que se ha articulado la política y la política económica del Partido Popular, del partido en el Gobierno en los últimos ocho años.

Empleo. Muy poco he oído hablar de quienes han defendido el veto a los presupuestos para el año 2004, en términos de empleo. Señorías, yo pregunto a los portavoces de los grupos que se oponen a los presupuestos, ¿es verdad o no que en España hay 4.300.000 personas trabajando que no lo estaban en el año 1995? ¿Es cierto o no es cierto, señorías? Hay 4.300.000 personas, de las que 3.400.000 han accedido al mercado de trabajo con contrato indefinido, señorías. El 80 por ciento del nuevo empleo lo ha sido con contrato indefinido. ¿Es verdad o no es verdad, señorías? Ésas son realidades constatables, realidades mensurables, señorías. Es más, podemos decir con toda tranquilidad y con toda severidad ante la Cámara que nunca antes en España habían trabajado semejante número de personas, nunca había alcanzado nuestra población ocupada semejante volumen de personas. Eso significa que hay en España 2.200.000 mujeres que no trabajaban en el año 1995 y que lo están haciendo en el año 2003. En 1995 había 2.200.000 mujeres que no tenían trabajo, que no tenían ocupación, y eso significa que de cada tres mujeres que están trabajando en el año 2003, una lo está desde que gobierna el Partido Popular en España, señorías. Ésas son realidades: 4.300.000 ocupados más, 2.200.000 mujeres trabajando, que no lo estaban en el año 1995, y nunca antes lo estuvieron en nuestro país, y 1.000.000 de jóvenes que han encontrado empleo desde el año 1995. Ésa es la realidad, eso es para lo que sirven los presupuestos del Estado, para lo que sirve la política económica que ha aplicado el Gobierno del Partido Popular de manera rigurosa, coherente y sistemática en nuestro país. Ésos son los resultados, señorías; lo que sus señorías han defendido aquí esta mañana son palabras. Estamos en la parte de la política donde medimos las circunstancias de la política, aquí medimos las circunstancias de los hechos, señorías, y no he escuchado esta mañana a los defensores de los vetos hablar de empleo, de empleo de la mujer, de empleo de los jóvenes, de empleo en las diferentes comunidades autónomas que están desarrollándose en nuestro país. ¿Cuánto ha crecido la ocupación en el último año en Galicia, señor Quintana, cuánto ha crecido? (*El señor presidente ocupa la Presidencia.*) ¿Ha crecido o ha caído la ocupación? ¿Ha crecido o ha bajado la afiliación a la Seguridad Social a partir del desastre del «Prestige», senador Quintana? ¿Ha crecido más o menos que en España? ¿Ha habido un incremento de afiliación a la Seguridad Social? ¿Sí o no? Señoría, sí lo ha habido; igual que en el resto de España.

Ustedes niegan la evidencia, señorías, y eso no es hacer política, eso es hacer demagogia; demagogia de la más inútil y de la más barata que se pueda hacer. (*El señor Lavilla Martínez pronuncia palabras que no se perciben.—Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.*) Suban a la tribuna para hablar de empleo, para hablar de la convergencia de la renta de los españoles con los países desarrollados de la Unión Europea porque, ¿es verdad o no que ha aumentado la renta per cápita de España siete puntos desde que gobierna el Partido Popular? (*El señor Bru Parra: ¡Faltaría más!*)

El señor PRESIDENTE: ¡Silencio, señorías!

El señor MINISTRO DE HACIENDA (Montoro Romero): Durante los trece años de Gobierno socialista no avanzamos nada, señoría. ¡No avanzamos nada! (*Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.*) La diferencia es que hoy, en el año 2003, estamos superando el 85 por ciento de la renta media de la Unión Europea, y en el año 1995 estábamos en el 78 por ciento, ¡esa es la diferencia! (*La señora Martínez García: ¡Demagogo!*) Eso es hacer políticas para crecer, crear empleo y converger, y otra cosa son políticas demagógicas; las políticas que sus señorías llaman de la izquierda, de los gastones de la izquierda, confundiendo los gastones con el despilfarro de los recursos públicos de los ciudadanos. (*Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.—La señora Martínez García: ¡Eso sí que es demagogia!*)

El señor PRESIDENTE: ¡Silencio, señorías!

El señor MINISTRO DE HACIENDA (Montoro Romero): Los presupuestos del año próximo traen un crecimiento económico para España del 3 por ciento y, además, 300.000 empleos más, que es una cifra superior a la ya importante creación de empleo del año 2003, de alrededor de 290.000 empleos nuevos.

Señorías, ese es el continuismo en las políticas del Gobierno y por eso los presupuestos son continuistas, porque traen mayor crecimiento económico y más empleo para los ciudadanos. Además, lo hacen desde el equilibrio presupuestario, con presupuestos saneados; lo hacen con menores impuestos para todos y sobre todo para aquellos que tienen las rentas más bajas —eso es lo que hacen los nuevos presupuestos—; lo hacen con un incremento de la inversión del orden del 10,5 por ciento, para el año próximo; lo hacen con mayor protección social, con un incremento del gasto social del 7 por ciento, frente a una economía que, en términos nominales, crecerá alrededor del 6,5 por ciento; lo hacen con una mejora de servicios públicos, de seguridad ciudadana, mejora de la Justicia y mejora, en definitiva, de los servicios esenciales de defensa del Estado. Ésos son los presupuestos, señorías, y ese es el continuismo de los presupuestos.

Son los presupuestos que sabemos hacer: equilibrados, con menores impuestos, con mayor inversión, con mejora de la protección social y con la garantía de los servicios públicos de los ciudadanos. Esos son los presupuestos que traemos a las Cámaras, una vez más, en el octavo ejercicio de nuestra responsabilidad de Gobierno.

Ante este hecho, ¿qué nos encontramos?, ¿dónde se centran las críticas? Las críticas no se basan en el reconocimiento de la realidad; las críticas se basan en el catastrofismo. Los discursos económicos que he escuchado esta mañana son catastrofistas porque no quieren reconocer la realidad que está viviendo y protagonizando la sociedad española, aceptando los desafíos del mañana con los que, efectivamente, podemos y debemos estar de acuerdo: hay que fortalecer nuestro crecimiento económico desde la productividad, desde la competitividad y desde la innovación tecnológica para impulsar el empleo y, cada vez más, el empleo de calidad. Sin embargo, una cosa es reconocer

los desafíos y otra cosa es negar la evidencia, negar la realidad más concreta y más directa. Eso se puede hacer de una manera legítima si se tienen argumentos, si se tienen planteamientos sólidos, lo que no se puede hacer es desde las palabras vacías y desde las frases sin contenido, como muchas de las que he tenido oportunidad de escuchar a lo largo del día de hoy, durante la defensa de los vetos.

Señorías, la crítica que se hace a los presupuestos no sale del tópico. Primer tópico: el empleo es temporal. Frente a ello tengo que hacer la siguiente afirmación: entre 1989 y 1995 se firmaron en España 1,9 millones de contratos indefinidos; desde 1996 se han firmado 7 millones de contratos indefinidos, señorías. Ésa es la diferencia en el mismo período, en ocho años, agrupando una fase de recuperación económica, de crecimiento económico y de creación de empleo fuerte, como la que se produce en España a finales de los años ochenta y en la actualidad. Eso hace que en el año 2003 haya en España 13 millones 730.000 contratos indefinidos, y en el año 1995 había 9 millones 340.000. ¿Ése es el deterioro del mercado de trabajo, señorías, o eso es realmente apostar por trabajo de calidad? No suban sus señorías a hablarme de tópicos, suban a hablarme de mediciones, de cifras, porque los tópicos, señorías, se los lleva el viento, mientras que las realidades sustentadas en cifras, en estadísticas oficiales, esas quedan ahí para los ciudadanos.

Políticas de I+D+I. Los recursos destinados a I+D+I en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2004 ascienden a un total de 4.400 millones de euros. En el año 1995 el total ascendía a poco más de 1.000 millones de euros. Eso quiere decir que hemos multiplicado casi por cuatro la dotación de presupuestos destinados a la política de I+D+I. Eso quiere decir que se ha pasado de 100.000 investigadores en España en el año 1995 a 140.000 en el año 2001. Y eso quiere decir, en definitiva, que hoy en España tenemos el sistema fiscal más amplio y generoso en incentivos fiscales a I+D de toda la OCDE, como antes he relatado también en mi discurso. Según datos Eurostat, el gasto público de las administraciones públicas en nuestro país en I+D+I representó en el año 2002, último ejercicio cerrado, el 1,7 por ciento del total del gasto, lo que sitúa a España en el tercer país de la Unión Europea a la hora de dedicar prioritariamente su gasto a I+D. De ahí la noticia de esta mañana de que en nuestro país el gasto de I+D+I ha superado por primera vez el uno por ciento, con un avance significativo, sin duda alguna, como antes no se ha registrado en nuestro país.

Sobre otro de los tópicos, el fraude, poco más tengo que añadir a los datos y cifras que he dado esta mañana en mi planteamiento que, en definitiva, ustedes los defensores de los vetos a la totalidad de los presupuestos, sencillamente ignoran o desconocen. Señorías, ¿cómo puede explicarse un aumento de la recaudación tributaria en España tan alto —hablo de la recaudación líquida— claramente por encima de la actividad económica, si no es porque se ha corregido el fraude fiscal en nuestro país? ¿Cómo puede sustentarse una posición contraria? Sencillamente, no se sostiene, señorías. Y lo que ha habido es un avance significativo en la lucha contra el fraude, que vemos reflejado en la

propia estadística de la recaudación tributaria y en los datos de control que maneja la Agencia Tributaria. Y es que con impuestos más sencillos, con los servicios facilitados a los contribuyentes, sin duda alguna se tributa mejor.

Otro de los tópicos, señorías, que he escuchado en la defensa de los vetos, es que el Gobierno del Partido Popular ha subido los impuestos indirectos a los españoles. Pues no ha sido así, señorías, y los datos de recaudación son bastante categóricos en ese aspecto.

En 1995, y dando un valor de 100 al total de la recaudación tributaria, los impuestos directos representaban el 53,8 por ciento. En 2003 la recaudación de los impuestos directos representará el 53,8 por ciento, exactamente la misma proporción que en 1995. De la misma forma, los impuestos indirectos también guardan exactamente la misma proporción que en 1995, es decir, el 45,1 por ciento del total de la recaudación tributaria líquida y el 45,3 por ciento en el 2003. Así pues, señorías, en el total de la recaudación tributaria líquida, que es como debe medirse, no hay recomposición de impuestos directos frente a indirectos, y por tanto, apéense ustedes de utilizar otro de los tópicos que sus señorías emplean como latiguillos políticos y que no se sostienen en la realidad más elemental.

En materia de inflación el reproche que hace alguna de sus señorías a los Presupuestos Generales del Estado es que el signo de los mismos no corrige la inflación en nuestro país. ¿Qué quieren ustedes decirme con esto?, ¿que tiene que haber más superávit presupuestario? Porque si con el que hay actualmente no hacemos lo que debemos en materia de inflación, será que los presupuestos del Estado tienen que ser más superavitarios. Ése sería el único razonamiento que cabría en este momento. Y si ello es así, ¿por qué defienden ustedes enmiendas que contienen un incremento de gasto de forma incesante? El Grupo Parlamentario Socialista ha presentado en esta Cámara enmiendas por valor de 10.500 millones de euros de gasto adicional al previsto en los presupuestos. ¿Cómo se compadece la crítica que hacen ustedes en el sentido de que estos presupuestos no hacen lo que deben en materia de inflación con la presentación de dichas enmiendas? No sé si alguna de sus señorías me sigue en cuanto al impacto presupuestario sobre la inflación. (*Protestas en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.*)

En materia de tipos de interés también he tenido que escuchar esta mañana algunas aseveraciones hechas desde esta tribuna que ciertamente son, cuando menos, curiosas, y quedémonos con este amable epíteto. El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista ha llegado a decir que el Gobierno del Partido Popular no tiene nada que ver con los bajos tipos de interés que ahora tenemos los españoles. ¿Debo recordar al señor portavoz de dicho grupo cuáles eran los tipos de interés que había en 1995? (*Protestas en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.—La señora Martínez García: ¡Sí, sí!*)

El señor PRESIDENTE: Silencio, señorías.

El señor MINISTRO DE HACIENDA (Montoro Romero): ¿Debo recordarle quién hizo la apuesta por la fun-

dación del euro? ¿Debo recordarle quién introdujo a España en la Unión Económica y Monetaria Europea? (*Rumores en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.—La señora Martínez García: ¡Sí, sí, recuérdenoslo!—El señor Bru Parra pronuncia palabras que no se perciben.*)

El señor PRESIDENTE: Silencio, señorías.

Señora Martínez y señor Bru, no interrumpen ustedes al orador.

Continúe, señor ministro.

El señor MINISTRO DE HACIENDA (Montoro Romero): ¿Tengo que recordar a su señoría que en 1995 la diferencia de la prima de riesgo-país, de la deuda pública española, del bono español a 10 años era, en relación con el alemán, de 600 puntos básicos? Seiscientos puntos básicos de más pagábamos los españoles por colocar nuestra deuda en comparación con los alemanes, señorías. Es decir, seis puntos de diferencia en los tipos de interés que han desaparecido por completo en la actualidad.

Los gobiernos del Partido Popular no tenemos nada que ver con ustedes a la hora de generar confianza de los mercados financieros. Los gobiernos socialistas tenían una penalización debida, sin duda, a la falta de objetividad de los mismos. Ustedes tenían un déficit público del 7 por ciento y unos incrementos de deuda pública de dos o tres puntos porcentuales de producto interior bruto al año, y obviamente los mercados financieros les penalizaban como consecuencia de ello. Ésa es la verdad, señoría, ésos los tipos de interés y ésta la determinación de los tipos de interés de una economía hoy fiable, como lo es actualmente la española y como nunca antes lo había sido en su historia.

Y respecto al déficit oculto, ¿baja o sube la deuda pública sobre el producto interior bruto, señorías? Ha bajado más de 15 puntos porcentuales de producto interior bruto. Así pues, ¿cómo se financia el déficit oculto? ¿Dónde está la financiación del déficit oculto, señorías, si está bajando la participación de la deuda pública sobre el producto interior bruto? ¿Acaso las estadísticas españolas no están homologadas por Eurostat? ¿Qué hizo Eurostat con las estadísticas que le remitió el Gobierno español el año pasado? Las corrigió, efectivamente. Las corrigió para ponernos un superávit presupuestario el año pasado que no hacíamos figurar en nuestras estadísticas.

¿Este es el déficit público, señorías, o estamos ante los topicazos, los topicazos de los planteamientos que se llaman de la oposición, que, en definitiva, son discursos políticos, como antes decía, situados en el catastrofismo, en la falta de reconocimiento de una realidad, realidad que se resume de la manera que antes les exponía? ¿Es verdad o no es verdad que hay 4 millones 300.000 personas trabajando en España que nunca antes habían trabajado? ¿Es verdad o no es verdad que la renta per cápita de España ha avanzado siete puntos porcentuales desde que gobierna el Partido Popular, señorías?

Crecimiento y empleo. ¿O es que sirven para otra cosa los presupuestos del Estado? Para que haya mayor bienestar y para que haya más empleo. Entonces, ¿de qué me es-

tán hablando, señorías? ¿Qué es lo que están reprochando al Gobierno del Partido Popular en cuanto a merma de bienestar social para los ciudadanos? ¿Qué es lo que están criticando, señorías?

El senador Bru ha aludido al espíritu navideño. Pero me ha preocupado mucho la crítica que su señoría ha hecho, porque ha cometido un error de concepto, y de esa manera entiendo como formula su crítica. Y el error de concepto es afirmar desde esta tribuna que en España no hay crecimiento en términos reales, sino decrecimiento, es decir, que estamos bajando en términos reales.

El senador Bru confunde la deflactación del crecimiento nominal del producto interior bruto. Señoría, la economía española está creciendo al 6,6 por ciento en términos nominales y el deflactor del PIB es el 4,4, lo que da un resultado de un crecimiento en términos reales del 2,3 por ciento. Pero si su señoría vuelve a deflactar, comete un error de concepto que realmente le sitúa ante un planteamiento de negación de la más elemental de las evidencias. Y es que el portavoz socialista niega que haya crecimiento económico en España en términos reales, señorías.

Seguramente este error de concepto que ha cometido el senador Bru no tendrá nada que ver con las fechas navideñas, pero es un error que francamente descalifica su postura y su posición económica, porque esto, senador Bru, lo enseñan en Primero de Bachillerato, en el curso de Introducción a la Economía que realizan nuestros escolares. (*Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.*) Por tanto, si el senador Bru niega esto, está negando lo más elemental, es decir, que España es el país de la OCDE que mayor crecimiento económico está teniendo en este entorno económico mundial tan difícil.

Y eso es así y eso es lo que, por lo visto, niega el Partido Socialista para negar, en definitiva, todos los elementos de los tópicos a que antes me he referido con ese relato, para no tener que entrar de forma pormenorizada en los mismos, los cuales, en definitiva, van hacia la definición de una sociedad más injusta.

Ya se sabe, senador Bru, es injusto promover la creación de empleo; es injusto, señoría. Es injusto bajar el Impuesto sobre la Renta un 78 por ciento a los españoles que ganan menos de 12.020 euros al año; es injusto, senador Bru. Es injusto realmente promover la igualdad de oportunidades de nuestros ciudadanos mediante el empleo de la mujer, su contratación con bonificaciones a la Seguridad Social, con impuesto negativo sobre la renta, con la ayuda de la Hacienda Pública mediante esos 100 euros al mes por cada hijo menor de tres años. Es injusto, efectivamente, senador Bru, hacer estos planteamientos, que son los que realiza el Gobierno del Partido Popular, gracias a los que hoy tenemos en nuestro país a esas 2 millones 200.000 mujeres trabajando y que antes no trabajaban. Y es injusto que la convergencia real de España esté protagonizada por el conjunto de las comunidades autónomas, de las regiones españolas, señor Bru.

La crítica del Partido Socialista tuvimos ocasión de conocerla, de vivirla, de experimentarla en el debate de presupuestos del Congreso de los Diputados, señor Bru. Su señoría ha hecho una aseveración: No voy a explicar la al-

ternativa del Partido Socialista porque ya lo hizo el señor Rodríguez Zapatero. Yo que fui en aquel momento el defensor, por parte del Gobierno, del proyecto de presupuesto frente al señor Rodríguez Zapatero tengo que confesarles, señorías, que no me enteré de cuál era la alternativa del Partido Socialista. (*Un señor senador desde los escaños del Grupo Parlamentario Socialista: ¡Torpe!— Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.*) Ni me enteré entonces ni me he enterado en el día de hoy ni me voy a enterar sencillamente porque no la tienen. No tienen ustedes alternativa a la política económica del Gobierno, no tienen ustedes alternativa al proyecto de presupuestos.

Es cierto que este año el Partido Socialista presentó a la opinión pública —que no defendió en la tribuna del Congreso de los Diputados— una alternativa al proyecto de presupuestos del Gobierno. Fue el día de los micrófonos, aquel día famoso de los micrófonos, donde también hubo algunas pequeñas confusiones entre progresividad y regresividad del sistema impositivo, igual que la que ha habido esta mañana entre deflacción, crecimiento en términos reales y crecimiento en términos nominales. Pero salvadas estas pequeñas diferencias, que sin duda alguna son lapsus conceptuales, el Partido Socialista proponía un cuadro macroeconómico a la sociedad española para el año 2004 en el que incrementaba la productividad haciendo crecer el empleo un 1 por ciento frente al crecimiento propuesto por el Gobierno de empleo del 1,9 por ciento. Así hace crecer el Partido Socialista la productividad de la economía española, es decir, desacelerando la creación de empleo en nuestro país. En eso sí acierta el Partido Socialista. Si el Partido Socialista gobernara España desde luego no crearía 300.000 empleos el año próximo, señorías (*Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.*), y lo dice en su cuadro macroeconómico, aquel que el señor Rodríguez Zapatero no defendió desde la tribuna del Congreso de los Diputados y no sé si el señor Bru estaría en condiciones de defender esta tarde aquí ese brillante incremento del empleo que preconizaba el Partido Socialista para la sociedad española.

Dice el señor Bru que aparentamos la reducción de impuestos. Señor Bru ¿usted me niega que hemos bajado el impuesto sobre la renta durante dos legislaturas? ¿Su señoría niega que esté pagando menos impuestos que en el año 1995? (*Varios senadores del Grupo Parlamentario Socialista pronuncian palabras que no se perciben.*)

El señor PRESIDENTE: ¡Silencio, señorías!

El señor MINISTRO DE HACIENDA (Montoro Romero): Su señoría no puede hacer aquí afirmaciones gratuitas negando las evidencias más fácilmente constatables porque no lo puede hacer, porque está en su nómina, señoría, y en la de todos los trabajadores españoles esas bajadas, que se acumula en términos medios, como les decía, un 25 por ciento y que para los trabajadores con rentas por debajo de 12.020 euros asciende a bajadas del 78 por ciento. Esa es la realidad. Además, resulta que gracias a eso recaudamos más en el año 2003, donde gracias al in-

cremento de las bases imponibles estamos consiguiendo no sólo equilibrar, sino conseguir un superávit presupuestario para una España que crece y donde hoy hay 4 millones 300.000 personas trabajando y tenemos prácticamente 350.000 empresas creadas desde entonces.

En relación con el planteamiento de la senadora Aroz, tengo que agradecerle el reconocimiento que hace de la política de inversiones del Gobierno. Efectivamente, como ella decía, estamos invirtiendo fuertemente; no se puede negar la evidencia; ahí está esa inversión en infraestructuras, ahí está la duplicación de la inversión en infraestructuras respecto del año 1995, el doble de inversión, señoría. Y hoy en Cataluña, señoría, la inversión del Estado está en sus máximos históricos. Nunca antes el Estado había invertido semejantes cuantías en Cataluña, y no digo, ni mucho menos, que impulsada o protagonizada exclusivamente por la inversión, pero en Cataluña algo profundo se ha movido durante estos últimos años, durante los años de gobierno del Partido Popular.

Cataluña es hoy una comunidad autónoma que, en renta per cápita, está por encima del cien por cien de la media. Cataluña es hoy una región desarrollada de la Unión Europea, señorías; lo es por primera vez en su historia, y Cataluña ha pasado esa barrera, la barrera del desarrollo europeo, con los gobiernos del Partido Popular, ésa es la única realidad, señoría; eso es lo que ha ocurrido en Cataluña. Ahí está el incremento de su renta per cápita, desde el 96 por ciento en 1995, al 101 por ciento en el año 2002; ahí está el avance de Cataluña en términos de renta per cápita, y, por tanto, su consideración actual de región desarrollada de la Unión Europea.

También en Cataluña desde el año 1995 a este tercer trimestre del año 2003 se han producido 780.000 nuevas afiliaciones a la Seguridad Social. Eso ha permitido que la tasa de paro de Cataluña caiga desde un 20 por ciento, en que estaba situada en el año 1995, hasta el 9,2 por ciento, que registra en la actualidad. Por tanto, Cataluña es clara expresión de la transformación de España desde que hemos aplicado políticas realmente de desarrollo económico, políticas de creación de empleo, y eso es lo que ocurre en Cataluña con las políticas de bajada de tipos de interés, de mejora de las relaciones laborales, de mejora de los costes de producción, de mejora de los impuestos, de saneamiento de las cuentas públicas y de una fuerte política de inversiones. Ésa es la realidad, señorías, con independencia de los planteamientos y de determinados debates políticos que niegan esa realidad, que niegan realmente ese planteamiento, señora Aroz.

Ahí está la realidad constatable; son los estadísticas de Eurostat, son nuestras estadísticas básicas de empleo las que están detrás de las afirmaciones que he hecho esta tarde, y ahí está el planteamiento de una Cataluña que, desde su nivel de desarrollo, tributa de acuerdo con un sistema fiscal que tiene ese carácter progresivo. Además Cataluña se beneficia hoy de un sistema de financiación autonómico que es el que hemos acordado todas las comunidades autónomas de España, y que por tanto responde a los intereses de las diferentes comunidades autónomas de España, que tienen intereses distintos, y que al acordar un

único sistema de financiación autonómica están reconociendo que el sistema de financiación autonómica actual es eficaz y es justo a la hora de responder a los diferentes intereses de las comunidades autónomas de España.

Por eso, yo tengo que advertir esta tarde que el nuevo Gobierno de Cataluña puede por supuesto plantear, legítimamente, revisiones de ese sistema, pero no son aceptables revisiones del sistema que vayan contra la solidaridad, es decir, que resten recursos de las regiones más atrasadas y vayan a las más avanzadas, ni tampoco es aceptable que lo que se plantee sea derivar más recursos que procedan de la subida de impuestos. Esos dos planteamientos no son admisibles, señoría: ir contra la solidaridad, o en definitiva, propiciar, favorecer lo que sería el incremento de los impuestos que deberíamos pagar todos los españoles. Esos dos planteamientos —insisto— no son admisibles porque, además, por las razones que antes he mencionado, ahí está una evolución económica positiva y ahí está una muy importante creación de empleo que es una realidad —repite— desde el año 1995 acá, y que no lo era anteriormente.

Al portavoz del PNV, señor Albistur, le agradezco también sus amables palabras referidas a la relación que hayamos podido mantener durante esta legislatura. Esta mañana he notado a su señoría en el ritual de la oposición. Ha hecho realmente una intervención muy leída. Traía un discurso armado, leído prácticamente sin levantar la cara, y seguramente ignorando lo que es el eje fundamental, el discurso político hoy del Partido Nacionalista Vasco. Señoría, en el País Vasco, en Euskadi, ha habido un crecimiento de renta per cápita desde el año 1995 hacia acá. Desde que en España gobierna el Partido Popular ha habido un crecimiento de la renta per cápita muy importante en Euskadi, señoría. La renta per cápita ha pasado en esta comunidad autónoma de estar en el 93 por ciento de la media de la Unión Europea en el año 1995 a situarse en el año 2002 en el 105 por ciento, con una creación de empleo que se ha dado en Euskadi de 211.000 afiliados nuevos a la Seguridad Social, sobre un total de afiliados en el año 1995 de 679.000. Eso ha permitido que el País Vasco, senador Albistur, haya hecho caer su tasa de paro desde el 22,5 por ciento en el que estaba situada el año 1995, hasta el 9,1 por ciento en el que está en la actualidad, y ustedes, el Partido Nacionalista Vasco, gobernaban en el País Vasco en el año 1995, señoría. Ustedes ya gobernaban allí. Esto ha ocurrido desde que gobierna en España el Partido Popular. Es cuando se ha producido la convergencia en términos de renta per cápita en el País Vasco, es cuando se ha producido la creación de empleo en el País Vasco (*Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.*), porque ustedes, el Partido Nacionalista Vasco, llevan en el gobierno de Euskadi desde el año 1980, y es ahora cuando realmente en buena parte del País Vasco se puede y se debe hablar de sociedad de pleno empleo. Ahora, no antes, desde que estamos aplicando las políticas que ya he descrito anteriormente: bajada de tipos de interés, mejora de las relaciones laborales, mejora de los costes de producción, mejora de los impuestos, equilibrios presupuestarios, las políticas de inversión pública elevada. Es ahora cuando

realmente se está produciendo ese desarrollo. Ese desarrollo, señorías, senador, se produce desde una realidad: la economía de Euskadi es la economía de España, está completamente integrada en la economía española. No se puede disociar, no se puede diferenciar. Esa diferenciación de la economía de Euskadi sería gravísima para el bienestar de los habitantes de esta comunidad autónoma. Por eso el Plan Ibarretxe es un dislate, señoría. El Plan Ibarretxe, que es el que ustedes están defendiendo desde el Partido Nacionalista Vasco, es una amenaza para el bienestar económico y para el bienestar social de los vascos, una amenaza que no se está plasmando en realidades, porque, sencillamente ese plan, no es creíble, no es un plan tangible, no es percibido como una amenaza, y gracias a eso continúa el crecimiento económico. Pero su intencionalidad política es negativa, señor Albistur. Eso es lo que usted no puede olvidar. Realmente usted tiene un planteamiento negativo en relación con una situación de bienestar que en el País Vasco se ha producido con los gobiernos del Partido Popular y, en definitiva, con gobiernos que han cohesionado territorialmente a nuestro país.

Su señoría dice que no hay convergencia con la Unión Europea, y ya le he recordado cuál es la convergencia de España y cuál es la convergencia del País Vasco. ¿O es que su señoría va a negar también esa evidencia? Esto es converger, señoría, en lo más importante que puede tener una sociedad, que es en materia de empleo.

En relación con el señor Quintana, ¿recuerda su señoría el debate del año pasado? Usted decía: No hay Estado en Galicia. Señor Quintana, ¿qué ha hecho el Estado para paliar los efectos de la catástrofe del «Prestige»? (*Un señor senador del Grupo Parlamentario Socialista: Nada.*) Poner los recursos necesarios, señoría, como estuvimos explicando en esta misma tribuna hace un año. Ésa es la realidad, la única realidad de la catástrofe del «Prestige». Ahí está la aportación de recursos necesarios, con indemnizaciones para quienes la han padecido directamente. ¿Conoce su señoría algún caso donde haya habido semejante diligencia a la hora de promover las compensaciones para los afectados? ¿O lo va a negar también en los ejemplos comparados?

¿Puedo hablar también del baúl de los recuerdos? ¿Hablo de otras crisis petroleras y de su gestión por los gobiernos socialistas? (*Rumores en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.—La señora Vindel López: ¡Ahí, ahí!*)

El señor PRESIDENTE: Silencio, señorías.

El señor MINISTRO DE HACIENDA (Montoro Romero): Señorías, hoy en Galicia hay una evolución económica similar a la del conjunto del país porque desde el principio estamos actuando como tenemos que actuar para compensar y, en definitiva, para paliar esos efectos.

En el último año natural, noviembre 2002-noviembre 2003, la afiliación a la Seguridad Social se ha incrementado en Galicia en 25.820 personas, el 2,7 por ciento, mientras que en el total nacional la afiliación se ha incrementado en el 2,9 por ciento. Por tanto, Galicia ha superado la crisis del «Prestige», y ahí está su evolución eco-

nómica y su creación de empleo. Esa es la realidad de Galicia, esa es la evolución del empleo en Galicia, porque en Galicia hay gente que se ha puesto a trabajar, gente que sigue invirtiendo, gente que sigue creando empleo porque están respondiendo a la única actuación que podía tener el Gobierno. (*Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.—Protestas en los del Grupo Parlamentario Socialista.*)

Yo le recriminé hace un año y le emplacé a tener este debate un año después, y ciertamente, ¿qué planteamiento hicieron usted y su grupo hace un año? La política del abuso de la catástrofe. Y los ciudadanos, como entonces dije, pondrán con el tiempo a cada uno en su sitio. Los ciudadanos reconocerán gobiernos responsables frente a los que son políticos aprovechados, políticos que utilizan la catástrofe en vez de estar al lado del Gobierno a la hora de acometer los problemas que es, en definitiva, lo que exigen las situaciones de crisis. (*Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular. Protestas en los del Grupo Parlamentario Socialista.*)

Ahí está el crecimiento económico y la creación de empleo que continúa en Galicia. Su señoría puede decirme que no es así, que no hay ese aumento, pero según EPA, en el tercer trimestre del año 2003 ese aumento es todavía superior: 31.690 nuevos ocupados sobre el tercer trimestre del año 2002 en Galicia, absorbiendo claramente las peores consecuencias de la catástrofe del ««Prestige»».

El señor PRESIDENTE: Señor ministro, aunque su señoría no tenga asignado un tiempo determinado, le ruego vaya concluyendo.

El señor MINISTRO DE HACIENDA (Montoro Romero): Voy acabando, señor presidente.

Señorías, por descontado tenemos que seguir trabajando. Por ello, el compromiso del Gobierno es desarrollar el Plan Galicia y llevar hacia adelante una política de inversiones en la comunidad gallega, que el año próximo van a aumentar, no en el 30 por ciento, sino en el 37 por ciento. Esa es la realidad de los presupuestos, y esa es la realidad económica de una Galicia que está en marcha y por la que tenemos que seguir apostando. Esa es una tarea que debe llevar a cabo el Gobierno tanto a través de sus políticas de cohesión social como de cohesión territorial.

En cuanto al señor Mur, también ha hecho una descalificación de estos presupuestos sin salir del tópico. Pues bien, señoría, sólo le recordaré que en 1995 la tasa de paro en Aragón era del 16 por ciento, mientras que en la actualidad dicha comunidad tiene pleno empleo. Algo habrá pasado, y algo estarán influyendo las políticas del Gobierno del Partido Popular en Aragón, porque eso no ocurría antes de 1995, mientras que en estos momentos esa comunidad está marcando el 5,5 por ciento y tiene un progreso en términos de renta per cápita que estamos apoyando a través de una política de inversiones que está transformando fundamentalmente la geografía aragonesa; una política de inversiones en infraestructuras viarias, en el ferrocarril de alta velocidad y en el desarrollo del Plan Hidrológico Nacional, no siendo éste ninguna amenaza,

como tampoco rompe la cohesión territorial de España, sino que, al contrario, promueve la utilización de un recurso escaso, el agua, en favor de un crecimiento económico que conviene a todos los españoles y, por tanto, también a los aragoneses.

Por último, respecto del señor Cuenca, de Izquierda Unida, él mismo ya se ha declarado «gastón». Pues bien, ya le he dicho antes que no confunda su señoría los términos «gastón» y «despilfarro». Y tampoco confunda lo que es su posición política. Ustedes, Izquierda Unida, están con el Gobierno del PNV en el Plan Ibarretxe, señor Cuenca, y eso supone generar desconfianza y no tener lealtad para con la Constitución y la democracia española. Eso no es tener una política de carácter social alternativa a la del Gobierno. Eso es, repito, generar desconfianza, que es la antítesis de lo que necesita un país y su economía para su progreso y desarrollo. (*El señor Mansilla Hidalgo pronuncia palabras que no se perciben.*) Ya le he rebatido el discurso del gasto y de los impuestos. Y en cuanto al discurso de los presupuestos antagonísticos, no se lo puedo rebatir, sencillamente, porque no lo conozco. El hecho de que Izquierda Unida tuviera capacidad de influir en el Gobierno de España generaría desconfianza. Y espero que ese sentimiento no se produzca en demasía en Cataluña, confiando en que la sociedad catalana sea capaz de reaccionar a la negativa influencia que supone su presencia e incidencia en un gobierno regional que, al igual que otros, está consiguiendo un desarrollo económico puntero y es motor del crecimiento económico de nuestro país.

Señorías, el discurso del Gobierno es el discurso del empleo y el de la convergencia. Hoy venimos a esta Cámara con un resultado que se concreta y se acredita. Y ese resultado, con el que acudiremos, por supuesto, a la convocatoria de las próximas elecciones generales, nos anima a proseguir con una serie de políticas que se resumen en estos presupuestos, como son la austeridad en el gasto, menores impuestos, mayores inversiones en infraestructuras, protección social y una dotación suficiente de los servicios públicos básicos de los ciudadanos. Esos son el sentido y el espíritu de los nuevos presupuestos que el Gobierno trae a esta Cámara, desde la confianza y con la convicción de que el próximo año volverá a ser un año de crecimiento económico y de importante creación de empleo para nuestro país.

Muchas gracias, señor presidente. (*Fuertes aplausos desde los escaños del Grupo Parlamentario Popular.*)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Turno de portavoces. Por el grupo parlamentario místico, tiene la palabra el señor Cabrero. (*Risas.*) Quiero decir por parte del Grupo Parlamentario Mixto. Pido disculpas.

El señor CABRERO PALOMARES: Muchas gracias, señor presidente. De vez en cuando hacemos meditación, que es importante en la vida.

Señor ministro, usted puede utilizar el tiempo que le parezca oportuno. Esta tarde ha intentado cuadrar el círculo, y eso va a ser muy difícil. No lo ha conseguido y pienso

que no lo va a conseguir en la línea de defensa de este proyecto de presupuestos que está siguiendo ni en esta Cámara ni en el Congreso de los Diputados, aunque cierre su discurso haciendo referencia a la lealtad de Izquierda Unida a la Constitución. Para lealtad, la de los que dimos mucho en el proceso de la Constitución Española, frente a los que ni siquiera la votaron ni participaron, y siguen sin sentirse cómodos con ella, por lo cual buscan todo tipo de artimañas para, pasando por encima y de puntillas de la Constitución, intentan introducir de rondón modificaciones de leyes que tienen un rechazo total de la sociedad sobre ese carácter de constitucionalidad.

Señor ministro, por más que usted cierre su discurso planteando los tópicos que utiliza con el Plan Ibarretxe y otro tipo de cuestiones, repito, no va a conseguir cuadrar el círculo con sus grandes contradicciones en el proyecto de presupuestos, ni siquiera recurriendo a Cataluña, al gobierno de la izquierda, etcétera. Su problema es que en un gobierno de España presenta una situación de marginalidad y poco contenido en cuanto a la política en Cataluña; son, por tanto, contradicciones de su partido en estos momentos.

Usted plantea un proyecto de presupuestos en el que la política de ingresos presenta un grave problema y es cómo defender un principio de estabilidad presupuestaria a unos niveles que ya no se dan en la Unión Europea, ni en el área euro ni a ningún otro nivel; incluso tienen que recurrir a resolver el problema del déficit del 0,4 con relación al PIB con el superávit que presenta la Seguridad Social y ni siquiera de esta forma resuelven el problema.

Es un modelo de estabilidad presupuestaria —incluso está usted vendiendo últimamente el superávit— con una política de ingresos que sube la presión fiscal a costa de aumentar los impuestos indirectos —según indica el Consejo Económico y Social y otros organismos en el ámbito de la Unión Europea— y bajar los impuestos directos, como el IRPF que supone un ahorro de 9.000 millones de euros al año, pero el 85 por ciento de esa cantidad lo ahorran el 11 por ciento de los que más ganan; ahorran los que más ganan a fin de conseguir una política fiscal que beneficie a ese colectivo con mayores rentas del capital o del trabajo, aunque, insisto, se aumente la presión fiscal por esa vía de los impuestos indirectos.

Vende usted también, además utilizando engaños, tanto en la Cámara Alta como en la Baja —y no va a conseguir cuadrar, porque es un presupuesto irreal—, un nivel de crecimiento económico previsto en torno al 3 por ciento, que no es real ni lo será al final de 2003. Y ha ido evolucionando de un 4 por ciento de media anual hasta un 2 por ciento, incluido este año, porque no existen políticas que activen la economía en nuestro país para ir a un mayor crecimiento económico que permita hablar de políticas de empleo estable, gasto social, etcétera. Y vuelve a poner encima de la mesa el crecimiento del 3 por ciento, que ya ha corregido la OCDE y todos los organismos europeos e internacionales. En definitiva, políticas y niveles macroeconómicos irreales y engañosos. A partir de ahí, es cierto, por tanto, que en nuestro país los niveles de crecimiento de empleo están bajando. Los datos que siguen apareciendo

un trimestre tras otro, o mes a mes, este año en relación con los registros del Inem indican que en España el empleo está bajando, como digo. En algunos casos crece menos que en el mismo período de ejercicios anteriores, y en otros casos la tasa de desempleo incluso crece. Y además, en cuanto a la temporalidad, usted se está inventando unos datos que desde todo punto de vista son inciertos. De cada cien contratos que se hacen en nuestro país solamente nueve o diez son fijos. Los demás son todos de carácter precario. La rotación es lo que le está permitiendo a usted utilizar el dato de las altas en la Seguridad Social de tantas personas. La rotación mes a mes, incluso los contratos por una semana, es lo que usted está vendiendo, pero eso es engañoso e irreal.

Pero es más, hay un gran diferencial entre territorios y provincias.

En su provincia, que es la misma de la que yo provengo, solamente 2,5 de cada 100 contratos son de carácter fijo; los demás son eventuales. Ésa es la realidad del mercado de trabajo por las políticas que ustedes están desarrollando. Y además usted también es capaz de vendernos aquí el nivel de crecimiento del empleo en el ámbito de la mujer, es decir, de esa parte de personas que constituye más del 50 por ciento de la población activa de nuestro país. Pues mire usted, señor ministro, tengo que decirle que hay más precariedad todavía que en el otro sector, en el masculino, formado por el 49 por ciento de la población. El salario de la mujer es 20 puntos de media más bajo por un trabajo igual que el que realizan los hombres. Ésa es la realidad de su política.

Pero es más, con su falta de política social ustedes están derivando a las mujeres, y sin ningún tipo de retribución, su propia responsabilidad de gobierno de atención a los mayores, a los menores, a personas con dependencias, etcétera. Ésa es la política discriminatoria de su Gobierno que sigue reflejándose en el ámbito de los presupuestos.

Señor ministro, ustedes no están acortando las diferencias sociales en relación a la Unión Europea. Por el contrario, el diferencial se sigue incrementando a pesar de que se producen insistentes llamadas y de que hay recomendaciones de organismos sociales de la Unión Europea que dicen que ustedes tienen que crecer más en el ámbito de las políticas sociales para permitir la cohesión social, por ejemplo, en el salario mínimo interprofesional, etcétera.

Como consecuencia de esa política de ingresos —desde nuestro punto de vista nefasta—, ustedes siguen haciendo recortes en I+D+I. Según científicos e investigadores la evolución que está teniendo el gasto en términos de PIB dirigido a la investigación, desarrollo e innovación tecnológica en nuestro país es una evolución negativa. Del 5,5 por ciento en 1995 hemos caído hasta el 4,9 por ciento sobre el PIB, según ha informado la OCDE. Y a eso podemos añadirle, además, que ustedes siguen situados muy por debajo de la media de la Unión Europea. En gastos en educación solamente están en el 4,9 por ciento del PIB. Y en gasto social, en términos del PIB, del 4,2 por ciento en que estábamos en 1995, hoy estamos en el 3,3. Por eso la cobertura en materia de desempleo solamente es el 50 por ciento.

Señor ministro, en nuestro país todavía el 60 por ciento de los pensionistas cobran menos del salario mínimo interprofesional, que ya de por sí es muy bajo, por su política de previsión y de crecimiento respecto del mismo en relación a las previsiones de inflación de todos los años desde que usted tiene la responsabilidad del Ministerio de Hacienda. Desde la legislatura pasada se están equivocando ustedes como mínimo en torno al 50 por ciento interanual según los datos que aparecieron ayer. En un 2,8 más o menos acabaremos diciembre. Y se equivocarán nuevamente este año en un 50 por ciento, que no es poco, en previsiones de inflación.

Por eso, porque ustedes hacen esa política de gasto social cada vez más involucionista, el 60 por ciento de las pensiones —se lo he recordado aquí algunas veces y se lo voy a volver a recordar— están todavía por debajo del salario mínimo. En su provincia y en la mía, el 80 por ciento de los pensionistas están por debajo del salario mínimo interprofesional. Y usted en vez de aprovechar el superávit de la Seguridad Social para resolver ese déficit, lo utiliza para seguir vendiendo la moto, propagandísticamente hablando, del equilibrio y la estabilidad presupuestaria.

Bien, señor ministro, en tanto esas políticas de ingresos, de beneficios fiscales, de reducción del gasto social, sean de esta manera, usted no puede plantear aquí cuadrar en absoluto el círculo. Es imposible.

Además, señor ministro, en el Plan Galicia había un compromiso de inversión de 2.500 millones de euros. Mentira; no se está haciendo absolutamente nada. Si rebuscamos en el proyecto de presupuestos no llegamos ni a mil millones de euros destinados a las políticas de regeneración, impacto ambiental negativo, problemas de residuos, etcétera. Por eso, sigue habiendo un nivel de contestación muy fuerte en Galicia contra sus políticas de abandono, de mirar hacia otro lado en relación a la catástrofe del ««Prestige»». Esta mañana la plataforma «Nunca más», reunida en esta Cámara con todos los grupos, a excepción voluntaria del Partido Popular, ha planteado cuáles son los déficit y la necesidad de que haya una mayor sensibilidad por parte del Gobierno en relación a las catástrofes, porque la normativa reglamentaria que ustedes tienen, deficitaria, caduca, absolutamente oscura, está provocando una situación de catástrofe como la que se vivió el año pasado en Galicia.

En definitiva, señor ministro, ustedes hacen una política en materia presupuestaria muy desequilibradora territorialmente. Tengo que recordarle los diferentes niveles de inversión que existen entre unos territorios y otros en nuestro país. Por ejemplo, en su provincia, que es la mía, hay una inversión media por habitante prevista en el proyecto de presupuesto para el año 2004 de 189 euros frente a algo más de 430 de media en España. Son políticas muy desequilibradoras, que se dejan notar en territorios que para ustedes no son prioritarios, que no forman parte del eje central de sus políticas y que están provocando marginación en materia no solamente de políticas sociales, sino también de infraestructuras, etcétera.

Además, le recuerdo, señor ministro, que ustedes no son capaces de resolver con su política presupuestaria

los problemas que han generado en Andalucía en materia de financiación. En Andalucía, señor ministro, ustedes tienen una deuda histórica acumulada por la no aplicación de lo que está previsto en el Estatuto de Autonomía sobre financiación y equilibrio de los servicios públicos que se prestan, que asciende a más de 250.000 millones de las antiguas pesetas, y ustedes no lo quieren resolver porque miran hacia otro lado, porque su prioridad no es Andalucía, porque ustedes no tienen tampoco ese espíritu equilibrador y solidario del Estado. Además, tampoco son capaces de resolver lo que, desde nuestro punto de vista, es algo tan legítimo como la participación en los ingresos del Estado; incluso el 2 por ciento de incremento que ha ganado la Junta de Andalucía en los tribunales frente al Gobierno central tampoco quieren ustedes cumplirlo. *(El señor vicepresidente, Rojo García, ocupa la Presidencia.)*

Desde ese punto de vista, su presupuesto no es útil para la activación de la economía, no permite un crecimiento económico de manera estable y sostenida para la creación de empleo y tampoco permite políticas sociales para una mayor extensión de derechos de la ciudadanía. En ese sentido, el déficit es bastante evidente.

Además, acaban la legislatura con un proyecto de presupuestos y otro de medidas fiscales, administrativas y del orden social haciendo —por decirlo en términos muy populares— todas las pirulas que no se deben hacer en política y utilizando la ley de acompañamiento para lo que no sirve, que es meter en ese cajón de sastre todo lo que les parece bien. A través de la ley de acompañamiento, han modificado en torno a noventa leyes, lo que, desde nuestro punto de vista, refleja el espíritu no constitucionalista que ustedes siguen manteniendo.

Recientemente, han modificado el Código Penal aprovechando la regulación de otra ley y lo mismo hacen ahora con los proyectos de ley de presupuestos y de medidas fiscales, administrativas y del orden social, donde también introducen toda una serie de modificaciones de leyes que no tienen cabida. Aprovechan su mayoría absoluta para hacer una política oscura y de trapicheo político que no se merece ni el Estado español, ni las Cortes Generales, ni la Constitución Española.

Señor ministro, ésas son las razones por las que el grupo de Izquierda Unida plantea la propuesta de veto, que mantiene y defiende en el turno de réplica. Creo que es el momento de aceptar y no hacer uso —creo que con mala intención— de lo ocurrido en Cataluña, con un resultado tan legítimo y democrático como en otros sitios, para no aceptar la legalidad vigente, que es lo que ha planteado esta tarde al terminar su discurso y lo que ha manifestado su candidato a la Presidencia del Gobierno, el señor Rajoy.

El señor VICEPRESIDENTE (Rojo García): Señoría, vaya terminando.

El señor CABRERO PALOMARES: Terminó ya, señor presidente.

Nos parece que no aceptar los resultados ni la legalidad vigente es dar un paso más en su dudosa posición en rela-

ción al acatamiento de las reglas del juego de la propia Constitución.

Nada más y muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Rojo García): Gracias, señoría.

¿Por el Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria? (*Pausa.*)

Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, tiene la palabra el senador Albistur.

El señor ALBISTUR MARIN: Muchas gracias, señor presidente.

Señor ministro, desde luego, da gusto escucharle porque uno se siente satisfecho de ver que le escuchan. Se fija usted hasta en si uno lee, si lo hace despacio o si no levanta la vista de la lectura. Yo no tengo esa mente privilegiada que usted tiene, ni esa capacidad de dirigirse a las masas, y me tengo que sujetar, por mi frágil memoria y timidez, al guión que previamente preparo con rigor y seriedad. Digo que lo preparo con rigor y seriedad porque usted no me ha contestado a ninguno de los argumentos serios que le he planteado, y no sé si se ha dado cuenta o no.

Usted es un encanto de ministro, un encanto de persona y un artista. De verdad, es usted un artista, y le voy a proponer para el Premio Euskadi el año que viene. Usted no sabe que tiene el reconocimiento y agradecimiento del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos porque en pocos minutos ha dicho lo que nosotros hemos predicado siempre, que los vascos somos unos tíos buenos. Claro que lo somos, y realmente hacemos bien las cosas. No hay que decirlo con mucha presunción, que algunos de mis compañeros son de Bilbao, pero otros, que somos guipuzcoanos, vamos equilibrando la balanza y los resultados están siendo magníficos.

Mantenemos una pequeña diferencia con lo que usted dice, y es que el mundo no empezó en el año 1995, y la bonanza económica tampoco. Habían pasado muchas cosas antes y, por supuesto, todo lo sucedido después del año 1995 había empezado a construirse mucho antes. Por ejemplo, uno de los constructores importantes de esta bonanza fue el entonces responsable de la economía pública en el Gobierno vasco, que se llamaba Juan José Ibarretxe, a la sazón vicelehendakari del Gobierno vasco. Un hombre que con su rigor, su control de la administración y el equipo que logró reunir a su alrededor ha conseguido, desde el sector público, los importantes resultados que usted mismo ha enumerado aquí. Y siendo cierto que en el año 1995 no empieza la vida, hay que recordar también el enorme esfuerzo que se hizo en Euskadi, sólo en gran parte desde Euskadi, y tengo que romper una lanza por mis compañeros del Partido Socialista en el Senado, que tuvieron un papel y una implicación importante desde el Gobierno, desde los sindicatos y desde el propio Parlamento vasco, apoyando las políticas de reconversión que hubo que abordar con recursos de la comunidad autónoma.

Usted también parece olvidarse de que hay un instrumento importante que ha supuesto una parte significativa de toda esta bonanza económica, que usted ha dicho, que

es el propio Concierto Económico bien gestionado, en absoluto derrochador, que ha sabido utilizar los recursos existentes y que ha sabido racionalizar el gasto en aquello que eran las necesidades para consolidar la base económica para el relanzamiento de Euskadi.

Hay que reconocer también el papel de los empresarios, y algunos de los empleados de ustedes, de esos que nos mandan por allí como gobernadores civiles todavía, aunque con el nombre cambiado, están diciendo que ni vendan en Euskadi, que salgan fuera de allí, que se vayan a otros lugares, etcétera.

Y dado que el Partido Popular está en esa disposición —dice— inversora, me hubiera gustado que nos hubiera dicho que van a colaborar en todo este esfuerzo y en esta bonanza económica apoyando la «y» griega —que, curiosamente, ustedes la están postergando en una comunidad que es próspera y que, por tanto, precisa de incrementar la inversión—, apoyando la inversión en el nuevo puerto de Pasaia, en fondos para investigación y desarrollo, porque la comunidad contribuye, a través del cupo, a los fondos generales del Estado y además realiza su propio gasto que, por cierto, está cuatro o cinco puntos por encima de la media del Estado.

Yo le he hablado de convergencia, pero usted no me ha dicho que ninguno de los asuntos que yo le he citado son verdaderamente desconvergencias con Europa. La convergencia, y vuelvo al caso de Euskadi, es precisamente el gasto que hay en inversión y desarrollo, en el gasto social, en la formación profesional, en la asistencia social, en las políticas de la mujer, en el número de investigadores por cada mil habitantes, en el número de universitarios, en los parques tecnológicos, en la balanza de pagos positiva, en la menor inflación, aunque existan salarios más elevados, como existe en el País Vasco, en el número de camas por habitante, en la no existencia de listas de espera, en la sanidad, eso es convergencia. Usted me asegura que España está en una convergencia, pero no me ha respondido a ninguno de los indicadores que le he citado.

Estamos, como le he dicho esta mañana, a una absoluta distancia. Usted ha vuelto a los tópicos. Aquí le han hablado del Plan Ibarretxe, pero yo ahí no quiero entrar. Usted mismo ha reconocido que el Plan Ibarretxe no asusta, que la economía sigue siendo próspera, a pesar de que por ahí se mencione el propio Plan Ibarretxe. Veo que no hay posibilidad de entenderse, usted manipula perfectamente los datos a su interés, y eso no lo voy a discutir, la realidad es la que es, los ciudadanos no son estúpidos, tampoco ninguno de los senadores aquí presentes es estúpido, sabemos realmente dónde estamos, sabemos leer, sabemos reflexionar y sabemos sacar nuestras propias consecuencias. Le deseo feliz año y próspera vida política en el futuro.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Rojo García): Gracias, senador Albistur, espero que tengamos todos un buen año.

Por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, tiene la palabra la senadora Aroz.

La señora AROZ IBÁÑEZ: Muchas gracias, señor presidente.

Al señor ministro de Hacienda las críticas de la oposición le parecen —y tiene derecho a creerlo así— tópicas, demagógicas, palabras vacías, sin argumentos sólidos y catastrofistas. Pues bien, señor ministro, a mi grupo parlamentario su intervención le parece —y tenemos derecho a creerlo así— tópica, demagógica, palabras vacías, sin argumentos sólidos y triunfalista, y además se inventa o manipula datos. Un debate en estos términos es, sin duda, estéril, pero lo ha iniciado usted, señor ministro, no nosotros.

En cuanto a Cataluña, el debate sobre los planteamientos del nuevo Gobierno lo haremos en el momento que corresponda, en el lugar que corresponda y con el Gobierno que corresponda que, por el bien de España, esperemos que sea, a partir de marzo, dirigido por el señor Rodríguez Zapatero. (*Protestas en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.*)

Gracias, señor presidente.

El señor VICEPRESIDENTE (Rojo García): Gracias, senadora Aroz.

Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, tiene la palabra el senador Cambra.

El señor CAMBRA I SÁNCHEZ: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, señor ministro, me corresponde una vez más intervenir en el debate de presupuestos —y creo que ya van diez—, dado que mi grupo parlamentario me otorga de nuevo su confianza para que manifieste nuestra posición al respecto. Además, puesto que estamos al final de la legislatura será, con toda probabilidad, el último debate importante de la misma.

Económicamente hablando, esta legislatura ha tenido una evolución favorable, a pesar de las dificultades y complejidades que han existido en el entorno económico internacional; sin embargo, a nivel político, esta legislatura se ha caracterizado por un progresivo aumento de los tics que caracterizan las mayorías absolutas: falta de diálogo, exceso de soberbia y el más absoluto de los desprecios por los pactos; tics que han llegado a su máximo en la tramitación parlamentaria de estos proyectos, cuyos vetos estamos discutiendo en este momento. En este sentido, pienso que la segunda intervención del señor ministro de Hacienda confirma plenamente lo que estoy manifestando; creo que su intervención ha estado llena de soberbia y prepotencia, y que ha adjudicado a su Gobierno y a su partido, con exclusividad, toda una serie de hechos y de resultados que se han producido desde 1995 hasta el día de hoy, lo que es profundamente injusto, desde nuestro punto de vista, porque además ha olvidado que vivimos en un Estado autonómico, con distintos niveles de responsabilidad política y administrativa, adjudicando todos los aciertos a un único nivel de gobierno y de administración, el del gobierno central.

Creo que no puede hacer la referencia que ha hecho sobre lo que representa el que Cataluña haya alcanzado un nivel de riqueza por encima del nivel medio europeo y menos aún diciendo que las iniciativas que se produzcan a partir de este momento, en lo que hace referencia al sis-

tema de financiación autonómico, pueden estar hechas desde una óptica de insolidaridad. Desde el punto de vista de mi grupo parlamentario, Cataluña ha hecho un esfuerzo de solidaridad fiscal, durante los últimos veinte años, sin parangón en Europa y, por tanto, es profundamente injusto hablar —o siquiera insinuar— que pueda haber falta de solidaridad fiscal en cualquier planteamiento procedente de Cataluña. Todo aquello que se plantee desde Cataluña mantendrá ese criterio de solidaridad, pero también querrá mantener un criterio de justicia, que no ha imperado en las manifestaciones que ha vertido usted desde esta tribuna.

Ya les adelanto que son justamente estos los motivos que nos han llevado a adoptar la decisión de apoyar los vetos que se han presentado en esta Cámara porque, señorías, el portavoz de mi grupo parlamentario en el Congreso de los Diputados, Xavier Trías, ya concluía su intervención en el debate a la totalidad de los presupuestos diciendo que este año el voto de Convergència i Unió a las cuentas públicas no iba a ser, de entrada, afirmativo, como había sido en años anteriores; y lo razonó en base a unas discrepancias relativas al fondo del proyecto, así como por la forma en que se había tramitado el mismo.

Para poder votar afirmativamente un proyecto, mi grupo parlamentario considera que debe haber una negociación previa en la que se sienten las bases para un acuerdo. Pues bien, este año dicha negociación no ha existido. Sí ha habido contactos, pero no hemos recibido ninguna respuesta al documento de bases que remitimos, lo que interpretamos como su negativa a negociar. Es posible que ustedes consideren que negociar es adherirse a un contrato, sin más, pero para nosotros esto es un cheque en blanco que no estamos dispuestos a conceder.

Por ello, nuestro portavoz continuaba diciendo que el sentido del voto definitivo de Convergència i Unió a estos proyectos iba a depender de la suerte que tuvieran las enmiendas que presentó nuestro grupo; enmiendas que, prioritariamente, se destinaban a dar un giro más social a los presupuestos, a garantizar el futuro de la inversión pública en infraestructuras en Cataluña y a compensar a las comunidades autónomas por los mayores gastos que deben asumir a causa de las decisiones tomadas por su Gobierno. Pues bien, ¿cuál es el resultado de estas enmiendas? Sinceramente, muy negativo. Pasaron el trámite del Congreso sin ni siquiera hacer referencia a ellas. Decían: esperemos a ver después de las elecciones al «Parlament» de Cataluña. Pasaron las elecciones, pasó la ponencia y la comisión del Senado, ¿y qué? ¿Cuál es el resultado? Nada, no se ha movido nada, nada se ha avanzado; al contrario. Por ello si la respuesta a este planteamiento es negativa, no podemos apoyar estos presupuestos.

Pero, señorías, es que no sólo no podemos apoyarlos sino que debemos rechazarlos con rotundidad, porque durante la tramitación en el Senado ustedes han roto de manera unilateral un pacto muy importante: el pacto sobre la Ley del Plan Hidrológico. El Gobierno y el grupo parlamentario que lo apoya han aprovechado el último trámite de la última ley que se tramita en esta legislatura para modificar a hurtadillas, con toda la premeditación y nocturnidad, la disposición adicional décima de la Ley del Plan Hi-

drológico para recuperar una competencia, que en su momento ustedes y nosotros pactamos que estaría en manos del Consorcio para la Protección Integral del Delta del Ebro, como es la determinación del caudal ecológico mínimo. Pero señores del Grupo Parlamentario Popular, señor ministro, qué fácil es disponiendo de la mayoría absoluta modificar aquello que no le gusta a uno. Ahora bien, hacerlo sobre un aspecto de una ley pactada con nosotros, cuyo acuerdo fue un trabajo por ambas partes, y cuando ustedes eran perfectamente conscientes de lo que acordaban porque nosotros nunca escondimos nuestras pretensiones en lo relativo al caudal mínimo ecológico, no es un acto legítimo, sino que es un acto de deshonestidad de suma gravedad. (*Aplausos del señor Varela i Serra.*) No se escuden ustedes en la normativa comunitaria, por cierto, trasponiendo una directiva comunitaria a la Ley de Aguas de forma muy chapucera porque lo han tenido que hacer en tres etapas: una parte entró en el plazo de enmiendas, otra parte entró como propuesta de modificación en la ponencia, y la última por propuesta de modificación en la ponencia que se reunió justo antes de finalizar la comisión de Economía. Cuando ustedes quieren incumplen totalmente la normativa, y éste ha sido el caso de la morosidad de las operaciones comerciales, que lleva más de un año de retraso sobre la fecha máxima prevista, y cuyo proyecto han dejado morir en el Congreso de los Diputados. Por tanto, no es excusa la normativa comunitaria.

Ustedes han provocado esta modificación porque en el texto de la ley pactada no podían llevar a cabo su proyecto de plan hidrológico, pero con la diferencia de que lo previsto en la ley no era su plan, sino el plan surgido de un consenso. Pues, señorías, para nuestro grupo parlamentario éste es un acto de profunda deslealtad y desfachatez política, un acto intolerable. Alguien quizá podrá pensar en lo ilusos que hemos sido al confiar en ustedes, en su palabra; sin embargo, nuestra manera de ejercer la política se basa en el respeto a la palabra. Nosotros la cumplimos, vemos que con ustedes esto no es posible. Ustedes confunden política de Estado con política de partido; ustedes confunden mayoría absoluta con poder absoluto. (*Aplausos.*) Tomamos buena nota de ello y ya sabemos a qué atenernos en el futuro; por lo que a nosotros se refiere, ustedes sólo podrán gobernar con mayoría absoluta. Por el momento lo que no vamos a hacer es votar favorablemente estos dos proyectos de ley.

Tenemos otro ejemplo, desde nuestro punto de vista edificante, de lo que ha sido este trámite. Y hago referencia a la modificación por vía de enmiendas, siempre en una interpretación muy discutible de la jurisprudencia constitucional, pero qué casualidad, siempre en la línea de recortar las competencias autonómicas, nunca al revés, al sustraer a las comunidades autónomas las competencias sancionadoras en materia de la prestación por desempleo, jugando una vez más al gato y al ratón. En el proyecto de ley de empleo, como represalia a nuestra posición desfavorable a la misma en el Congreso, ya nos quitaron esta competencia. En el Senado, a causa de las protestas de las comunidades autónomas gobernadas por su partido, vuelven a dejar la situación como estaba al principio. Previendo

que esto no modificaba nuestro posicionamiento aprovecharon otra vez el último plazo del último proyecto y vuelven a recuperar para el Estado las competencias sancionadoras en esta materia de protección por desempleo, algo que está tan claro que es anticonstitucional, que vuelven a rectificar en la comisión de Economía por el método que tanto dominan de la enmienda fuera de plazo que modifica la enmienda anteriormente incorporada.

Y hablando una vez más sobre formas, en el trámite del Senado ustedes han presentado varias enmiendas referidas a pensiones que ya fueron presentadas por nuestro grupo parlamentario en el Congreso de los Diputados. Si estaban de acuerdo con las mismas, ¿por qué no las votaron? ¿Por qué no aceptaron estas propuestas? ¿Son tan arrogantes en el uso de su mayoría absoluta que no quieren aceptar nada de nadie?

Lo han hecho ustedes también en el caso del incremento de las pensiones mínimas, o también recientemente en la modificación de la Ley de Créditos al Consumo para evitar el tener que pagar en el caso de servicios no prestados, así como en otros. ¿Es esta la forma de entender el diálogo y la voluntad de buscar acuerdos que tanto predicán?

Señores del Partido Popular, la tramitación parlamentaria de estos presupuestos pone fin a una legislatura marcada por su creciente prepotencia, por su gran arrogancia y por el desprecio más absoluto a las opiniones de los demás. Esperamos que en la próxima legislatura ustedes no tengan la oportunidad de seguir por este mismo camino. (*Aplausos.*)

Señorías, paso ahora a desarrollar brevemente algunos aspectos del debate presupuestario más relacionados con el proyecto de ley que hoy estamos tramitando.

Lo he dicho al inicio de mi intervención: esta legislatura finaliza con unos buenos resultados económicos, fruto de una acertada política económica y de la coherencia de la misma desde el año 1993, cuando el Partido Socialista perdió la mayoría absoluta y Convergència i Unió apostó por la gobernabilidad, impulsando un golpe de timón respecto de las prioridades económicas dominantes hasta aquel momento. Esta nueva dirección fue amplificada tras las elecciones de 1996 y se ha mantenido a lo largo de la presente legislatura.

Desde la perspectiva presupuestaria, cabe calificar el balance igualmente de positivo, ya que se ha mantenido una senda de saneamiento para las finanzas públicas, se ha procedido a una nueva reforma del IRPF, así como a la supresión mayoritaria del IAE, dos reivindicaciones tradicionales de nuestro grupo parlamentario, y se ha mantenido constante el esfuerzo inversor del Estado.

Por ello, si hablamos en términos de prioridades de política económica, no van a existir grandes discrepancias entre ustedes y nosotros. Es más, algunas de las medidas que ustedes han adoptado en materia económica habían sido propuestas anteriormente por Convergència i Unió y también rechazadas por su Gobierno.

Pero no todo ha sido coincidencias. También han surgido discrepancias, las cuales, como en el caso de la liberalización de áreas comerciales, o respecto a la Ley de Estabilidad Presupuestaria, o determinadas leyes sobre empleo o Seguridad Social, han sido verdaderamente profun-

das, basadas en la diferente concepción que ustedes tienen de lo que significa un Estado autonómico. A ustedes les molesta su existencia y prefieren una descentralización administrativa. En cambio, nosotros consideramos que se debería profundizar más en la descentralización política del Estado.

En este contexto, ¿son estos presupuestos un instrumento válido para la economía española? Señorías, el adjetivo más utilizado por los expertos y medios de comunicación para definir estos presupuestos ha sido el de continuistas. Y en nuestra opinión, lo son. Y por lo que ha manifestado el señor ministro en este debate, veo que él también opina que lo son. Son unas cuentas similares a las de años anteriores, sin novedades destacables, con todos los aspectos positivos y negativos que ello comporta.

En el lado positivo, destaca el mantenimiento del equilibrio presupuestario. Éste da confianza a los agentes económicos y una creciente estabilidad de cara al futuro. Sin embargo, deberá ser otra vez la aportación de la Seguridad Social la que les permitirá cuadrar las cuentas. Y nuestro grupo cree que no es la forma óptima ni justa de actuar, pues esta capacidad de compensar un déficit sólo se ha concedido a la Administración del Estado, negándose a las administraciones de las comunidades autónomas y de las corporaciones locales. Esto es jugar con ventaja, máxime cuando éste es el primer año que la Administración general del Estado ha transferido totalmente a las comunidades autónomas políticas tan expansivas como la sanidad o la educación, políticas que conllevan un enorme gasto. Y esto es lo que hoy llamaría corresponsabilidad mal repartida.

En el lado negativo, como tampoco es ninguna novedad, cabe destacar la poca credibilidad del cuadro macroeconómico. Como ya he dicho, son unos presupuestos continuistas, pero es que seguramente que no podría haber sido de otra manera. Los presupuestos que ustedes han elaborado serán ejecutados en su mayor parte por un gobierno que aún desconocemos, tanto si ganan ustedes como si no. Ustedes, de renovar la mayoría, podrán modificar el proyecto a su medida y, si las mayorías son otras, estos presupuestos deberán adaptarse a otras prioridades.

Ante esta situación, Convergència i Unió no puede respaldar unos presupuestos que no sabe cómo se ejecutarán en los próximos meses. No consideramos responsable hacerlo y, por ello, no podemos apoyarlos.

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió considera que a estos presupuestos les falta rigor entre el equilibrio presupuestario y una política de mayor acento social. En realidad los datos nos indican que en materia de prestaciones sociales estamos lejos de la media europea, por lo que la discusión no debe centrarse en un sí o un no a las prestaciones, sino sobre cómo avanzar hacia mayores cotas de protección.

Nuestra posición contraria se basa también en la no concreción en el proyecto de presupuestos del principio de lealtad institucional recogido en la LOFCA, pues las Cortes han aprobado recientemente leyes donde los recursos para aplicarlas no parten de su Gobierno, sino de los de las comunidades autónomas...

El señor VICEPRESIDENTE (Rojo García): Senador Cambra, vaya usted terminando, por favor.

El señor CAMBRA I SÁNCHEZ: Sí, señor presidente, voy terminando.

Asimismo quisiera resaltar nuestra preocupación por las inversiones en infraestructuras en Cataluña. No nos quejamos de la cifra que aparece en estos presupuestos para el 2004, pero nos preocupan los niveles de ejecución de estas inversiones, así como el futuro, es decir, cómo se va a mantener este nivel de inversión en Cataluña, que es el que le corresponde en función de su peso específico en el conjunto del Estado, una vez finalicen proyectos tan importantes como el del AVE.

Termino como he comenzado, señorías. Por primera vez en muchos años nuestro grupo parlamentario no ha participado en la elaboración de los dos proyectos que hoy debatimos. Hemos mantenido contactos pero no hemos obtenido respuesta a nuestras inquietudes ni propuestas y, por tanto, no podemos sentirnos copartícipes de ellos. Convergència i Unió se ha caracterizado siempre por su voluntad de diálogo y consenso. En este último año, y así lo hemos denunciado en distintas ocasiones, ustedes han demostrado querer ir solos con sus actitudes y más que dudosas formas, tal y como han confirmado en el trámite de los tres últimos proyectos de ley en esta Cámara.

Lo dije antes y lo repito ahora: las suyas son formas que representan un desprecio de tal magnitud a las competencias propias de las Cámaras y de sus parlamentarios —e incluyo a los del Grupo Parlamentario Popular— que difícilmente podrán gobernar en el futuro si no es a través de una mayoría absoluta. En el futuro no vengan ustedes buscando apoyos que no se han ganado, y es más, no nos vengan hablando de sus importantes dotes de diálogo, porque quizá ni las tienen ni las utilizan.

Muchas gracias, señorías. Muchas gracias, señor presidente. (*Aplausos en los escaños de los grupos parlamentarios Socialista y Catalán en el Senado de Convergència i Unió.*)

El señor VICEPRESIDENTE (Rojo García): Gracias, senador Cambra.

Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el senador Bru.

El señor BRU PARRA: Señor presidente, señorías, señor ministro, lo que no puede ser, no puede ser, y además, es imposible. Como decía mi abuela, la cabra tira al monte y, por tanto, es imposible mantener un debate con usted en términos razonables, amables y de argumentación sin que su señoría se pierda por los pedregosos caminos de la descalificación y el insulto, por los que, por supuesto, no pensamos seguirle.

Señor ministro, ¿sabe usted qué significa embaucar? Pues embaucar significa intentar engañar prevalidándose de la inexperiencia o del candor de los engañados. Pero ése no es el caso de la mayor parte de las señorías que nos sentamos en estos escaños y, por tanto, no vamos a tragarnos el cúmulo de falsedades que usted ha vertido ante esta Cá-

mara, y le digo esto en el mejor sentido de la palabra. Señor ministro, lamento este brote de acidez, pues hace tan solo unas semanas leí una entrevista muy simpática y humana que fue publicada en el diario «El País», en la que usted afirmaba que sólo hace locuras por amor. Permítame que le corrija, señor ministro, porque usted hace locuras presupuestarias y locuras parlamentarias, como crispas indebidamente a una Cámara amable y cariñosa como ésta. (*Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.*)

Decía usted que esa crítica de la oposición era retórica, y «parole, parole, parole»... Señor ministro, yo le he hablado tranquila y ponderadamente de cómo están los tipos de interés en la Unión Monetaria, y su señoría afirma que todo se debe a su magnífica política. Pero yo le pregunto lo siguiente: ¿Entonces por qué son iguales en Francia, que tiene déficit, o en Finlandia, que tiene superávit? Le he dado todos los datos y usted se calla porque no tiene argumentos. Así pues, su afirmación sobre que los tipos de interés se deben a la magnífica política del Gobierno popular es absoluta y radicalmente falsa.

En segundo lugar, y sobre el porcentaje que dedican ustedes a investigación, desarrollo e innovación ha dicho usted que era del 1,7 por ciento. ¿De dónde saca usted esa cifra, señor ministro? Porque eso es más falso que un duro de plomo. ¿Conoce esto? (*El senador Bru Parra muestra un documento a la Cámara.*) Por ejemplo, Consejo Económico y Social. Es de octubre de 2003, y leo: En este sentido, la intensidad del gasto en I+D respecto al PIB en España es 0,96 por ciento. Usted ha dicho ante esta Cámara, en sede parlamentaria, el 1,7. O usted no sabe lo que dice o usted está faltando a la verdad, señor ministro. Aquí están las cifras. Discuta con cifras, intente razonar. Contenga su natural irascibilidad e intente razonar.

Lo que ha afirmado usted sobre el I+D es absolutamente falso. Es más (*Protestas en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.*) —sosiéguese, señorías, el ministro no necesita palmeros—, hoy se ha publicado en la prensa diaria, en «Cinco Días» —y le he hablado de la vergonzosa ejecución del Ministerio de Ciencia y Tecnología y usted se ha callado, siempre se calla—, que España pone en riesgo 333 millones de la Unión Europea para tecnología. Funcionarios de la Unión Europea han mantenido reuniones en Madrid con funcionarios de su ministerio, y con motivo de abordar el grave incumplimiento por el departamento que encabeza Juan Costa en la ejecución de los programas de información, y nos pueden aplicar la temible regla dos más dos, por la cual perderemos los fondos. Contésteme a esto y déjese de insultos. (*Aplausos.*)

Habla usted del gran esfuerzo que ha hecho el Gobierno del Partido Popular desde el año 1995. Pues bien, la OCDE no se entera de ese esfuerzo, porque con datos de indicadores principales de la OCDE resulta que en el año 1995 el esfuerzo de las administraciones públicas suponía el 0,15 del PIB y ahora es el mismo. Aquí están los datos. Se los paso al señor presidente. Por lo tanto, o sus asesores le engañan o usted no sabe lo que dice, señor ministro. El esfuerzo es idéntico, no han hecho nada. En todo caso, si hablamos de gasto total, en el cual cuenta a los empresarios,

ha subido 16 décimas en varios años. Por consiguiente, su afirmación de ese gran esfuerzo es falsa, absolutamente falsa.

Habla usted de que han bajado los impuestos. Dice que han bajado el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas mucho y han bajado los impuestos indirectos mucho. La pregunta es: si han bajado todos los impuestos, ¿por qué la OCDE se empeña en decir que la presión fiscal en España ha aumentado un 3 por ciento? Contésteme a eso. Con lo cual, su afirmación sobre la bajada fiscal sigue siendo falsa. Ha dicho usted que no hemos hablado de empleo. Falso, porque en mi intervención he hablado de empleo. Ha dicho que criticamos sin datos ni mediciones. Falso, yo le he hablado de que las cotizaciones a la Seguridad Social, la presión medida en porcentaje del PIB, ha aumentado en medio punto, mientras que la intensidad protectora, el gasto en fondos y reserva de pensiones ha disminuido en medio punto. No me contesta, es falso lo que dice.

Por tanto, se ha agarrado a un clavo ardiendo diciendo que yo realmente he dicho lo que usted ha dicho, pero evidentemente es un error conceptual o, mejor dicho, de exposición, pues yo lo que quería decirle era que si un 1,2 por ciento del crecimiento español viene de fondos europeos, un 0,8 lo crea usted con sus presupuestos, que son causa y no consecuencia del crecimiento y el empleo, y otras son trampas estadísticas; entonces, 1,2 más 0,8 más las trampas no son nada. Eso es lo que quería decir. Si he dicho lo que usted ha dicho, será un error expositivo que corrijo aquí por la presente.

Podía seguir con más cosas. ¿Cómo puede explicarse, si hay un fraude fiscal, que se incremente la recaudación? Se lo he dicho: por la inflación, porque ustedes viven de rentas de la inflación, exactamente por eso. Señor ministro, recordará usted lo que le decía. Esta mañana hemos hablado de lógica o, mejor dicho, de su falta de lógica, he empezado con Aristóteles y permítame acabar con Wittgenstein, que decía que solamente puede haber preguntas cuando hay respuestas. Yo aquí me canso de preguntarle año tras año y no hay respuesta, porque de donde no hay —también lo dice mi abuela— nunca se puede sacar. (*Risas.*) Nos vamos con la duda de saber si estos presupuestos son expansivos, restrictivos, contractivos. Usted viene aquí, suelta una intervención dirigida al tendido del ocho y se va tan contento con los aplausos, a ver si así sigue de algo cuando sea y ya está. Ésta ha sido una intervención de un ministro en fase terminal, que intenta sacar la cabeza política. (*Protestas.—Aplausos.*)

Señor Montoro, le he dicho que no pensaba seguirle en su senda de descalificaciones, simplemente estoy apuntando que cuando un ministro hace lo que hace, siempre que pase igual, en lógica ocurre lo mismo. Y cuando usted, en vez de dirigirse a convencer a la oposición, se dirige a que le aplaudan los palmeros del siete, ésa es su elección y su opción, y lo digo con todo respeto, señorías, con todo mi cariñoso respeto.

En definitiva, señor ministro, voy a concluir porque no merece la pena más; con usted es imposible la discusión. Yo le he formulado al señor ministro muchas preguntas, yo

le he rebatido todos sus argumentos, y, sin embargo, yo no tengo aquí ninguna respuesta, ni yo ni ninguno de los portavoces que me han precedido en el uso de la palabra. Yo esperaba que el señor Montoro asumiese su responsabilidad, como ministro; su responsabilidad parlamentaria, en una monarquía constitucional y parlamentaria, en una democracia representativa, y la ejerciera debidamente ante esta Cámara. Pero no lo ha hecho, y usted quiere, como siempre, ejercer el poder sin la carga de la responsabilidad. Señor Montoro, no se puede ejercer el poder sin la carga de la responsabilidad. Como dijo un premier británico, allá por los años treinta, el poder sin responsabilidad es privilegio de las cortesanas, no de los políticos en una democracia parlamentaria.

Nada más y muchas gracias. (*Aplausos.*)

El señor VICEPRESIDENTE (Rojo García): Gracias, senador Bru.

Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el senador Fernández.

El señor FERNÁNDEZ CUCURULL: Muchas gracias, señor presidente.

Señor ministro, señorías, en las distintas intervenciones que atentamente hemos venido siguiendo a lo largo de la jornada de hoy, hemos podido escuchar una serie de críticas a los presupuestos y a las medidas de acompañamiento que, a nuestro juicio, se mantienen con base en posiciones preestablecidas, al margen de la cifras, y yo diría que incluso de las evidencias, por lo que más parecen prejuicios que juicios propiamente dichos.

No voy a volver a insistir en nuestra valoración positiva de las leyes que hoy debatimos, y que creo haber justificado en el turno en contra de los vetos con la suficiente solidez; sin embargo, hay algunos aspectos que han salido a colación en las intervenciones de los distintos portavoces que merecen un comentario por parte de mi grupo.

En primer lugar, me gustaría hacer mención al asunto de la productividad y la competitividad. Señorías, mantener a estas alturas que la prioridad en nuestro país era la competitividad es sencillamente, y en términos amables, como decía antes el señor ministro, un contumaz error. En un país que en 1995 se encaminaba con paso firme hacia los cuatro millones de parados, es ciertamente sorprendente mantener dicha posición, porque en esa situación no podía haber más prioridad que el empleo, como reiteradamente ha sostenido el Partido Popular y como ha demostrado en la práctica, salvo que sus señorías defiendan que había que seguir destruyendo empleo para mejorar la productividad, cosa que no creo que hagan; o que había que mantener dos clases de ciudadanos: por un lado, los que tenían un empleo estable, y por otro, los que no tenían posibilidad de acceder a un puesto de trabajo y estaban condenados al paro de por vida.

Hoy en día hemos conseguido mejorar la igualdad de oportunidades, como prueba el hecho de que, a pesar del incremento de la población activa y del fenómeno de la inmigración, las cifras del desempleo hayan seguido disminuyendo. Es justamente ahora cuando podemos plantear-

nos seriamente la posibilidad de alcanzar una sociedad del pleno empleo, y la mejora de la productividad comenzará a ser un objetivo alcanzable.

En cuanto a la competitividad, no puede decirse que las prioridades del presupuesto estén en contradicción con la misma, ya que se produce un gran esfuerzo en materia de formación profesional, inversión en infraestructuras y también en innovación, desarrollo e investigación. Los recursos destinados a infraestructuras se han multiplicado por cinco desde 1996, y los destinados a investigación, desarrollo e innovación por cuatro.

En España la inversión había dependido mucho del ciclo económico, hoy podemos decir que la inversión, en coordinación con la política económica, es anticíclica. Estamos consiguiendo mantener el esfuerzo inversor gracias a la eliminación del déficit, porque a mayor déficit, menor inversión. Estamos gastando bien todo lo que tenemos y no gastando más de lo que tenemos.

Otro asunto que ha salido a colación es el de la vivienda. A tal efecto hay que decir que la situación ha cambiado radicalmente desde 1995. Hemos pasado de una situación de mucho paro, de altos tipos de interés, de impuestos elevados y de una construcción de 200.000 viviendas al año, a otra en que el paro se ha reducido a la mitad, los tipos de interés han bajado radicalmente, favoreciendo el endeudamiento de las familias, los impuestos han bajado, aumentando la renta disponible, y se construyen 450.000 viviendas al año. Todo ello ha tenido como consecuencia que, si bien muchas más familias que antes pueden acceder a una vivienda, el precio de las mismas se ha incrementado notablemente. El problema es ahora distinto, porque antes ni había suficientes casas ni posibilidad de comprarlas. El Gobierno no rehúye su responsabilidad en esta cuestión, pero no es menos cierto que es compartida con comunidades autónomas y ayuntamientos, que son los que tienen las principales competencias en materia de suelo y urbanismo. En cualquier caso, no parece muy sensata la descalificación genérica de un sector que aporta un 8 por ciento del producto interior bruto, un 15 por ciento si le añadimos el sector público, y que puede suponer una o dos décimas en la tasa de crecimiento anual, todo ello sin mencionar su importante aportación al empleo.

Por su parte, el presupuesto prevé un crecimiento de las ayudas directas a la vivienda del 2,6 por ciento y un incremento de los beneficios fiscales del 15,22 por ciento. En el período 1996-2004, el gasto estatal en vivienda ha sido del 0,85 por ciento del producto interior bruto frente a un 0,62 por ciento en el período 1990-1995.

Hay otra cuestión en la que me parece necesario incidir y que está relacionada con los gastos de Defensa y su relación con Ciencia y Tecnología. Las aportaciones del Ministerio de Ciencia y Tecnología a los programas de Defensa no son sino un anticipo de determinadas cantidades que Defensa devuelve en su momento. Su justificación está en el uso civil de las investigaciones militares, es decir, en incentivar la investigación, desarrollo e innovación. Es un modelo que compartimos con todos los países avanzados de nuestro entorno y que beneficia enormemente el desarrollo de la investigación en las empresas. Además, en

este punto, quizá por la polémica generada en su momento, es conveniente hacer una breve aclaración sobre las aportaciones de la Gerencia de Infraestructuras del Ministerio de Defensa.

Como sus señorías saben, en España no se puede vender un inmueble para destinarlo a gasto corriente sino permutarlo por otro activo, por eso se emplean para financiar infraestructuras y, en este caso, programas de armamento, ya que estos últimos, por su larga duración, se equiparan a inmuebles. La prioridad en ofrecer los inmuebles es a la Administración territorial en la que se encuentre, y sólo si no hay convenio se subasta. Se han firmado ya 118 convenios que han generado 12.600 viviendas, de las que casi el 66 por ciento han sido de protección oficial. Los resultados económicos son aproximadamente de 600 millones de euros, mientras que los programas de armamento que financian ascienden a 20.000 millones de euros, es decir que suponen aproximadamente el 3 por ciento del total.

En relación con las políticas sociales, tengo que manifestar, sin ánimo de molestar a nadie, que a lo largo de estos años y también en el presupuesto para 2004, mientras otros predicaban el progresismo, el Partido Popular se ha dedicado a practicarlos. Hemos pasado de un 44 por ciento de gasto social en 1995 a más del 50 por ciento en 2004. Mientras en la Unión Europea el incremento del gasto social por habitante ha sido del 7 por ciento, en España ha sido del 8,2 por ciento. Puede que, como ha dicho algún portavoz, analizado en términos de porcentaje sobre el producto interior bruto, haya habido una disminución, pero ello se debe a dos factores fácilmente comprensibles: por una parte, España ha crecido mucho en estos años y, por otra, han disminuido sensiblemente las prestaciones a parados, porque hoy hay muchos menos parados que en 1995. Por tanto, el parámetro más razonable para medir el esfuerzo es el gasto por habitante.

Otra de las críticas reiteradas ha sido la relativa a la introducción de enmiendas en el Senado a las leyes de presupuestos y de medidas. Ya he comentado la opinión de mi grupo en mi primera intervención, pero me gustaría añadir ahora que tras las opiniones de los distintos grupos se detecta una coherencia con una estrategia que se viene observando desde el principio de esta legislatura, que no es otra que la de buscar un cierto desprestigio de esta Cámara para justificar una posición apriorística de necesidad de reforma de la misma mediante una reforma constitucional. En este sentido es necesario decir una vez más que si todas las posiciones son respetables, no lo debe ser menos la del partido que en este momento representa la opinión mayoritaria de los españoles y que, en una cuestión tan importante, no puede reformarse sin consenso lo que con tanto mérito se logró mediante él.

Por otra parte, si lo que se critica es el uso de la capacidad legislativa plena que esta Cámara tiene, ¿qué es lo que se pretende? ¿Despojarla de ella? En ese camino difícilmente nos vamos a encontrar, porque los senadores del Grupo Parlamentario Popular nos sentimos orgullosos de introducir en las leyes cuantas modificaciones estimemos oportunas en uso de nuestra plena capacidad como legisladores y, como no puede ser de otra manera, con sometimiento

a la Constitución y al Reglamento de la Cámara. *(El señor presidente ocupa la Presidencia.)*

No quiero finalizar mi intervención sin agradecer al Grupo Parlamentario de Coalición Canaria su apoyo a lo largo de la tramitación de estos presupuestos y su posición de rechazo de los vetos que ahora debatimos. La colaboración entre ambos grupos ha dado como resultado una mejora de los textos que sin duda beneficiará a todos los ciudadanos en general y a los del archipiélago canario en particular.

Me gustaría, sinceramente, poder decir lo mismo del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió. Junto a Coalición Canaria, su aportación a lo largo de estos años ha sido importante para la consecución de los logros en la economía española que hemos tenido ocasión de relacionar a lo largo de la jornada de hoy. En este último debate de presupuestos de la legislatura han decidido cambiar de opinión, no apoyar los mismos y votar de manera favorable los vetos. Su portavoz ha justificado esta actitud, básicamente, por una de las enmiendas que modifican el Plan Hidrológico Nacional, en concordancia con la transposición de la Directiva comunitaria en materia de aguas, que ha considerado una deslealtad. Sin embargo, modestamente les invitaría a reflexionar sobre ello, porque su postura contra los presupuestos del año 2004 fue anterior a esta enmienda y, por tanto, no puede haber influido en la misma. Fue una postura adoptada de antemano por razones políticas ajenas a los presupuestos, y probablemente tenía que ver con las elecciones autonómicas en su comunidad. Creo, sinceramente, que esto no les coloca en situación de dar lecciones de ética, como su portavoz ha pretendido hacer hoy, porque la falta de la palabra dada ha sido suya.

Sin acritud les digo que, a la hora de calificar las conductas como desleales, reflexionen sobre este hecho que acabo de apuntar.

En cualquier caso, no quisiera ser injusto, y por eso vuelvo a hacer un reconocimiento de su aportación a lo largo de estos años, que sinceramente nos hubiera gustado que se extendiera a este último tramo, sin perjuicio de lo cual les manifiesto nuestro deseo de que ustedes vuelvan al camino del entendimiento, del que no somos nosotros los que nos hemos apartado.

Y voy terminando ya, señor presidente.

La política económica llevada a cabo por los gobiernos del Partido Popular, que se expresa a través de los presupuestos, ha sido capaz de transformar la sociedad española. Hemos superado entre todos los desafíos del pasado y nos enfrentamos ahora a los del futuro. Hemos pasado de la desolación por el paro a atisbar en el horizonte de esta década la sociedad del pleno empleo; de la escasez de viviendas a la preocupación por su precio; del debate sobre la existencia de infraestructuras al debate sobre su calidad, y todo eso es política económica.

En los próximos años nos enfrentaremos a nuevos retos, como el envejecimiento de la población, el modelo social, la defensa, la educación, la investigación, desarrollo e innovación tecnológica o el medio ambiente.

En este último debate de presupuestos de esta legislatura, el Grupo Parlamentario Popular en el Senado desea

felicitar expresamente a los gobiernos que, liderados por el presidente Aznar y con los equipos económicos dirigidos por el vicepresidente Rato y el ministro Montoro, han hecho posible estos cambios.

Estamos convencidos de que el Partido Popular tiene la capacidad de seguir transformando la sociedad española, y que a partir de marzo de 2004, si los españoles nos vuelven a otorgar su confianza, el presidente Rajoy continuará defendiendo nuestro proyecto, que seguirá teniendo como señas de identidad el diálogo y la moderación, y hará que España, que hace años dejó atrás la resignación, siga mirando al futuro con optimismo y con ambición.

Nada más y muchas gracias, señor presidente. (*Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.—El señor ministro de Hacienda, Montoro Romero, pide la palabra.*)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el señor ministro de Hacienda.

El señor MINISTRO DE HACIENDA (Montoro Romero): Gracias, señor presidente.

Subo a la tribuna como corresponde al cierre de un debate importante, como es el de presupuestos, para referirme a una situación que es normal, y es que los argumentos de los grupos parlamentarios que apoyan al Gobierno en un trámite como éste no coinciden con los de los grupos que se posicionan en contra, es decir, de aquellos que defienden las propuestas de veto. Eso es normal. La diferencia de este debate, en relación con otra calidad de debates, es que éste se sustenta en cifras, en hechos cuantificables, y esas cifras están todas ahí, todas las que yo he manejado durante el día de hoy son fácilmente contrastables y se refieren a realidades que, ciertamente, han vivido una transformación profunda en la sociedad española. (*Rumores.*)

El señor PRESIDENTE: Silencio, señorías.

El señor MINISTRO DE HACIENDA (Montoro Romero): Lejos de haber manipulación, las cifras contrastan claramente la importancia de la creación de empleo, la fortaleza de la convergencia de renta con Europa, el avance que se ha dado a la hora de promover una sociedad de igualdad de oportunidades, con la incorporación de la mujer y, en suma, las cifras que se concretan en los programas en cuanto a la cuantificación de las políticas del Gobierno en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2004.

Sin embargo, el portavoz de Izquierda Unida, señor Cabrero, ha venido a negar la evidencia de esas cifras. Pues bien, señoría, los contratos indefinidos están regulados por el Inem; por tanto, los datos que yo he ofrecido respecto de ese tipo de contratos son los que son, y no tienen nada que ver con el hecho de que exista una excesiva temporalidad, que, aunque ha descendido, sin duda sigue siendo demasiado alta en nuestro país. En cualquier caso, la contratación indefinida ha primado desde 1996 hasta ahora, a raíz de las reformas laborales que se han producido en nuestro país. Igualmente, el acceso de la mujer a los puestos de trabajo es una gran novedad. Como antes he dicho, hoy en día

en España de cada tres mujeres que trabaja una lo hace desde 1995 hacia acá. Ésa es la constatación de que ésta es una sociedad de igualdad de oportunidades, la que promovemos con nuestras políticas.

Por otro lado, me extraña que Izquierda Unida, a la hora de calificar el plan Ibarretxe, coincida con el Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos en que es un tópico. Señorías, por lo visto tópico supone pretender un plan secesionista de España a comienzos del siglo XXI. Eso es lo que les parece a los portavoces del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos y de Izquierda Unida. Algo no debe funcionar bien en su conciencia, cuando esta tarde han tenido que decir que estamos ante un tópico. Pero no estamos ante ningún tópico. Estamos ante un serio asalto a la Constitución Española; estamos ante un intento soberanista que no tiene cabida en la Constitución ni en la democracia española ni tiene ningún sentido a comienzos del siglo XXI. (*Rumores.*) Estamos ante un planteamiento, señor Albistur, propio del siglo XIX, propio de una sociedad que hemos superado con creces los ciudadanos españoles del siglo XXI, que queremos mirar con confianza y seguridad hacia nuestro futuro, trabajando juntos, porque así es como hemos conseguido estos avances económicos.

Tenía razón su señoría. El mundo no empezó en 1995. Lo que entonces comenzó fue el Gobierno del Partido Popular. Y lo empezamos con una tasa de paro del 23 por ciento, con cuatro millones de parados, con un país parado en términos de convergencia real con la Unión Europea. (*Varios señores senadores, desde los escaños del Grupo Parlamentario Socialista: ¡Hala, hala!—Fuertes aplausos desde los escaños del Grupo Parlamentario Popular.—Un señor senador, desde los escaños del Grupo Parlamentario Socialista: ¡Torero, torero!*)

El señor PRESIDENTE: ¡Silencio, señorías!
Puede proseguir, señor ministro.

El señor MINISTRO DE HACIENDA (Montoro Romero): Gracias, señor presidente.

Pero hoy estamos viviendo un proceso de convergencia real y avanzando intensamente para conseguir de forma rápida una sociedad de pleno empleo. Y eso, senadora Aroz, no es manipular datos, sino ofrecer realidades que sin duda el Partido Socialista no está en condiciones de ofrecer. (*El señor Bru Parra, de pie, y de espaldas a la tribuna, mantiene una conversación con otros senadores.*) Miren qué interés tiene el senador Bru en el seguimiento del debate. (*Risas.—Un señor senador pronuncia palabras que no se perciben.—Rumores.*)

El señor PRESIDENTE: ¡Silencio, señorías!
Continúe, señor ministro.

El señor MINISTRO DE HACIENDA (Montoro Romero): Gracias, señor presidente.

Da igual; se lo diré a través del «Diario de Sesiones». El señor Bru en su segunda intervención ha cometido dos nuevos fallos conceptuales. Y ya van tres. (*Protestas desde los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.*) Señoría

rías, confundir la percepción de fondos europeos por parte de España, como hace el Grupo Socialista, con el crecimiento económico es de primero de Bachillerato. (*Fuertes rumores.*) Decir que España crece el 1,2 por ciento, porque está recibiendo fondos de la Unión Europea por equivalencia del 1 por ciento, es confundir los ingresos, las rentas de un país, con el producto interior bruto. No hay manera de mantener un debate económico serio y riguroso con portavoces que cometen error tras error. (*Protestas desde los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.—Fuertes y prolongados aplausos desde los escaños del Grupo Parlamentario Popular.—Varios señores senadores, desde los escaños del Grupo Parlamentario Popular: ¡Bravo, bravo!*)

El señor PRESIDENTE: Silencio, señorías. Señor Díaz, silencio, por favor.

El señor MINISTRO DE HACIENDA (Montoro Romero): El segundo error ha sido identificar el aumento de la presión fiscal con un 3 por ciento. No es así. (*Un señor senador del Grupo Parlamentario Socialista: ¡Dimisión! ¡Dimisión!*) La presión fiscal en España ha aumentado 2 puntos porcentuales del producto interior bruto debido al ensanchamiento de las bases imponibles, ya que hay 4.300.000 personas más trabajando, pagando sus impuestos, y 350.000 empresas en España que no existían en el año 1995; debido, en definitiva, a que como resultado de las reformas fiscales se ha producido un incremento importante de las bases imponibles. (*Varios señores senadores: ¡No se oye, no se oye!*)

Con relación a la formación de un nuevo gobierno en Cataluña, por descontado que es perfectamente legítima...

El señor PRESIDENTE: Señorías, es imposible oír la intervención del señor ministro. Ruego silencio en la Cámara.

El señor MINISTRO DE HACIENDA (Montoro Romero): Como he dicho, señorías, la formación de un nuevo gobierno en Cataluña es perfectamente legítima a partir del resultado electoral; lo que ocurre es que existe un acuerdo para la formación de ese gobierno, y en su difusión pública se plantean unos términos preocupantes acerca de los planteamientos que se pretenden sobre la financiación autonómica en nuestro país, razón por la cual he advertido que el Gobierno de España no va a aceptar ningún cambio que merme la solidaridad interterritorial ni a aceptar ningún cambio que suponga subir los impuestos a los españoles para allegar más recursos a ninguna comunidad autónoma, señorías. (*Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.*) Esto es lo que he explicado esta mañana y lo que he repetido esta tarde.

Señor Cambra, no tiene por qué aducir en esta Cámara la representación de Cataluña. Usted pertenece a un grupo parlamentario que, por supuesto, se presenta en Cataluña. Yo también me presento en Cataluña a las elecciones en España, represento al Gobierno de España y, por tanto, a los intereses de Cataluña, y como tal, tengo que defender

una financiación autonómica equilibrada entre todos los territorios de España, incluida Cataluña.

El senador Cambra ha hecho una descripción de la postura política de su grupo que, en absoluto, debe justificarla en la falta de diálogo del Gobierno ni en ninguna postura de arrogancia política. Y mucho menos tiene razón su señoría a la hora de explicar su voto a favor de vetos precisamente cuando, como su señoría conoce, los presupuestos del año 2004 son continuistas, igual que los que usted ha apoyado en los pasados años. Si ha cambiado el sentido de su voto es porque ha cambiado la posición política de su grupo, no porque haya cambiado la posición dialogante del Gobierno ni el contenido de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2004. Se ha modificado la estrategia política de su grupo, en mi opinión erróneamente, y espero que la consideración que haga su grupo parlamentario y su dirección política lleve adelante una nueva etapa de entendimiento con el Partido Popular y con sus gobiernos.

Señoría, efectivamente ha sido con la colaboración de Convergència i Unió —y no tengo reparo alguno en reconocerlo— con la que hemos elaborado y aplicado una política que ha sido muy fructífera para España y para Cataluña. Lo que no se puede hacer, llegado el momento de elecciones autonómicas, es cambiar el discurso, porque eso significa una incoherencia, y en términos de electorado las incoherencias se pagan, señorías, y se pagan caras. (*Fuertes rumores.*) Hemos hecho un trabajo, señorías, pero ese trabajo no estaba hecho en el año 1995, y es que en ese año la tasa de paro de Cataluña era del 20 por ciento, señoría (*Rumores.*), y la convergencia de Cataluña con la Unión Europea estaba detenida. (*Fuertes rumores.*)

Por tanto, ése es un trabajo que hemos hecho desde 1995 hasta hoy, y ese trabajo, en definitiva, es el que ha permitido a Cataluña ser hoy una región desarrollada de la Unión Europea y es el que ha permitido también avanzar decididamente (*Fuertes rumores.*) hacia la sociedad del pleno empleo a toda la comunidad autónoma, excepción hecha de la provincia de Barcelona, porque hoy buena parte de Cataluña, como sabe su señoría, está en práctico pleno empleo, especialmente masculino.

Ése es el avance que hemos hecho juntos, razón por la que ahora no hay motivo para que su señoría busque un despegue. Su señoría, en mi opinión, ha ido mucho más allá de lo que la prudencia política le aconsejaba que fuera en una tarde como la de hoy, señoría. No tenía su señoría por qué hacer afirmaciones que no se correspondían con el debate exacto de presupuestos, en tanto que sí deberían ustedes anunciar unos grados de entendimiento para el futuro, que sin duda serían muy fructíferos para Cataluña y para el conjunto de España. (*Aplausos.—Protestas.*)

Acabo, señor presidente, agradeciendo al Grupo de Coalición Canaria su apoyo, que es expresión del diálogo político que practica este Gobierno. (*Fuertes rumores.*) Este Gobierno ha llegado a acuerdos con Coalición Canaria para apoyar expresamente los Presupuestos Generales del Estado.

Acabo agradeciendo también la intervención y el apoyo del Grupo Parlamentario Popular. (*Fuertes rumores.—Risas.*) Ciertamente su apoyo al Gobierno, su capacidad de

colaborar, de completar la acción del Gobierno es muy importante a la hora de garantizar que los programas políticos efectivamente sean los programas de los gobiernos para que, en definitiva, cumplamos leal y fielmente con los compromisos que adquirimos con los ciudadanos cuando nos presentamos a las elecciones. *(Fuertes rumores.)*

Con estos presupuestos cerramos prácticamente las dos primeras legislaturas de los gobiernos del Partido Popular, y las cerramos con hechos. *(Fuertes rumores.)* Ahí están esos dos grandes hechos. Decía el señor Bru: Poder exige responsabilidad. Efectivamente, señor Bru, ésa ha sido nuestra responsabilidad, el promover la creación en España de 4.300.000 empleos...

El señor PRESIDENTE: Señor Fernández Zanca, por favor, le ruego guarde silencio.

Continúe, señor ministro. *(Fuertes rumores.)*

El señor MINISTRO DE HACIENDA (Montoro Romero): Muchas gracias, señor presidente.

Decía, señorías, que ésa ha sido nuestra responsabilidad en las acciones de los gobiernos del Partido Popular: promover, sentar las condiciones para que la sociedad española asumiera el protagonismo de la creación de 4.300.000 empleos; sentar las condiciones para que España progresara en términos de convergencia de renta per cápita europea hasta situarse en umbrales en que nunca antes se había situado *(Fuertes rumores.)*; presentarnos con unos presupuestos saneados, con unos presupuestos equilibrados como nunca antes lo habían estado en la democracia española; promover la reducción de impuestos a que nos habíamos comprometido en otros programas electorales; promover políticas sociales intensas que garantizan las prestaciones sociales y el saneamiento de la Seguridad Social *(Fuertes rumores.)*; incrementar la inversión pública y fortalecer los servicios del Estado. Ésa es nuestra responsabilidad.

Con esas realidades nos presentamos ante la Cámara y, en definitiva, ésas son las razones por las que pedimos a la Cámara que apoye unos Presupuestos Generales del Estado para el año 2004 que traerán más crecimiento económico, más prosperidad, más empleo, más igualdad de oportunidades para los españoles en este comienzo del siglo XXI.

Es el cierre de legislatura y ése es el compromiso que tenemos por delante, el de seguir progresando. No nos conformamos con lo hecho. Sabemos que hemos avanzado, pero que tenemos todavía por delante desafíos considerables. Tenemos el desafío de conseguir para España una sociedad de pleno empleo, una sociedad de igualdad de oportunidades y una sociedad que merezca sentarse en el primer nivel del concierto de las naciones europeas del mundo desarrollado de nuestro tiempo. Ése es nuestro desafío y ésa también es nuestra gran oportunidad para el siglo XXI.

Muchas gracias, señor presidente.

(Grandes aplausos y fuertes protestas.)

El señor PRESIDENTE: Señorías, llamamos a votación. *(Pausa.)*

Sometemos a votación las propuestas de veto. Para su aprobación se exige la mayoría absoluta.

En primer lugar, votamos la propuesta de veto del Grupo Parlamentario Socialista al proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para el 2004.

Se inicia la votación. *(Pausa.)*

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 194; a favor, 71; en contra, 123.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Propuesta de veto del Grupo Parlamentario Socialista al proyecto de ley de medidas fiscales, administrativas y del orden social.

Se inicia la votación. *(Pausa.)*

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 195; a favor, 72; en contra, 123.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Propuesta de veto del Grupo Parlamentario de Entesa Catalana de Progrés al proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para 2004.

Se inicia la votación. *(Pausa.)*

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 212; a favor, 80; en contra, 132.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Propuesta de veto del Grupo Parlamentario de Entesa Catalana de Progrés al proyecto de ley de medidas fiscales, administrativas y del orden social.

Se inicia la votación. *(Pausa.)*

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 212; a favor, 80; en contra, 132.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Abran las puertas, por favor.

Sometemos a votación la propuesta de veto del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos al proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2004.

Se inicia la votación. *(Pausa.)*

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 213; a favor, 80; en contra, 133.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Propuesta de veto del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos al proyecto de ley de medidas fiscales, administrativas y del orden social.

Se inicia la votación. *(Pausa.)*

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 213; a favor, 80; en contra, 133.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Propuesta de veto del Grupo Parlamentario Mixto, originariamente presentada por el senador señor Quintana

González al proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2004.

Se inicia la votación. *(Pausa.)*

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 213; a favor, 80; en contra, 133.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Propuesta de veto del Grupo Parlamentario Mixto originariamente presentada por el senador señor Quintana González al proyecto de ley de medidas fiscales, administrativas y del orden social.

Se inicia la votación. *(Pausa.)*

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 213; a favor, 80; en contra, 133.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Propuesta de veto del Grupo Parlamentario Mixto originariamente presentada por el senador señor Mur Bernad al proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2004.

Se inicia la votación. *(Pausa.)*

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 212; a favor, 80; en contra, 132.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Propuesta de veto del Grupo Parlamentario Mixto originariamente presentada por el senador señor Mur Bernad al proyecto de ley de medidas fiscales, administrativas y del orden social.

Se inicia la votación. *(Pausa.)*

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 212; a favor, 79; en contra, 132; abstenciones, una.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Propuesta de veto de don José Cabrero Palomares y don Eduardo Cuenca Cañizares, del Grupo Parlamentario Mixto, al proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2004.

Se inicia la votación. *(Pausa.)*

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 213; a favor, 80; en contra, 133.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Propuesta de veto del Grupo Parlamentario Mixto originariamente presentada por los senadores señores Cabrero Palomares y Cuenca Cañizares al proyecto de ley de medidas fiscales, administrativas y del orden social.

Se inicia la votación. *(Pausa.)*

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 213; a favor, 80; en contra, 133.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

— DE LA COMISIÓN DE PRESUPUESTOS EN RELACIÓN CON EL PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA EL AÑO 2004 (S. 621/000172) (C. 121/000173) (Continuación).

El señor PRESIDENTE: Comenzamos, señorías, el debate de los votos particulares.

En primer lugar, debatiremos los presentados al Título I, artículos 1 a 12, Anexos I y II.

Para la defensa de las enmiendas 1 a 8 de los senadores señores Cabrero Palomares y Cuenca Cañizares, tiene la palabra el senador Cabrero.

El señor CABRERO PALOMARES: Muchas gracias, señor presidente.

Intervengo para defender las enmiendas números 1 a 8, correspondientes a este Título.

Al artículo 2.3 hemos presentado una enmienda de modificación al objeto de permitir un aumento de las cantidades previstas por valor de 5.409.000 miles de euros, procedentes de una revisión que planteamos de parte de los beneficios fiscales que se prevén con la modificación de la Ley del IRPF y del Impuesto de Sociedades que plantea el Gobierno en el marco de una reforma tributaria, de un aumento procedente de la lucha contra el fraude fiscal y del impacto positivo sobre la recaudación de una mayor inversión pública y de la aplicación de fondos comunitarios. Ello permitiría una mayor disponibilidad financiera y económica en los ingresos para hacer frente a políticas de gasto social y de inversión en infraestructuras públicas.

También hemos presentado una enmienda que pretende con un nuevo artículo 2 bis un mayor nivel de transparencia en los Presupuestos Generales del Estado.

Asimismo, queremos la adición en el artículo 3 del párrafo siguiente: «Desde este ejercicio presupuestario, y en adelante, el Gobierno adjuntará a los documentos presupuestarios una Memoria de beneficios sociales que comprenda el conjunto de bonificaciones, exenciones o subvenciones que afecten a los ingresos de las distintas Administraciones Públicas y, en particular, de la Seguridad Social.

Queremos también añadir un nuevo artículo 3 bis porque dada la dispersión que existe en cuanto a los organismos públicos, es preciso definir cómo se computará la inversión nueva del Estado para que el Fondo de Cooperación Internacional no pierda contenido real.

La enmienda de modificación al artículo 10 propone la supresión del apartado Uno.9, porque creemos que la construcción, terrenos e instalaciones propiedad del Ministerio de Defensa se han realizado con los créditos procedentes de diversos Presupuestos Generales del Estado. Es lógico que los ingresos que proceden de desinversión de activos reviertan al Estado sin carácter finalista, al propio Ministerio de Defensa.

Finalmente, la enmienda número 8 pretende la supresión del artículo 11.Dos.1.e) porque el presupuesto de Defensa tiene que ser más transparente. Debemos conocer cuánto nos gastamos en cañones y en otras inversiones. Creemos que se está disfrazando todo lo relacionado con la inversión en investigación más desarrollo y desde nuestro

Título I
(arts. 1
a 12)

Anexos
I y II

punto de vista no se debe facilitar ni financiar desde el presupuesto público este tipo de operaciones corrientes del Ministerio de Defensa, que está enmascarando políticas y esfuerzo inversor que deberían ir realmente a investigación y desarrollo para el impulso a la actividad económica y a los sectores productivos.

Nada más y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

La enmienda número 583, también del Grupo Parlamentario Mixto, ha sido originariamente presentada por el señor Quintana González.

El señor CABRERO PALOMARES: Señor presidente, la damos por defendida.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, tiene la palabra el senador Aleu, para la defensa de las enmiendas números 1288, 1289, 1357, 1358 y 1359.

El señor ALEU I JORNET: Gracias, señor presidente.

Mi grupo parlamentario ha presentado cinco enmiendas a este conjunto de artículos. La mayor parte de ellas son clásicas; así, la número 1288, pretende dar mayor transparencia a los presupuestos, obligando al Gobierno a presentar el gasto efectivo realizado en cada uno de los proyectos durante el primer semestre del año 2005. Es decir, se propone que el Gobierno tenga la obligación de explicar, presupuesto por presupuesto y proyecto por proyecto, el nivel de ejecución de cada uno de ellos. Esperamos que puedan atender esta petición porque tenemos el convencimiento de que, gracias a la informática, sólo es necesario apretar un botón, y trasladar los resultados a las Cortes.

Nuestra segunda enmienda propone una transferencia a la Seguridad Social para atender la financiación de los complementos a mínimos que el Gobierno pone por encima de lo que las pensiones contributivas deberían cobrar en función de lo que han cotizado. Es una manera de cumplir el Pacto de Toledo pero, sobre todo, hay que tener en cuenta que si no se acepta esta enmienda quedarán en entredicho muchas de las afirmaciones que acaba de hacer el señor ministro porque se pagan decisiones políticas con fondos de la Seguridad Social.

Las otras tres enmiendas proponen otorgar la categoría de ampliables a determinados créditos.

Nada más y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Aleu.

Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, tiene la palabra el senador Cambra, para la defensa de las enmiendas números 1662 a 1665.

El señor CAMBRA I SÁNCHEZ: Muchas gracias, señor presidente.

Las cuatro enmiendas que hemos presentado al Anexo II tienen como fin el de otorgar el carácter de ampliable a una serie de créditos que, desde nuestro punto de vista, son prioritarios.

En primer lugar, la enmienda número 1662, tiene por objeto dotar de carácter ampliable el crédito destinado a dotar el Fondo Interterritorial para la Integración de los Inmigrantes, que es un aspecto prioritario para mi grupo parlamentario.

El objetivo de la enmienda número 1663 es dotar con nuevos créditos ampliables a la sanidad de la producción agraria y a las acciones de control y lucha contra las EET y medidas colaterales, porque pensamos que estas dos actuaciones son necesarias.

La enmienda número 1664 pretende dotar de carácter ampliable el crédito a la Autoridad Metropolitana del Transporte, para la financiación del transporte regular de viajeros en el año 2004, según el contrato-programa que está previsto suscribir con el Estado.

Por último, la enmienda número 1665, tiene por objeto dar carácter de ampliable al crédito destinado al fondo para el cumplimiento del principio de lealtad institucional. Hace referencia a uno de los aspectos que he comentado en el debate de totalidad, en cuanto a la necesidad de que se cumpla la lealtad institucional prevista en el sistema de financiación autonómica actual, facilitando a las comunidades autónomas los recursos necesarios para hacer frente a aquellas nuevas situaciones que se producen a partir de iniciativas y proyectos de ley que se aprueban en las Cortes Generales y que afectan directamente a los recursos financieros de las mismas. Un claro ejemplo de lo que estoy diciendo es el de la Ley de la Calidad de la Educación, etcétera.

Nada más y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador Mesa, para la defensa de las enmiendas números 837, 900, 901 y 902.

El señor MESA CIRIZA: Muchas gracias, señor presidente.

Efectivamente, intervengo en nombre del Grupo Parlamentario Socialista para la defensa de las enmiendas al Título I y al Anexo II, de créditos ampliables, de este proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para 2004.

En primer lugar, me referiré a las tres enmiendas que afectan al Anexo II, que pretenden otorgar la categoría de ampliables a una serie de créditos en coherencia con nuestro posicionamiento respecto a determinadas secciones.

En concreto, con la enmienda número 900 pretendemos otorgar la categoría de ampliable al crédito 19.101.322A, destinado a transferencias a familias e instituciones sin fines de lucro.

Asimismo, la enmienda número 901 tiene esa intención para considerar ampliables los créditos de distintos ministerios y organismos públicos integrados en el informe, previsto en la disposición adicional primera de la Ley 23/1998, de 7 de julio, destinados a financiar programas de Ayuda Oficial al Desarrollo hasta alcanzar conjuntamente 2.438 millones de euros. Nuestro objetivo es recuperar la intención del 0,7 por ciento en la política de cooperación y de alguna manera hacer posible, mediante un crecimiento paulatino de la Ayuda Oficial al Desarrollo, el cumpli-

miento de los compromisos de Monterrey, superando el 0,31 por ciento del PIB en el año 2004.

Por último, con la enmienda número 902 solicitamos la categoría de crédito ampliable para el fondo de compensación económica creado en la Sección 21, Fondo Prestige, para compensar por el lucro cesante a los afectados del «Prestige» en el año 2004, debido a la disminución de capturas a consecuencia del impacto sobre los ecosistemas marinos de la marea negra del «Prestige», y al tiempo poder financiar con él las vedas y los paros biológicos necesarios por esta circunstancia. Este fondo y su articulación deberá negociarse con la Unión Europea para que ésta pueda implicarse en su financiación.

Por último, la enmienda número 837 pretende la modificación del apartado dos del artículo 12, del Título I, con el fin de que quede redactado de la siguiente manera: «El Estado aporta al sistema de la Seguridad Social 1.202.000,00 miles de euros para atender a la financiación de los complementos para mínimos de las pensiones de dicho sistema.» Una vez más, por otro año consecutivo, recordamos al Grupo Parlamentario Popular que el sistema con el que se trata de financiar los mínimos de las pensiones no es el adecuado, y coincidimos con lo dicho por otros portavoces. Por tanto, nuestro grupo parlamentario propone una vez más avanzar en la correcta financiación de las prestaciones no contributivas, descargando a las cotizaciones sociales de las obligaciones indebidas, y posibilitar la separación de fuentes exige aumentar la partida de referencia, al menos, para dar cumplimiento a los propios compromisos que adquiere el Gobierno, como es, por ejemplo, el Acuerdo para la mejora y desarrollo de la protección social, de abril de 2001.

Nada más y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Para el turno en contra tiene la palabra el senador señor Azuara.

El señor AZUARA CAROD: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, las enmiendas números 1 y 2 de los señores Cabrero Palomares y Cuenca Cañizares, así como las números 3, 4, 5, 6, 7 y 8, las han dado ya por defendidas. Por nuestra parte, no podemos aceptarlas y las vamos a rechazar.

A continuación, paso a referirme a las enmiendas números 1288 y 1289, del Grupo Entesa Catalana de Progrés.

La primera de ellas no puede aceptarse por cuanto que los distintos departamentos de los ministerios, así como de los organismos públicos de la Seguridad Social, de las sociedades mercantiles, estatales, etcétera, publican el grado de ejecución de todos y cada uno de los proyectos de inversión correspondientes al Capítulo VI.

La siguiente enmienda tampoco puede aceptarse, por las mismas razones que posteriormente expondremos al Grupo Parlamentario Socialista. Esta enmienda pretende incrementar la aportación del Estado a la Seguridad Social para financiar los complementos para mínimos de las pensiones en el año 2004 hasta la cifra de 1.200.000 miles de euros en vez de la cantidad de 906.350 miles de euros que aparece consignada en el proyecto de Presupuestos Gene-

rales. Sin embargo, la aportación del Estado para financiar los complementos de pensiones mínimas del sistema de Seguridad Social se cifran en 906.350 miles de euros en el texto del proyecto —incrementándose en la enmienda en 300.000 miles de euros—, importe con el que se avanza en la cobertura por parte del Estado de los complementos para mínimos en el plazo previsto hasta que finalmente el coste total del mencionado complemento quede financiado íntegramente por el Estado, razón por la que, como he dicho, esta enmienda también ha sido rechazada.

La enmienda número 837, del Grupo Parlamentario Socialista, es sobre el mismo concepto y, por tanto, la rechazamos por las mismas razones.

Las enmiendas números 900, 901 y 902, del Grupo Parlamentario Socialista, se refieren al Anexo II.

La enmienda 900 propone la siguiente redacción: «El crédito 19.101.322A, transferencias a familias e instituciones sin fines de lucro.» Ya fue propuesta para los presupuestos del año 2003 y, por tanto, seguimos manifestando que no se considera necesaria su aprobación por estar ya contemplado este objeto.

La enmienda número 901 es de adición de un nuevo apartado tercero, sobre créditos aplicables a todas las secciones y programas, pero no la podemos aceptar por cuanto que se considera suficientemente precisa la normativa reflejada en el proyecto de presupuestos.

En cuanto a la número 902, también del Grupo Parlamentario Socialista, no puede aceptarse esta enmienda de adición de un nuevo apartado duodécimo, relacionado con el fondo de compensación económica creado en la Sección 21, para compensar por el lucro cesante a los afectados del «Prestige» en el año 2004, pues, como ya conocen sus señorías, se está trabajando de forma incesante para que ninguno de los afectados se sienta perjudicado, como así lo atestiguan las constantes indemnizaciones y apoyos que se están recibiendo desde las distintas instituciones nacionales y europeas.

Las enmiendas números 1357, 1358 y 1359, del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, reciben la misma respuesta que acabo de dar al Grupo Parlamentario Socialista por coincidir en su planteamiento.

En lo que respecta al Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, la enmienda número 1662, de modificación relativa a los créditos destinados a dotar el Fondo Interterritorial para la integración de los inmigrantes, no podemos aceptarla en coherencia con lo que este mismo grupo propone mediante la enmienda número 1645, de adicionar una disposición adicional nueva.

En cuanto a la enmienda número 1663, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió también, no podemos aceptar esta adición a la relación de créditos ampliables del Anexo II de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2004 sobre dos nuevos créditos debido a que los dos conceptos que se proponen como ampliables son los destinados a las ayudas a la sanidad de la producción agraria y a la lucha contra las encefalopatías espongiiformes transmisibles y medidas colaterales respectivamente. Las dotaciones que figuran para estos dos conceptos presupuestarios en el proyecto de presupuestos del Estado para el año 2004 obedecen a las necesidades pre-

vistas por el Departamento de Agricultura y, en caso de que hubiese rebrotes imprevistos de las enfermedades de plantas o animales, se pondrían en marcha los mecanismos de reordenación de créditos o imprevistos que ya contempla la propia ley de presupuestos del ejercicio, así como el texto refundido de la Ley General Presupuestaria.

Por lo que respecta a la enmienda número 1664, también del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, que considera como ampliable el crédito 32.02.513D.450, la misma no puede ser aceptada, pues propone incluir dentro del Anexo II, Segundo. Diez una nueva letra f) como ampliable del citado crédito a la Autoridad Metropolitana del Transporte para la financiación del transporte regular de viajeros en el año 2004 y regularización de ejercicios anteriores, según contrato-programa a suscribir con el Estado.

En el proyecto de Presupuestos Generales del Estado de 2004 no existe la aplicación presupuestaria que indica la enmienda, motivo por el que su aplicación correcta sería la 32.513B.02.450. Actualmente se está procediendo a la negociación del escenario de aportaciones de la Administración General del Estado para el período 2002-2005, que no contempla un escenario de aportaciones tan abultado como el planteado por las autoridades territoriales de Cataluña. No obstante, y teniendo en cuenta las aportaciones efectuadas en el período 2002 y 2003, y las incluidas en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado de 2004, se produce un incremento notable de las aportaciones en la Administración General del Estado respecto del período 1998-2001. Además de ello, conviene tener en cuenta que el escenario presupuestario del contrato-programa es fijo para la Administración General del Estado, salvo la cantidad adicional resultante del proceso de actualización anual que está previsto en la consignación presupuestaria de 2004.

Finalmente, y por lo que se refiere a la enmienda número 1665, también del mismo grupo, con la que se pretende la adición de una nueva letra g) que dote de un crédito para el cumplimiento del principio de lealtad institucional. El artículo 2.2 e) de la Ley Orgánica 8/1980, de Financiación de las Comunidades Autónomas, establece que en el caso de que el Estado legislador adopte medidas de interés general que eventualmente puedan hacer recaer sobre las comunidades autónomas obligaciones de gasto no previstas, éstas deberán ser objeto de valoración anual en cuanto a su impacto por el Consejo de Política Fiscal y Financiera.

Actualmente hay constituido un grupo de trabajo en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera cuya tarea es elaborar una metodología de aplicación de este principio de lealtad institucional. Hasta el momento en que esta metodología no haya sido aprobada por dicho consejo no procede que se dote ningún crédito relativo al principio de lealtad institucional. Por todo ello tampoco podemos aceptar esta enmienda.

Nada más, y muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.
Procede ahora comenzar con el turno de portavoces.
¿Grupo Parlamentario Mixto? (*Pausa.*)
¿Grupo Parlamentario de Coalición Canaria? (*Pausa.*)

¿Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos? (*Pausa.*)

¿Grupo Parlamentario de Entesa Catalana de Progrés? (*Pausa.*)

En su nombre tiene la palabra el senador Aleu.

El señor ALEU I JORNET: Gracias, señor presidente.

El senador Azuara ha respondido a la enmienda número 1288 diciendo que todos los ministerios y organismos publican el grado de cumplimiento. Señoría, estoy dispuesto a retirar la enmienda antes de la votación si usted es capaz de presentarme la publicación de la ejecución presupuestaria a nivel de proyecto de uno de los ejercicios 2001 ó 2002. Como digo, si usted es capaz de presentar ese documento que según usted se publica, retiraré la enmienda, pero de lo contrario pensaré que su señoría está faltando a la verdad. Tenemos de tiempo hasta mañana a la una del mediodía, señoría.

En cuanto al resto, debo decir que continuo sin entender los razonamientos que ha dado usted respecto de la enmienda número 1289. Nosotros decimos que nos parece bien que el Estado complemente las pensiones más bajas a mínimos, pero que ello deba continuar financiándose con dinero de la Seguridad Social es algo que no se aviene al Pacto de Toledo. Así pues, no hablen ustedes de déficit cero, porque de la suma del déficit que esconden las empresas públicas, del déficit que no se contabiliza de Televisión Española y de éste, resulta un déficit importante como para hablar de déficit cero. Esto, señoría, es algo que ustedes deberían aceptar, porque es lo que firmaron, y ahora entendemos que muy a disgusto, en el Pacto de Toledo.

Nada más, y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

¿Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió? (*Pausa.*)

¿Grupo Parlamentario Socialista? (*Pausa.*)

En su nombre tiene la palabra su portavoz.

El señor MESA CIRIZA: Gracias, señor presidente.

Comenzando por lo último que se ha dicho, y por enlazar con la intervención del portavoz del Grupo Parlamentario de Entesa Catalana de Progrés, debo manifestar que todos los años nos dicen ustedes lo mismo, señoría, pero lo hacen sólo de cara a este debate, porque la realidad es tozuda y se la hemos venido demostrando. Ustedes no pueden seguir haciendo lo mismo, es decir, tratando de engañar a todo el mundo con eso del déficit cero a la vez que intentan financiar una serie de cosas con el superávit de la Seguridad Social. Y eso es así, señoría.

En cuanto al resto de enmiendas, sigo sin enterarme de cuál es el motivo por el que las rechazan. Pero terminaré diciendo que este título, que de alguna manera es el que fija el cómputo de ingresos y gastos y el que debe marcar las líneas maestras de lo que es un presupuesto, deja bien claro cuál es la línea de los Presupuestos Generales del Estado que presenta el Partido Popular y no iba a ser menos en este año, en el último, en el 2004, porque no son creíbles, no tienen ninguna credibilidad desde el principio hasta el final. No tienen ninguna credibilidad en cuanto a su estructura y su plantea-

miento y no quiero ahondar en el debate que se ha producido a lo largo de varias horas en relación con los vetos. Pero hay un ejemplo, por no reiterar todo lo que se ha manifestado en el debate de los vetos, de todas las cosas que son increíbles, que no se las cree nadie, y es no aceptar la enmienda de Entesa Catalana de Progrés sobre una cosa tan fácil que es presentar el grado de ejecución. Si se niegan a presentar el grado de ejecución es porque no quieren que se haga palpable lo que todos sabemos, y es que no se ejecuta la mayoría de los presupuestos. Pueden estar algunos años engañando con las cifras y los porcentajes, pero ¿saben ustedes cuándo se dan cuenta los ciudadanos de que es totalmente ficticio y engañoso lo que se pone en el papel? Cuando se ponen obras concretas y luego van a donde están teóricamente ubicadas y no están hechas. Ésa es la mejor demostración. Por eso no se quiere dar el paso de informar a esta Cámara y de comprobar cuáles son los grados de ejecución.

Por tanto, si las líneas fundamentales en las que se basa el presupuesto no son creíbles, ni el crecimiento económico, ni la inflación y año tras año se siguen ustedes equivocando y si luego además lo que se pone no se cumple, imagínense cuál es la sensación que podemos tener de este presupuesto. Por consiguiente, anuncio nuestro voto en contra.

Nada más y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador señor Azuara.

El señor AZUARA CAROD: Gracias, señor presidente.

Me sorprende lo que año tras año me dice el senador Aleu, de que los distintos departamentos no informan del grado de ejecución presupuestaria. Creo que el señor Aleu no se ha preocupado ni ha tenido interés en acercarse a esos departamentos sobre los que quiere saber el grado de ejecución, que le darían la información porque es totalmente pública y transparente. Por lo tanto, no entiendo por qué esa obcecación de que tenemos que venir aquí para darle el grado de ejecución de los presupuestos de los distintos departamentos. El señor Aleu se tiene que preocupar un poco de que le informen del grado de ejecución de los distintos departamentos.

El portavoz socialista habla del superávit de la Seguridad Social. Ya le he contestado en ejercicios anteriores al portavoz de esta sección de la Seguridad Social. Anteriormente siempre ha habido un déficit en la Seguridad Social, un déficit muy importante que no quiero recordar otra vez, y ahora parece que su preocupación es que los superávits que existen en la Seguridad Social se lleven a otros sitios. Están totalmente equivocados, porque ahí les pueden informar perfectamente y yo creo que se recibe, sobre todo los que estamos en presupuestos, la ejecución de los presupuestos de la Seguridad Social, ingresos y pagos. Todo está muy claro y muy transparente. No comprendo por qué machacan siempre sobre lo mismo.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Debate sobre el Título II, Capítulo I, artículos 13 y 14, anexos IV, V y VI.

Hay un voto particular, presentado por el Grupo Parlamentario Mixto, originariamente presentado por el señor Quintana González, enmienda número 584.

Tiene la palabra el señor Cabrero.

El señor CABRERO PALOMARES: Señor presidente, damos por defendida la enmienda número 584, del señor Quintana.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Para turno en contra, tiene la palabra la senadora Novillo, por el Grupo Parlamentario Popular.

La señora NOVILLO MORENO: Muchas gracias, señor presidente.

La enmienda número 584 trata de suprimir las cantidades a percibir de los alumnos, en concepto de financiación complementaria a la proveniente de los fondos públicos que asignen al régimen de conciertos singulares, suscritos por enseñanzas de niveles no obligatorias, en concepto exclusivo de enseñanza reglada.

Por otra parte, si se suprime la función del apartado seis, que contempla el coste de otros gastos, obligaría a la administración a compensar la parte que no pagan los alumnos, lo que supondría un incremento de gasto. En cualquier caso, la Ley Orgánica de Calidad de la Educación, LOCE, respeta la libre elección del centro escolar por parte de las familias. Así lo señala la ley en su artículo 3, apartado d), en el que se determina que los padres en relación con la educación de sus hijos tienen el derecho a la libre elección del centro, por lo que las administraciones educativas deberán responder a tales demandas.

En consecuencia, se desestima esta enmienda porque no hay razón para limitar las ayudas a los centros privados, sin conocer suficientemente la circunstancia de cada uno de ellos que justifican las ayudas solicitadas y recibidas.

Nada más y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Turno de portavoces. ¿Grupo Parlamentario Mixto? (Pausa.)

¿Grupo de Coalición Canaria? (Pausa.)

¿Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos? (Pausa.)

¿Grupo Entesa Catalana de Progrés? (Pausa.)

¿Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió? (Pausa.)

¿Grupo Parlamentario Socialista? (Pausa.)

¿Grupo Parlamentario Popular? (Pausa.) Gracias.

Debate del Título II, Capítulo II, artículos 15 a 17, que no es objeto de enmiendas.

Título II, Capítulo III, artículo 18, que no ha sido objeto de enmiendas.

Título III, artículos 19 a 35, Anexos X y XI, al que se han presentado las enmiendas números 9 a 24, firmadas por los senadores Cabrero Palomares y Cuenca Cañizares.

Tiene la palabra el senador Cabrero.

Título II
Capítulo II
(arts.
15 a 17)

Título II
Capítulo III
(art. 18)

Título III
(arts.
19 a 35)
Anexos
X y XI

Título II
Capítulo I
(arts.
13 y 14)

nexos IV, V
y VI

El señor CABRERO PALOMARES: Muchas gracias, señor presidente.

Voy a defender las enmiendas números 9 a 24, del Título III. Hay un bloque de enmiendas con las que pretendemos que los incrementos salariales se ajusten a la inflación real, cuando se refieren a los trabajadores de la Administración General del Estado. También pretendemos introducir otros aspectos que, de alguna manera, corrijan la desviación de la inflación en relación al incremento salarial, y que esos ingresos tengan una garantía de futuro. Además, queremos que se produzca la necesaria participación sindical y el control parlamentario en todo lo que afecta a la relación de puestos de trabajo, y que así se evite el abuso y la discrecionalidad.

Asimismo, presentamos una enmienda de modificación al artículo 20, y con ella pretendemos que en el ejercicio 2004 el número de plazas de nuevo ingreso en el sector público, contenido en el artículo 19 de este proyecto de ley, sea igual al cien por cien de la tasa de reposición efectiva. Anualmente el Gobierno ha de elaborar un informe sobre el uso que se haya hecho del apartado anterior del artículo 19, es decir sobre los contratos de asistencia técnica y de servicio, durante el ejercicio 2004, y que ese informe se remita al Congreso de los Diputados para su debate y para la resolución que proceda, según lo que establezcan las propias Cámaras.

Tenemos una enmienda de sustitución del artículo 23 referida a las retribuciones de los altos cargos, en el sentido de que se elimine la percepción que está prevista en ese artículo, porque lo consideramos incompatible con el propio carácter de alto cargo. Al final, ese complemento de productividad se convierte en un concepto fijo, independiente de la productividad, y queremos evitar esa situación que puede obedecer más a la relación entre mandos y trabajadores. Para evitar todo eso, presentamos también varias enmiendas que van en el mismo sentido.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Enmiendas números 585 a 629, también del Grupo Parlamentario Mixto, originariamente presentadas por el señor Quintana González.

Tiene la palabra el señor Cabrero.

El señor CABRERO PALOMARES: Gracias, señor presidente.

Las doy por defendidas.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Cabrero.

Enmiendas números 1290 a 1297, presentadas por el Grupo Parlamentario de la Entesa Catalana de Progrés. Para su defensa, tiene la palabra el señor Aleu.

El señor ALEU I JORNET: Gracias, señor presidente.

Se trata de un conjunto de enmiendas que pretenden garantizar un incremento salarial más próximo al IPC que ha existido y que pueda destinarse un 0,5 por ciento a planes de pensiones, así como algunas modificaciones referidas a

las percepciones que deben recibir los funcionarios del Estado. Pero hay tres que también hacen referencia a la información de determinados sueldos de las Cámaras, al Congreso, al Senado, y una a los sindicatos.

Creo que no entienden bien el concepto de información. Este senador ha preguntado sistemáticamente por los proyectos a que ha hecho referencia el senador Azuara, y ha recibido respuestas, y ha tenido que repreguntar porque le engañan. Lo que pido es una información, y ustedes están en que debe haber opacidad. Ésa es su política. Es la única conclusión a la que puedo llegar.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Aleu.

Enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, números 1622 a 1628. Para su defensa, tiene la palabra el senador Cambra.

El señor CAMBRA I SÁNCHEZ: Muchas gracias, señor presidente.

Nuestro grupo mantiene un total de siete enmiendas a este título, de las cuales las seis primeras se refieren a los gastos de personal y, por tanto, con ellas estamos enmendando tanto el artículo 19 como el artículo 20. Pretendemos eliminar las restricciones a la capacidad de autogobierno, de autoorganización que tanto las comunidades autónomas como las corporaciones locales tienen a partir de los textos tal y como están hoy redactados.

En concreto, con la enmienda 1622 lo que queremos es eliminar el carácter básico del establecimiento de topes a los incrementos retributivos del personal al servicio de las administraciones públicas, por lo tanto hago referencia tanto a las comunidades autónomas como a las corporaciones locales. Lo que pretendemos es que estas administraciones públicas, que no son Administración General del Estado, tengan la capacidad de autoorganizarse y las competencias necesarias para decidir en estas materias.

En cuanto a la enmienda 1623, queremos eliminar la extensión al resto de administraciones públicas de las condiciones específicas de la nueva medida aplicada para el personal de las administraciones públicas de financiación de aportaciones a planes de pensiones de empleo, tanto lo que hace referencia al límite de aportaciones como a contingencias que se deben cubrir, etcétera. El argumento es el mismo que he aplicado para la enmienda anterior.

En cuanto a la enmienda 1624, el objetivo es eliminar el establecimiento de las condiciones específicas de la nueva medida aplicada para el personal de las administraciones públicas de financiación de aportaciones a planes de pensiones de empleo en lo que hace referencia al límite de aportaciones, contingencias, etcétera, al considerar que no es materia de una ley de presupuestos y que se está negando toda virtualidad al principio constitucional de la negociación colectiva.

Con la última enmienda al artículo 19, que es la 1625, queremos eliminar el carácter básico del establecimiento de topes a los incrementos retributivos del personal al servicio de las administraciones públicas, al igual que hemos comentado respecto a la enmienda 1622.

Al artículo 20 presentamos dos enmiendas, concretamente las números 1626 y 1627. Con la enmienda número 1626 pretendemos garantizar la competencia autoorganizativa de las comunidades autónomas y las corporaciones locales en la fijación del número de plazas ofertadas de empleo público, mientras que la enmienda número 1627 trata de garantizar la competencia autoorganizativa de las corporaciones locales en la fijación del número de plazas ofertadas de empleo público.

En cuanto a la última enmienda que me queda por defender, la número 1628, tiene un carácter más técnico. Pretendemos mejorar la redacción para clarificar que la masa salarial para financiar planes de pensiones o contratos de seguro colectivo para el personal laboral del sector público estatal pueda incluir otras coberturas además de la contingencia de jubilación, que es la única que se contempla en estos momentos, tal y como se refleja en el artículo 22, apartado uno.

Nada más y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Cambra.

Por parte del Grupo Parlamentario Socialista, para la defensa de las enmiendas números 838 a 845, tiene la palabra el senador Arjona.

El señor ARJONA SANTANA: Gracias, señor presidente.

De nuevo este año los Presupuestos Generales del Estado, referidos a los gastos de personal, confirman una pérdida de poder adquisitivo para el conjunto de los empleados públicos. Casi un punto perderán este año, que unido a los de años anteriores hacen que el personal funcionario y laboral público sean quienes hayan soportado sobre sus espaldas las políticas de déficit cero del Partido Popular.

Las severas limitaciones en la oferta de empleo público que hasta el año 2002 fijaba la tasa de reposición de efectivos en un 25 por ciento siguen incidiendo en los presupuestos de 2004, y la falta de recursos humanos está obligando a las administraciones a realizar ingentes gastos en la contratación de servicios externos a través de empresas privadas y a la contratación de personal temporal para trabajos de carácter permanente, lo que finalmente supone un despilfarro económico y, a nuestro juicio, una fuente de ineficacia administrativa.

El incremento de la temporalidad alcanza hoy, en el conjunto de las administraciones públicas, tasas superiores al 20 por ciento. La desmotivación de los empleados públicos, la mala retribución, una administración envejecida, con altas cifras de temporalidad y de interinidad, son las políticas de personal que los gobiernos del Partido Popular vienen haciendo año tras año.

Este proyecto de presupuestos incorpora los acuerdos con los sindicatos, lo que mi grupo llevaba defendiendo desde hace varios años.

Desde el año pasado los acuerdos se vienen plasmando vía pagas extraordinarias y planes de fondos de pensiones.

El acuerdo con los sindicatos para el período 2003-2004 nos parece un avance, pero creemos que no es suficiente, y de nuevo se ha quedado viejo antes de aplicarlo,

porque la inflación de este año ya va a estar más cerca del 3 por ciento que del 2 por ciento de subida salarial que se contempla, y la que se fija para el año 2004, de un hipotético 2 por ciento, será difícil de cumplir y de crear.

Tampoco se cumplen los acuerdos referidos a la temporalidad en el empleo público. Igualmente, la tasa de reposición que plantean los presupuestos de este año son insuficientes y no da lugar a una reposición real de efectivos.

Como en años anteriores, la información sobre las retribuciones y emolumentos de presidentes y altos cargos de empresas públicas sigue siendo oscura y poco transparente, así como la gratificación por productividad en muchos sectores de la administración, y no debe ser así, que año tras año la opacidad siga siendo constante en las retribuciones del sector público. Así, se da la paradoja de que, a través de una productividad no conocida, se puede dar el caso de que un secretario de Estado o un subsecretario gane más que el ministro o que el mismo presidente del Gobierno.

Esta política retributiva carece de criterios objetivos y da pie a favoritismos, y por eso hemos presentado una serie de enmiendas al respecto.

El Grupo Parlamentario Socialista quiere que se dé publicidad a las gratificaciones de los altos cargos, y queremos información sobre las retribuciones de los presidentes de las empresas públicas.

Con nuestra enmienda número 838, de modificación, al artículo 19, apartados dos y tres, pretendemos que las comunidades autónomas y los gobiernos locales decidan que si tienen que subir el 0,5 por ciento adicional al 2 por ciento, lo hagan en el concepto que quieran, y no que obligatoriamente sea en fondos o planes de pensiones.

Nuestra enmienda número 839, al artículo 20 apartado tres, es de adición, porque creemos que es necesario incrementar las plantillas de inspectores de Trabajo y Seguridad Social de los grupos A y B para que, en el plazo de cinco años, dupliquen las actuales y cumplan las funciones que tienen encomendadas, fundamentalmente en el ámbito de riesgos laborales y vigilancia y control de relaciones laborales.

Al artículo 23, apartados uno y cuatro.1, presentamos la enmienda número 840, relativa a las retribuciones de los altos cargos del Gobierno, de sus órganos consultivos y de la Administración general del Estado, por no quedar dichas retribuciones suficientemente justificadas.

Por otro lado, al artículo 23, apartado tres, presentamos la enmienda número 841, referente al mismo concepto en el apartado correspondiente al complemento de productividad. En nuestra opinión, al tratarse ésta de una retribución variable deberá guardar una proporción razonable respecto del resto de los conceptos retributivos y en ningún caso podrá suponer más de un 30 por ciento de las retribuciones básicas.

La enmienda número 842, al artículo 23, apartado seis, de adición, propone el conocimiento por parte de las Cortes Generales de las retribuciones que perciben los presidentes y directores generales de los entes del sector público estatal cuando aquéllas no estén concretamente determinadas en el Título III de esta ley.

La enmienda número 843, también de adición, pretende profundizar en la publicidad y transparencia de la gestión pública.

La número 844 se refiere a los funcionarios interinos y a la percepción de trienios por parte de éstos.

Por último, la enmienda número 845, al artículo 35, propone que se informe al Parlamento y a las organizaciones sindicales de las contrataciones hechas por la Administración general del Estado con cargo a créditos para inversiones.

En definitiva, estas enmiendas, junto con las que presentamos a la ley de medidas, tratan de responder a las necesidades de la Administración pública española y de sus empleados públicos. Señorías, hacen falta salarios dignos y transparentes, plantillas ajustadas a la realidad, y es necesario garantizar el mantenimiento del poder adquisitivo de los empleados públicos. Consideramos que una buena Administración pública debe ser garante de eficacia y de la prestación de servicios a los ciudadanos, servicios que éstos pagan con sus impuestos y que deben revertir en sanidad, educación o en servicios sociales o públicos; de otra forma, y como viene sucediendo en los últimos años, la Administración pública no prestará los servicios que debe proporcionar a la ciudadanía.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Para turno en contra, tiene la palabra el senador Barquero.

El señor BARQUERO VÁZQUEZ: Muchas gracias, señor presidente. *(El señor vicepresidenta, Caneda Morales, ocupa la Presidencia.)*

Si sus señorías me lo permiten, y para que el debate no sea tan pesado, voy a contestar por temas en lugar de hacerlo enmienda por enmienda, pudiendo así concentrar más la temática.

Existe una reivindicación de incremento salarial con la que, en alguna medida, y si no le he entendido mal, el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista cae en una pequeña contradicción. Porque, en primer lugar, emplea el latiguillo de siempre: que los salarios de los funcionarios pierden poder adquisitivo. Pues bien, no es eso precisamente lo que reconocen las organizaciones sindicales, y no sólo por lo que respecta a estos presupuestos, sino también respecto de presupuestos anteriores. Pérdidas anuales de poder adquisitivo de cuatro puntos, y más, se produjeron con gobiernos de otras épocas, pero en estos momentos eso no sucede; y ya digo que eso está reconocido por las organizaciones sindicales. Pero, por otra parte, dice su señoría que en este punto se cumplen los acuerdos sindicales. Por tanto, si ligamos esas dos afirmaciones tendríamos que concluir que las organizaciones sindicales no se preocupan del poder adquisitivo de los funcionarios, lo que sería un auténtico disparate.

Por lo que respecta al año próximo, 2004, aparte de un crecimiento salarial del 2 por ciento, sabe su señoría que el acuerdo Administración-sindicatos para el período 2003-2004 prevé un plan de pensiones de la modalidad de em-

pleo y aportación definida, cuya cuantía concreta debe aprobar el Estado. Y lo que digo lo hago extensivo al portavoz de Convergència i Unió, quien de alguna forma ha pedido que haya cierta laxitud en ese porcentaje del 0,5 por ciento, mientras que nosotros consideramos que constitucionalmente le corresponde fijarlo a la Administración del Estado.

Así pues, repito, dicho acuerdo prevé un plan de pensiones de la modalidad de empleo y aportación definida, cuya cuantía concreta debe decidir el Estado. Su aplicación en las comunidades autónomas, en lo que a la cuestión competencial se refiere, no ofrece la posibilidad de establecer planes de pensiones para los funcionarios, sino la necesidad de fijar un límite máximo a esas aportaciones, dado el carácter de salario diferido que éstas tienen y su fin concreto, complementario de las pensiones de jubilación. Por tanto, no se pueden destinar a otra finalidad. Hablamos de un 0,5 por ciento que, más el 2, es un 2,5 por ciento. Si a ello añadimos que las pagas extraordinarias aumentan en el 40 por ciento de una mensualidad del complemento de destino, ello implica un 0,7 por ciento; por tanto, en este momento estamos en un 3,2 por ciento.

La inflación prevista para el próximo año es del 2 por ciento. Me parece absolutamente lícito que el Gobierno luche a este respecto. ¿Vamos a admitir que será el 2,7 ó el 2,8 por ciento, porque lo haya sido el año pasado o el anterior? Es un objetivo lícito que el Gobierno luche porque la inflación no supere el 2 por ciento. Otra cosa es que lo consiga o no. A lo mejor no será el 2, sino el 2,3, el 2,5 ó el 2,7 por ciento. Pero, insisto, considero un objetivo muy claramente definido alcanzar un crecimiento de una media del 2 por ciento del pib y una inflación que no supere el 2 por ciento. Y sobre esas previsiones se monta un presupuesto, en primer lugar sobre unos ingresos consolidados y, en segundo, sobre unas previsiones que el Gobierno debe hacer como conclusión de su política económica.

Hay otra cuestión que plantean varios grupos parlamentarios con relación a la opacidad y el control parlamentario. Y en este punto voy a ser muy estricto. Lo único que puedo decir es que el Parlamento, Congreso y Senado, dispone de los instrumentos necesarios para que todos los parlamentarios puedan obtener toda la información que deseen, salvo cuestiones de secreto parlamentario, para lo cual existe una comisión especial, o de fondos reservados, para lo que igualmente hay una comisión de seguimiento y una comisión especial. No puedo admitir otra cosa, señoría. Si usted no está satisfecho con una contestación, insista en ello. Cuando estuve en la oposición tuve que insistir hasta tres veces, es cierto que no más de tres, y en una ocasión pedí amparo al Presidente Pons. Estas enmiendas solicitan que el Gobierno informe de oficio, y es que el Parlamento tiene todos los instrumentos a su alcance para controlar al Gobierno.

Hay un tercer grupo de enmiendas que se refieren a la ampliación del sector público; en los presupuestos anteriores a esta legislatura la tasa de reposición se situaba solamente en el 25 por ciento de las plazas amortizadas. Ahora, el Gobierno las aumenta un cien por cien con referencia a los dos últimos años; incluso hay una enmienda concreta

del Grupo Parlamentario Socialista que solicita que no se restrinja en cuanto a los inspectores de trabajo, tanto del grupo A como del grupo B. Pero, ni en este presupuesto ni en ninguno de los anteriores, la tasa de reposición ha sido finalista sino de cómputo global. Si alguna comunidad autónoma desea incidir en este tema, háganlo. Proponga la comunidad autónoma al Gobierno que aumente ese número de plazas. Pero, insisto, la tasa de reposición no es finalista en ningún caso.

Al portavoz de Convergència i Unió, aunque no me atienda, por cortesía parlamentaria, he de decirle que no tenemos la misma interpretación de los artículos 149.1.13 y 156 de la Constitución. Creemos que en unos presupuestos el capítulo I, Personal, es importantísimo en su cuantía económica; las pensiones constituyen un tema de solidaridad nacional y no puede ser que en una comunidad autónoma se paguen pensiones o salarios más altos porque sea más rica y pueda pagarlos. En este sentido, el Gobierno del Partido Popular no va a ceder nunca. En temas básicos y de solidaridad interregional no vamos a ceder y el Gobierno va a marcar los topes máximos siempre, dentro de los cuales tendrán que actuar y jugar todas las comunidades autónomas.

Senador Cabrero, en cuanto a los altos cargos quiero dejarle clara una cuestión. Participación sindical, sin duda, y usted sabe que ésta se da en las CRPT, en las relaciones de puestos de trabajo que, evidentemente, se confeccionan con participación sindical. Ahora bien, aunque usted pretenda que haya una relación de puestos de trabajo de altos cargos, de secretarios de Estado, etcétera, debo decirle que no la hay porque eso se hace de otra forma. Se hace a través de reales decretos donde se fijan tanto el cargo como sus funciones. Eso está así por la ley del Gobierno. (*Rumores.*) Otra cosa distinta es que en la atribución, distribución o redistribución funcional de determinados puestos de trabajo tengan que intervenir los sindicatos puesto que ésa es una cuestión organizativa en la que tiene competencia exclusiva la Administración. Entiendo que eso segundo es lo que usted pide, pero eso es lo que desde un punto de vista organizativo y competencial no puede ser. Pero en el redactado de las relaciones de puestos de trabajo, naturalmente que intervienen las organizaciones sindicales.

Sentiría haber dejado alguna cuestión sin contestar, pero creo que desde un punto de vista temático he respondido a las cuestiones principales que ustedes me han planteado. Por todo ello, mi grupo parlamentario rechaza las correspondientes enmiendas.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor VICEPRESIDENTE (Caneda Morales): Muchas gracias, senador Barquero.

¿Desea hacer uso de la palabra el Grupo Parlamentario Mixto en turno de portavoces? (*Pausa.*)

¿Coalición Canaria? (*Pausa.*)

¿Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos? (*Pausa.*)

Por el Grupo de la Entesa Catalana de Progrés tiene la palabra el senador Aleu.

El señor ALEU I JORNET: Muchas gracias, señor presidente.

Sí, el gran debate de la opacidad.

Es cierto que el Reglamento nos ampara para hacerle preguntas al Gobierno. Y una interpretación de la legislación anterior obliga a poner en el orden del día de la primera comisión que se celebre las preguntas no contestadas en plazo como preguntas orales que tiene que venir a contestar el Gobierno. Este senador lo ha hecho, y ha comparecido un secretario de Estado que le ha dicho: En estos momentos no tengo esta información. Se la mandaré por escrito. Era un secretario de Estado que ya ha cesado y que ahora es consejero en una comunidad autónoma.

Pues al no recibir la información y pedir amparo, este senador formuló la misma pregunta en Pleno al ministro, y el ministro dijo: Esto no se lo voy a contestar. (*La señora Martínez García: ¡Muy bien!*)

Opacidad, oscurantismo, ocultismo, llámelo usted como quiera. Esto no es dar información. Si ustedes estuviesen por que esta Cámara pudiese pedir información, habrían apoyado la reforma del Reglamento que el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos presentó en su momento en este sentido, pero ustedes la han boicoteado. Por tanto, no me hable de claridad. Es opacidad.

El señor VICEPRESIDENTE (Caneda Morales): Muchas gracias, senador Aleu.

¿Desea hacer uso de la palabra el representante del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió? (*Denegaciones.*)

Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el senador Arjona.

El señor ARJONA SANTANA: Muchas gracias, señor presidente.

Señor Barquero, con respecto a la pérdida de poder adquisitivo de los empleados públicos, es verdad que el acuerdo sindicatos-Gobierno del año pasado ha venido a atender un poco lo que se venía demandando por parte de todos los grupos de la oposición. Es verdad que este año no es tan fuerte como ha podido serlo otros años; eso es cierto, pero sí hay una pérdida acumulada de poder adquisitivo de un 9 por ciento desde que está gobernando el Partido Popular. No hay más que sumar las subidas salariales que han tenido los funcionarios públicos y la subida de IPC que ha habido.

Con respecto a los otros acuerdos que se han firmado con los sindicatos, pensamos que no se cumplen totalmente porque la temporalidad sigue siendo muy alta. Y con respecto a la opacidad y el control parlamentario de los sueldos de los altos cargos —en lo que hacía hincapié el senador Aleu—, la verdad es que parece que nos lo estamos inventando, pero eso no es así. Y es verdad que podemos hacer preguntas, que podemos tomar una serie de iniciativas, pero no vengan a decirme que es fácil conocer las retribuciones de los presidentes de las empresas públicas de este país.

Me puede decir que están en los presupuestos, pero cuando aprobamos los presupuestos, lo que aprobamos es

lo que eran las antiguas PAE, en las que hay una valoración y una descripción de ingresos y gastos, pero en las que no hay ninguna derivación ni separata respecto de las retribuciones y las características de los presidentes y de los equipos directivos.

En fin, señor Barquero, si usted cree que nos puede ayudar a conocer el estado de las retribuciones de los presidentes y de los altos cargos de las empresas públicas o de cualquier organismo, le invito a que nos las traiga de la forma que usted quiera, a través de la fórmula que considere más oportuna, porque realmente es un hecho escandaloso que las retribuciones de docenas de altos cargos de este país y de la Administración española no se puedan conocer en los Presupuestos Generales del Estado. No sé yo si las conoce usted, pero, desde luego, yo no las conozco. Y creo que ésa no es la fórmula más adecuada para hacer el control que corresponde a esta Cámara en este caso. Así es que le agradecería mucho que me dijera en qué página están, porque las respuestas que se nos dan a preguntas parlamentarias no nos llevan a conocer esos ingresos.

Gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Caneda Morales): Muchas gracias, senador Arjona.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador Barquero.

El señor BARQUERO VÁZQUEZ: Gracias, señor presidente.

Mire, senador, los conozco igual que los conocía cuando ustedes estaban en el Gobierno, y están en la misma página de los presupuestos en que estaban cuando ustedes gobernaban y elaboraban los presupuestos; en la misma.

Insisto en que lo que yo he dicho del poder adquisitivo de los funcionarios es lo que reconocen los sindicatos. Otra cosa es lo que reconozca el Partido Socialista. No me he referido a lo que reconocen ustedes. Me he referido a lo que reconocen los sindicatos. Si usted está mal informado, infórmese bien porque no creo que los sindicatos a ustedes les cuenten una cosa y al Gobierno le cuenten otra.

Y vuelta con el tema de la opacidad. Usted acaba de reconocer que no es un tema que haya de incluirse en el debate del proyecto de ley de presupuestos. Será un tema de Reglamento del Congreso o de Reglamento del Senado. Usted dice que lo hemos boicoteado. Habremos votado en contra. No creo que eso sea boicotear. Es votar en contra. Es negar una fórmula que no le gustó al grupo mayoritario de esta Cámara. Propongan ustedes otra y a ver si llegamos a un consenso; pero en todo caso ése es el cauce, no el proyecto de ley de presupuestos. Éste no es el cauce para abordar esa cuestión.

Señoría, insisto, poner en duda que las dos Cámaras no tienen capacidad para obtener la información que les pueda corresponder es hacer un juicio sobre el Parlamento muy grave y, en este sentido, lo hacen sobre la época en que está el Gobierno popular y lo están haciendo también sobre la época en la que han estado ustedes, porque no creo que la información hoy sea menor, empezando para las comparecencias del presidente del Gobierno en el Con-

greso de los Diputados, y aquí no porque ustedes no han querido.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Caneda Morales): Muchas gracias, senador Barquero.

Título IV, artículos 36 a 45. Título VIII, artículos 97 y 98 y sección 07. Enmiendas 25 a 28 de los señores Cabrero Palomares y Cuenca Cañizares, del Grupo Parlamentario Mixto.

Tiene la palabra el senador Cabrero.

El señor CABRERO PALOMARES: Muchas gracias, señor presidente.

Intervengo para defender este bloque de enmiendas que tienen que ver con las pensiones extraordinarias de las clases pasivas del Estado. Con nuestras enmiendas pretendemos que las normas limitativas estén sujetas al límite máximo de percepción que, en este caso, será del 200 por cien del límite establecido con carácter general.

En ese sentido, planteamos que se establezca la cláusula de revisión salarial para este tipo de pensiones públicas, igual que en el caso del Régimen General de la Seguridad Social. Asimismo, pretendemos que el criterio de no revalorización se elimine de las pensiones del régimen de las clases pasivas, de forma que al menos el incremento esté sujeto al IPC.

Aprovecho el turno para dar también por defendidas las enmiendas que van de la 630 a la 635 y de la 641 a la 642 y que han sido presentadas por el senador Anxo Quintana.

Nada más y muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Caneda Morales): Muchas gracias.

Pasamos a la enmienda 489 del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos.

Tiene la palabra el señor Aurrekoetxea.

El señor AURREKOETXEA BERGARA: Muchas gracias, señor presidente.

Intervengo también brevemente, ya que es la única enmienda que presentamos al artículo 97, tres, apartado 6, párrafo cuarto. Con esta enmienda lo único que pretendemos es reducir la cotización por incapacidad laboral de aquellos que opten voluntariamente por esta contingencia —como se explica en nuestra justificación— para contrarrestar el notable incremento que se experimenta en la nueva cotización prevista en el proyecto de ley de presupuestos generales del Estado, que implica una subida en la cotización de un 21,25 por ciento más respecto a la cotización durante el año 2004.

Por lo tanto, simplemente he comentado lo que ya explicamos en la justificación de nuestra enmienda, que esperamos sea aprobada. Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Caneda Morales): Muchas gracias.

Pasamos a las enmiendas números 1289 a 1.306 y 1330 del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés.

Título IV
(arts.
36 a 45)
Título VII
(arts.
97 y 98)
Sección 07

Tiene la palabra el senador Aleu.

El señor ALEU I JORNET: Muchas gracias, señor presidente.

Son un conjunto de enmiendas que pretenden una mejora de las pensiones respecto a lo que se contempla en los Presupuestos Generales del Estado. Creemos que son suficientemente claras como para defenderlas.

Contestando al senador Barquero, entiendo que boicotear un tema, no es votar en contra, sino no votarlo y no permitir que se trate. Por eso le he dicho que ustedes boicotearon la propuesta que propuso el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos.

El señor VICEPRESIDENTE (Caneda Morales): Muchas gracias.

Pasamos a las enmiendas 1629 a 1631, 1637 y 1638 del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió.

Tiene la palabra, senador Cambra.

El señor CAMBRA I SÁNCHEZ: Muchas gracias, señor presidente.

Las tres primeras enmiendas que mantenemos al Título IV, las números 1629, 1630 y 1631, reflejan claramente uno de los principales motivos por los que en el Congreso de los Diputados ya mantuvimos una posición contraria a estos presupuestos. Son un claro reflejo de lo que nosotros interpretamos como una falta de un mayor acento social en estos presupuestos, ya que hacemos referencia a las pensiones no contributivas, a las pensiones mínimas del sistema de Seguridad Social y a las del SOVI.

Entendemos que el incremento de estos tres tipos de pensiones debería ser más elevado y, por ello, mantenemos estas tres enmiendas. En el caso concreto de la número 1631, se pretende dar cumplimiento al Acuerdo sobre el Desarrollo de la Seguridad Social en lo referente a las pensiones del SOVI.

Luego están las otras dos enmiendas, las formuladas al Título VIII, que se corresponden con las números 1637 y 1638. La enmienda número 1637 pretende una adecuación del tipo de variación del régimen especial agrario —el REASS— por contingencias profesionales al que está establecido para el régimen de autónomos. Pensamos que esto sería un avance muy importante para el régimen especial agrario y muy demandado por el sector.

La enmienda número 1638 recoge una demanda importante por parte de los trabajadores autónomos; lo que pedimos es que se amplíe de los 50 a los 55 años la posibilidad de que un trabajador autónomo pueda escoger la base de su cotización.

Nada más y muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Caneda Morales): Muchas gracias.

Enmiendas números 846 a 854 y 873, del Grupo Parlamentario Socialista. Tiene la palabra el senador Romero.

El señor ROMERO CALERO: Muchas gracias, señor presidente.

Intervengo muy brevemente para defender un grupo de enmiendas al Título IV, dirigidas a una mayor concreción y un mejor tratamiento de las pensiones, tanto de las no contributivas, como de las clases pasivas del Estado, los umbrales para el acceso a los complementos de mínimos y las del SOVI. Son, efectivamente, enmiendas a los artículos 38, 40, 43 y 44, dirigidas a que a la hora de valorar el incremento de las pensiones se considere de forma más real la inflación prevista, porque pensamos que, tal como establece la reciente publicación de la Comisión Europea de noviembre de este mismo año, la inflación prevista para el Estado español es del 2,8 por ciento, y el cálculo que se ha hecho de incremento de las pensiones, en torno al 2 por ciento, va a suponer, sin duda, como lo está suponiendo habitualmente, un deterioro en este tipo de pensiones. Bien es verdad que se nos dirá que en el debate de la Ley de Presupuestos del año que viene se producirá, como se va a producir este año, una actualización de las pensiones en función del IPC real de noviembre a noviembre, pero pensamos que ese deterioro que se produce a lo largo del año, aunque luego se compense en una paga de una sola vez, ha supuesto inevitablemente una pérdida de poder adquisitivo de estos pensionistas que perciben, por otra parte, pensiones que están muy cercanas a la subsistencia. Por tanto, insisto en que son un grupo de enmiendas planteadas en esa dirección.

Merece la pena, quizás, detenernos 30 segundos en las pensiones del SOVI porque frente al incremento del 2 por ciento del proyecto de ley, el Grupo Parlamentario Socialista plantea un incremento del 10 por ciento. Las pensiones del SOVI, como bien saben sus señorías, van a tener una extinción vegetativa; son cada vez menos los pensionistas que perciben pensiones de esta naturaleza y pensamos que es de justicia que vean revalorizadas sus pensiones de una forma más importante. Es por esto por lo que hemos planteado, igual que años anteriores, un incremento de esta naturaleza.

Por último, la enmienda número 873, al artículo 97, del Título VIII, pretende la actualización de la base de cotización, una vez ha entrado en vigor la Ley de Reforma Económica. Seguramente cuando se planteó el proyecto de ley de presupuestos, el Grupo Parlamentario Popular o el Gobierno en su caso, no tuvo en cuenta las consecuencias que se iban a derivar de la Ley de Reforma Económica una vez entrara en vigor, ya que establece, como bien sabe su señoría, un período transitorio de adaptación del REASS al RETA. Pensamos que no tener en cuenta esta circunstancia al considerar las bases de cotización supone un perjuicio que, a nuestro juicio, se podría resolver de una manera fácil, y es por lo que planteamos la enmienda número 873, al artículo 97.

Nada más y muchas gracias, señor presidente.

El señor VICEPRESIDENTE (Caneda Morales): Muchas gracias, senador Romero.

Para turno en contra, tiene la palabra el senador Barquero.

El señor BARQUERO VÁZQUEZ: Muchas gracias, señor presidente; gracias, señorías.

Las pensiones son un asunto de una enorme sensibilidad y por eso agradezco el tono en que se han producido todas las intervenciones.

El otro día le dije en comisión al senador Romero que el objetivo de cualquier Gobierno —e imagino que un Gobierno socialista haría lo mismo— es tratar de conjugar los dos parámetros necesarios en el caso de las pensiones —para no volver a situaciones anteriores, a las que no quiero referirme de ninguna manera—, tratando de lograr un equilibrio razonable entre la sostenibilidad del sistema y la cobertura y protección social, partiendo de la base de que las pensiones no pierdan nunca poder adquisitivo sino que siempre lo ganen. En cualquier caso, entiendo perfectamente que la oposición siempre pida más porque, probablemente, los demás haríamos lo mismo.

Quiero poner de relieve que el Gobierno llevará a cabo una subida inmediata del 2 por ciento, para más de ocho millones de pensionistas, y que, evidentemente, si se produce desviación en la inflación prevista durante 2003, a este incremento se le sumará lo que corresponda del IPC, como todos los años. Por cierto, en este Título, señor presidente, va incluida la enmienda número 1892, destinada a recoger la actualización para las pensiones del IPC, que no necesita absolutamente ninguna defensa porque está pactada con todos los grupos parlamentarios.

Por otro lado, es necesario señalar que de los ocho millones de pensionistas, más del 33 por ciento tendrán una subida adicional, concretamente: 2.115.000 viudas y viudas; 196.500 pensionistas de mínimas de jubilación, menores de 65 años, orfandad y favor familiar; y, 314.000 perceptores del antiguo SOVI. En este sentido, me gustaría decir que en el caso de estas pensiones, aparte del 2 por ciento, se eleva del 48 al 52 por ciento el porcentaje a aplicar a la base reguladora de todas las pensiones de viudedad y se incrementan las pensiones mínimas de la siguiente forma: viudedad menor de 65 años, 3 por ciento más; jubilación menor de 65 años, 3 por ciento más; orfandad, 3 por ciento más; favor familiar, 3 por ciento más; y, SOVI, 2 por ciento más.

De esta manera, se constata la sostenibilidad, la cobertura y la protección social, y el mantenimiento y aumento del poder adquisitivo, que son los tres parámetros que el Gobierno ha tratado de conjugar en el título dedicado a las pensiones en los presupuestos para el año 2004.

A estos datos hay que añadir el aumento importante del fondo de reserva de la Seguridad Social, que el Gobierno del Partido Popular —y su candidato a presidente en las próximas elecciones generales— promete aumentar en los próximos años en una cuantía importante, cuestión que desde mi punto de vista es garantía suficiente del mantenimiento del poder adquisitivo y de la sostenibilidad del sistema en los próximos años.

Muchas gracias, señorías y señor presidente.

El señor VICEPRESIDENTE (Caneda Morales): Muchas gracias.

El senador Barquero ha procedido a la defensa de la enmienda número 1892, del Grupo Parlamentario Popular.

Para turno en contra, tiene la palabra la senadora Do Campo.

La señora DO CAMPO PIÑEIRO: Muchas gracias, señor presidente.

Voy a hacer el turno en contra a las siete enmiendas presentadas al Título VIII: Cotizaciones Sociales.

La enmienda presentada por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos pretende reducir la cotización por incapacidad laboral de aquellos que opten voluntariamente por esta contingencia y he de decir que desde el Gobierno, y desde el Grupo Parlamentario Popular, se ha tenido en cuenta la nueva ley de medidas de reformas económicas que, sin lugar a dudas, establece mejoras muy importantes en la prestación por incapacidad temporal. Y si bien estas medidas necesariamente llevan aparejado un incremento de los tipos de cotización, hay que tener en cuenta que para contrarrestar el efecto de ese incremento a dichos tipos les son de aplicación coeficientes reductores hasta el año 2017, con el fin lógico de adecuar paulatinamente la cotización en este régimen a la del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos. Por tanto, rechazamos su enmienda.

Igualmente rechazamos las enmiendas números 641 y 642 del senador Quintana. Y con respecto a las enmiendas números 873 y 1330 del Grupo Parlamentario Socialista y del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, como ya les anunciamos en comisión, también las rechazamos porque, como dice el senador Romero, desde el Grupo Parlamentario Popular se ha tenido en cuenta en la ley de medidas de reformas económicas puesto que, incluso, en el trámite en el Senado hemos introducido una enmienda en consonancia con esta ley, en la que se contempla el derecho de opción de los trabajadores por cuenta propia del Régimen Especial Agrario con anterioridad al 1 de enero de 2004 para continuar con el actual sistema de cotización o para poder acceder voluntariamente a la nueva situación. Por tanto, no podemos aceptar esta enmienda, ya que la modificación que proponen no contempla lo establecido en la nueva ley.

En cuanto a la enmienda número 1637 del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, senador Cambra, usted nos dice que es una injusticia social que personas que reúnen los mismos requisitos y que pueden cotizar por el Régimen Especial Agrario o por el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos cotizan por contingencias profesionales de diferente forma. Tengo que señalarle desde el Grupo Parlamentario Popular que el campo de aplicación del Régimen Especial Agrario y del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos son diferentes, como usted sabe y, por lo tanto, la inclusión de un trabajador en uno de estos regímenes no es opcional, sino que según su actividad y circunstancias debe causar alta de manera obligatoria en el régimen que corresponda.

En la enmienda número 1638, también de Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, nos proponen una vez más, porque lo reiteran en todos los presupuestos, que la edad para poder elegir la base máxima en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos se amplíe de los 50 a los 55 años. Usted sabe muy bien, senador Cambra, que hace unos años el límite de edad para poder elegir la base máxima en este régimen estaba fijado en

los 55 años. Posteriormente, dicha edad se redujo a la actual de 50 años, de tal forma que la limitación para la elección de la base máxima es actualmente la que corresponde con los quince años antes de la edad legal de jubilación, es decir, con los 65 años, período que se utiliza para el cálculo de la base reguladora en la pensión de jubilación. Por tanto, rechazamos esta enmienda.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor VICEPRESIDENTE (Caneda Morales): Muchas gracias, senadora Do Campo.

Turno de portavoces.

¿Grupo Parlamentario Mixto? (*Pausa.*)

¿Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria? (*Pausa.*)

¿Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos? (*Pausa.*)

¿Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés? (*Pausa.*)

¿Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió? (*Pausa.*)

Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió tiene la palabra el senador Cambra.

El señor CAMBRA I SÁNCHEZ: Muchas gracias, señor presidente.

Senador Barquero, estamos de acuerdo en que es importante que esté garantizado el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones en general, pero pensamos que los tres casos concretos que estamos enmendando aquí, que son las pensiones no contributivas, las pensiones mínimas del Sistema de Seguridad Social y las pensiones del SOVI, en ningún supuesto alterarían una política de equilibrio presupuestario, sino que al revés, en un contexto de equilibrio presupuestario el mayor acento social concretado en estas tres figuras de pensiones mínimas es perfectamente asumible, y al menos desde nuestro punto de vista, se justifican plenamente precisamente porque estamos en un contexto de equilibrio presupuestario.

Nada más y muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Caneda Morales): Muchas gracias, senador Cambra.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador Romero.

El señor ROMERO CALERO: Muchas gracias, señor presidente.

Senador Barquero, comprendo su celo por el equilibrio presupuestario, pero difícilmente puedo entender que una medida de la naturaleza que nosotros proponemos, tan razonable, tan limitada y de un alcance tan concreto, ponga en peligro la viabilidad del sistema.

Puedo suscribir las palabras del senador Cambra, es decir, si en la situación económica en que vivimos, si en la situación actual de la Seguridad Social no se puede plantear el incremento de este tipo de pensiones, que, como muy bien conocen sus señorías, están casi en el umbral de la subsistencia, en función del IPC real que sabemos que se

va a producir, sinceramente, creo que ustedes son muy dueños de poner el énfasis donde quieran y establecer las prioridades, sin embargo, nosotros hemos creído que merecía la pena hacer un pequeño esfuerzo presupuestario desde la perspectiva de la Seguridad Social para que este tipo de pensiones pudieran tener este incremento.

Desde el punto de vista porcentual, donde se prevé una diferencia mayor es en las pensiones del SOVI, pero también me reconocerá, querido senador Barquero, que se trata de un tipo de pensionistas que, por edad, son cada vez menos.

En definitiva, estas son nuestras propuestas, desde luego, sin ánimo, naturalmente, de poner en cuestión el futuro del sistema ni muchísimo menos.

Gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Caneda Morales): Gracias, senador Romero.

En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador Barquero.

El señor BARQUERO VÁZQUEZ: Gracias, señor presidente.

Evidentemente, la propuesta es razonable. Y les diré más aún: creo que no se puede argumentar la no subida con el equilibrio presupuestario puesto que existe un fondo de reserva, es decir, aumentemos menos el fondo de reserva y más las pensiones. Pero, señorías, tan razonable es una cosa como la otra, porque se trata de conjugar presente y futuro.

Si no recuerdo mal, la subida de un punto sólo en las pensiones no contributivas supone alrededor de 19 millones de euros. Un portavoz de un grupo parlamentario pide, por ejemplo —y es razonable también—, que no haya ninguna pensión no contributiva menor al salario mínimo interprofesional, lo cual supone una subida de un 28 por ciento. ¿Razonable? Sí. ¿Hay dinero para ello? Supongo que sí si se echa mano del fondo. Pero desde la perspectiva de una política de presente, medio y largo plazo me parece que también es muy razonable la postura que defiende el Gobierno.

Y termino, señorías, diciéndoles que creo que hay que reconocer el esfuerzo y la realidad de la mejora del poder adquisitivo de todas las pensiones desde 1996 al año 2004. Permítanme que les recuerde algunos datos.

Por ejemplo, si el IPC acumulado en este período ha subido un 22,88 por ciento, no hay ninguna pensión que no se haya revalorizado al menos cinco puntos por encima del IPC acumulado. Alguien puede decir que es poco, que tenía que haberse revalorizado más. Evidentemente, se pueden contestar muchas cosas. Una de ellas, de dónde partíamos y dónde estamos. Y a este respecto creo que todos nos tenemos que felicitar aunque la batuta la haya llevado el Gobierno del Partido Popular. Pero insisto en creo que todos nos tenemos que felicitar.

Y creo que todos tenemos que comprender que hay razones para defender lo que ustedes defienden y poderosas razones también para aceptar los aumentos, más que razonables, incluso respecto al poder adquisitivo, que paulati-

namente, ejercicio tras ejercicio, se vienen produciendo. Por ejemplo, en jubilaciones para mayores de 65 años, cuatro puntos por encima del IPC acumulado. Parecido sucede respecto a mayores de 65 años sin cónyuge a cargo. Las jubilaciones para mayores de 65 años con cónyuge a cargo están en el 36 por ciento, frente al casi 23 por ciento del IPC acumulado. Las pensiones SOVI, de las que tanto se ha hablado en este debate, se han revalorizado un 29,49 por ciento, frente al 22,88 por ciento del IPC acumulado. Yo creo que son datos más que suficientes que prueban la bondad de la dirección del sistema en este momento.

Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señorías.

El señor VICEPRESIDENTE (Caneda Morales): Muchas gracias, senador Barquero.

Título V, artículos 46 a 56, Anexo III y Sección 06.

Para la defensa de las enmiendas presentadas por los señores Cabrero Palomares y Cuenca Cañizares, tiene la palabra el senador Cabrero.

El señor CABRERO PALOMARES: Señor, presidente, con las enmiendas números 29, 30 y 31 al Título V pretendemos que las partidas destinadas a la ayuda oficial al desarrollo se adapten a lo que realmente se ha ejecutado en ejercicios anteriores, 290 millones de euros. Asimismo creemos que para la utilización de los fondos de ayuda oficial al desarrollo deben cumplirse los requisitos recogidos en la Ley de Cooperación para el desarrollo y su Reglamento correspondiente. Además, consideramos que se debe crear un fondo de 300 millones de euros para la condonación de la deuda externa a los países más desfavorecidos económicamente.

Nada más y muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Caneda Morales): Gracias, señoría.

Para la defensa de las enmiendas números 1307 y 1308, del Grupo Parlamentario de Entesa Catalana de Progrés, tiene la palabra el senador Aleu.

El señor ALEU I JORNET: Gracias, señor presidente.

Intervengo únicamente para dar nuestras enmiendas por defendidas, así como las números 1309, 1310 y 1311.

El señor VICEPRESIDENTE (Caneda Morales): Gracias, señoría.

Para la defensa de las enmiendas números 855 y 856, presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador Mesa.

El señor MESA CIRIZA: Gracias, señor presidente.

Intervendré muy brevemente para defender la enmienda número 855 al artículo 46, Deuda Pública, con la que pretendemos suprimir el apartado dos de dicho artículo, pues a nuestro juicio el mismo le resta contenido y deja sin efecto la limitación que pretende precisamente el primer punto del mismo. Así pues, nuestra intención es que el artículo 46 aparezca con la siguiente redacción: Se

autoriza al Gobierno para que, a propuesta del Ministerio de Economía, incremente la Deuda del Estado, con la limitación de que el saldo vivo de la misma a 31 de diciembre del año 2004 no supere el correspondiente saldo a 1 de enero de 2004 en más de 12.567.282,62 miles de euros.

Asimismo queremos añadir ese párrafo, del que ustedes tanto nos han escuchado hablar y no entienden, según el cual el Gobierno remitirá trimestralmente al Congreso de los Diputados la información correspondiente al endeudamiento derivado de las operaciones financieras incluidas en el Capítulo VIII, Activos Financieros, con expresión de los destinatarios, importes individualizados, condiciones financieras y perspectivas de reintegro.

Con la enmienda número 856 pretendemos la creación de un nuevo artículo 56 bis, denominado Fondo de condonación y conversión de Deuda externa para inversión en desarrollo. Como su propio nombre indica, y sabrán ustedes, además, porque ha sido presentada en reiteradas ocasiones para su inclusión en el articulado de la Ley de Presupuestos año tras año, tenemos la intención de que se destinen contra él las operaciones relacionadas con el tratamiento de la deuda del Estado español con los países más pobres. Nuestra dotación inicial es de 200 millones de euros y, además, añadimos la necesidad de que el Gobierno informe semestralmente al Congreso de los Diputados y al Senado sobre las operaciones realizadas con cargo a dicho Fondo.

Reiteramos una y otra vez que no conseguiremos eliminar el problema de los países más pobres si no somos capaces de realizar el esfuerzo de ir poniendo en marcha mecanismos para reducir la deuda que éstos tienen con el exterior. Sé que a ello se me responderá que se trata de un proceso que necesita de tiempo, que hay que regularlo y elaborar leyes, pero eso es algo que se nos dice año tras año y quien tiene la capacidad y responsabilidad de gobierno de formular, legislar y poner en marcha estos mecanismos es en este caso el Partido Popular, si es que tiene la sensibilidad necesaria para ello.

Nada más, y muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Caneda Morales): Gracias, señoría.

Para turno en contra tiene la palabra el señor Fernández Cucurull, por el Grupo Parlamentario Popular.

El señor FERNÁNDEZ CUCURULL: Muchas gracias, señor presidente.

Como ya se ha comentado, al Título V de la ley de presupuestos generales de 2004 se han presentado un total de siete enmiendas que paso seguidamente a contestar.

El Grupo Parlamentario Mixto presenta tres enmiendas, que son las números 29, 30 y 31. La número 29 propone disminuir la cifra que pueda aprobar el Consejo de Ministros con cargo al Fondo de Ayuda al Desarrollo desde 672 millones de euros a 290 millones de euros. Mi grupo la va a rechazar por considerar que la cifra prevista refleja la estimación de las necesidades financieras derivadas de la demanda de créditos concesionales en materia de créditos a la exportación y de los compromisos internacionales.

La número 30 propone añadir al artículo 56 que la utilización de este fondo cumplirá todos los requisitos recogidos en la Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo y su Reglamento correspondiente. Mi grupo considera que la normativa que afecta al Fondo es ya lo suficientemente precisa a tal efecto.

La número 31 propone la creación de un nuevo Fondo de Condonación de Deuda Externa por 300 millones de euros. Además de su imprecisión técnica, la enmienda debe ser rechazada porque ya existen los instrumentos presupuestarios para llevar a cabo la condonación de la deuda tanto en deuda comercial como en deuda del Fondo de Ayuda al Desarrollo.

Las enmiendas números 1307 y 1308 de Entesa coinciden respectivamente con las números 855 y 856 del Grupo Parlamentario Socialista, por lo que las contesto conjuntamente. Las números 1307 y 855 proponen modificar el artículo 46, relativo al incremento de la deuda pública y su limitación suprimiendo el apartado dos y añadiendo un párrafo relativo a que el Gobierno remita información al Congreso de los Diputados sobre el Capítulo VIII, Activos Financieros. En el apartado dos señala que la limitación al saldo vivo de la deuda del Estado a 31 de diciembre de 2004, contemplada en el apartado uno, será efectiva al término del ejercicio y establece los motivos de revisión automática, de forma que las desviaciones presupuestarias o extrapresupuestarias se puedan tramitar y financiar presupuestariamente. Al mismo tiempo, el párrafo segundo del artículo 48 del proyecto regula la comunicación por el Gobierno al Congreso y Senado sobre el importe y características de las operaciones de Deuda Pública y el importe y el desglose por instrumentos de la Deuda Pública viva. Por tanto, a nuestro juicio, las enmiendas son innecesarias.

En cuanto a las números 1308 y 856, proponen la introducción de un artículo 56 bis nuevo, mediante el que se crea un nuevo Fondo de condonación y conversión de deuda externa para inversión en desarrollo, con una dotación inicial de 200 millones de euros. Como ya se ha dicho anteriormente en relación con la enmienda 31 de Izquierda Unida, los instrumentos ya existen y, por consiguiente, consideramos que la enmienda es innecesaria.

Nada más y muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Caneda Morales): Gracias.

Pasamos al turno de portavoces.

¿Grupo Parlamentario Mixto? (Pausa.)

¿Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria? (Pausa.)

¿Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos? (Pausa.)

¿Grupo Parlamentario de Entesa Catalana de Progrés? (Pausa.)

¿Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió (Pausa.)

¿Grupo Parlamentario Socialista? (Pausa.)

¿Grupo Parlamentario Popular? (Pausa.)

El señor VICEPRESIDENTE (Caneda Morales): Pasamos al Título VI, artículos 57 a 63.

Enmiendas de los señores Cabrero Palomares y Cuenca Cañizares, del Grupo Parlamentario Mixto, números 32 y 33.

Tiene la palabra el senador Cabrero.

El señor CABRERO PALOMARES: Gracias, señor presidente.

Doy por defendidas las enmiendas números 32 y 33, y la 636 del señor don Anxo Quintana.

El señor VICEPRESIDENTE (Caneda Morales): Gracias.

Las enmiendas del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés están defendidas.

Enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió números 1632, 1633 y 1634.

Tiene la palabra el senador Cambra.

El señor CAMBRA I SÁNCHEZ: Muchas gracias, señor presidente.

A este Título VI tenemos tres enmiendas. La 1632 solicita la incorporación de un nuevo artículo, que sería el 60 bis, a continuación del artículo 60 actual. Con ello se pretende incluir un nuevo Epígrafe 151.6 para la producción de energía termoeléctrica en centrales térmicas de ciclo combinado.

Con la enmienda 1633 proponemos introducir un nuevo artículo, en este caso sería el 60 ter, que iría a continuación del actual 60 y 60 bis que he defendido, con el objetivo de adecuar las cuotas asignadas al sector del renting, por entender que éstas se alejan de la rentabilidad media de las empresas que operan en ese sector. Estoy hablando del Impuesto de Actividades Económicas.

Por último, la enmienda 1634, que lo es al artículo 62, pretende exceptuar del incremento general del 2 por ciento que se prevé en estos presupuestos las tasas de carácter aeroportuario, puesto que ya fueron objeto de una actualización específica en el año anterior. Pensamos por tanto que después de la actualización del año anterior sería conveniente no aplicar este año el 2 por ciento general.

Nada más y muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Caneda Morales): Gracias, señoría.

Enmienda número 857, del Grupo Parlamentario Socialista. Tiene la palabra el senador Lerma.

El señor LERMA BLASCO: Muchas gracias, señor presidente.

Nuestra enmienda persigue algo elemental que presentamos en todos los presupuestos generales del Estado: actualizar las tarifas del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas a la inflación, porque si no se actualizan lo que ocurre es que sube la presión fiscal, con una segunda consecuencia, que además normalmente el Partido Popular puede presumir de haber rebajado el IRPF a la gente cuando lo cierto es que era un derecho normal si hubiera

deflactado las tarifas habitualmente y, en vez de ser un favor que presta el Gobierno a los ciudadanos, es un derecho. Eso es lo que proponemos con esta enmienda, que cada vez que suba la inflación, se deflacten las tarifas del Impuesto sobre la Renta o se suban los mínimos exentos en cada caso. Ésa es una situación que entiendo que debería ser automática por parte del Gobierno, pero en cualquier caso el Gobierno nos reprime de actualizar las tarifas, y dos o tres años después dice que nos rebaja en el Impuesto sobre la Renta lo que no deberíamos haber pagado.

Nada más, sencillo y fácil de entender.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor VICEPRESIDENTE (Caneda Morales): Muchas gracias, señoría.

Para turno en contra, por parte del Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Sánchez Sánchez-Seco.

El señor SÁNCHEZ SÁNCHEZ-SECO: Muchas gracias, señor presidente.

Efectivamente en este Título VI se realiza una actualización generalizada del conjunto de los tributos vigentes, y todo ello evidentemente enmarcado dentro de ese importante objetivo que viene caracterizando al Gobierno de cumplimiento del déficit cero y de estabilidad presupuestaria como principal base para el mantenimiento del crecimiento económico que viene caracterizando a nuestro país en los últimos ocho años.

Por lo que se refiere a las enmiendas, la número 636 presentada por el senador Quintana pretende la supresión del redondeo de algunas tasas, que es cierto que se lleva a cabo y que siempre se ha hecho así, con el fin de facilitar al ciudadano sus relaciones y trámites con la Administración, pero que no supone ningún incremento suplementario.

En lo que se refiere a las enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió sobre aplicación de nuevas cuotas del Impuesto de Actividades Económicas para la producción de energía termoeléctrica, debemos señalar que ya existen sentencias del Tribunal Supremo en las que se manifiesta la necesidad de que para aplicar nuevas cuotas debe realizarse un estudio pormenorizado de las cuotas que se desean implantar, que no se refleja en las enmiendas presentadas.

Por otra parte, ya existe también un epígrafe en las propias tarifas del Impuesto sobre Actividades Económicas, el 151 concretamente, que ya contempla la producción de energía eléctrica en términos genéricos y donde se integra la actividad que se propone.

La enmienda número 1633 se refiere a la reducción de las cuotas del Impuesto sobre Actividades Económicas en el Epígrafe 854.2, de alquiler de automóviles sin conductor en régimen de «renting», y debe señalarse que estas cuotas ya fueron modificadas en la Ley 13/2000, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2001 con el objetivo de desglosar en el mismo el alquiler en régimen de «renting» del alquiler ajeno al mismo y tal como pidió precisamente el colectivo de este sector. La propuesta recogida en la enmienda vuelve a plantear esta cuestión relativa al Epígrafe

854.2 y, además, propone una reducción del 97 por ciento de la cuota, que parece excesivo y, en definitiva, no aporta, como decía en el caso anterior, ningún dato que lo justifique ni ningún estudio. Nos parece un coste demasiado elevado, ya que supondría un descenso recaudatorio muy importante para las entidades locales.

En cuanto a la enmienda número 857, del Grupo Parlamentario Socialista que, como resaltaba el senador Lerma, es algo habitual en dicho grupo, hay que tener en cuenta que la deflactación de la tarifa tiene sentido cuando la inflación origina un aumento considerable de las rentas nominales que no se corrige por causa del incremento de la tributación de las rentas del contribuyente, y además precisamente el pasado año se llevó a cabo una modificación del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, y fue en dicho impuesto donde se hizo una corrección bastante importante, hasta el punto de que se rebajó de forma importantísima y por segunda vez tan sólo en cinco años el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, con lo cual el incremento que ha podido sufrir con la inflación que ha habido en este momento es muy pequeño y yo creo que los que verdaderamente desean los contribuyentes es que se les reduzcan los impuestos y, además, en las cantidades en que se han reducido estos últimos años en España.

Gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Caneda Morales): Muchas gracias.

Turno de portavoces.

¿Grupo Mixto? (*Pausa.*)

¿Grupo de Coalición Canaria? (*Pausa.*)

¿Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos? (*Pausa.*)

¿Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió? (*Pausa.*)

¿ Grupo Parlamentario Socialista?

Tiene la palabra el senador Lerma.

El señor LEMA BLASCO: Gracias.

Voy a ser muy breve.

La modificación no es muy pequeña, realmente es sustancial. Cada vez que hay un 3 por ciento de inflación acumulativa anual, al final acaba comiéndose la supuesta rebaja de impuestos que dice el Partido Popular que hace cada vez que modifica el IRPF. Y la verdad es que eso no es una generosidad del Gobierno que rebaja los impuestos; eso es una cuestión que el Gobierno debería plantear habitualmente deflactando las tarifas y subiendo los mínimos exentos, porque la inflación acumulativa del 3 por ciento anual es algo muy serio. Y que no se diga que se rebaja el IRPF cuando no es verdad. Es un derecho de los ciudadanos el hecho de que cuando se aprueba el impuesto con un cuadro determinado de tarifas, luego se respete eso teniendo en cuenta la inflación. Por lo tanto, sabe el señor ponente en este caso y el Gobierno que el IRPF en concreto, salvo para grupos específicos, no se rebaja, porque la realidad es bien concreta, y es que existe una inflación sostenida anualmente y diferenciada, además, con respecto

a la Unión Europea, que permite al Gobierno, a continuación, decir que ha bajado los impuestos cuando no es verdad. Año tras año ha subido el impuesto un 3 por ciento que, a continuación, naturalmente, puede deflactar y decir que ha hecho una nueva reforma. Es verdad que en algunos capítulos se reforman algunas cosas, pero en el caso concreto de lo que tiene que pagar la gente, la mayoría de la rebaja viene absorbida por la inflación que ha tenido que pagar anteriormente, y eso es lo que estamos pidiendo nada más.

Muchas gracias, presidente.

El señor VICEPRESIDENTE (Caneda Morales): Muchas gracias, senador Lerma.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador Sánchez Sánchez-Seco.

El señor SÁNCHEZ SÁNCHEZ-SECO: Gracias presidente.

Creo que lo que quieren los ciudadanos es que se cumplan las promesas y lo que ha venido a demostrar el Partido Popular en estos últimos ocho años es que cumple las promesas, y por eso se le está otorgando la confianza elección tras elección, y estoy seguro de que en las próximas elecciones se le volverán a otorgar, porque va a haber una nueva rebaja de impuestos que no va a afectar a todos los ciudadanos, como ha ocurrido hasta ahora con una reducción de hasta el 25 por ciento de media del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, sino que también afecta a las sociedades, a las pymes, a las pequeñas y medianas empresas, ya que se les ha reducido especialmente a ellas el Impuesto sobre sociedades y a todos los ciudadanos y a todos los pequeños empresarios más del 90 por ciento del Impuesto sobre Actividades Económicas. Esto es lo que quieren los ciudadanos, esto es lo que ha cumplido el Partido Popular en estos años y esto es lo que seguirá cumpliendo en el futuro con la confianza de los ciudadanos.

Gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Caneda Morales): Muchas gracias.

Pasamos al Título VII, artículos 64 a 96, Sección 32 (Entes Territoriales), Sección 33 (Fondos de compensación interterritorial). Enmiendas números 34 a 46, 455 a 457 y 478 a 480, todas ellas de los señores Cabrero Palomares y Cuenca Cañizares, del Grupo Parlamentario Mixto.

Tiene la palabra el senador Cabrero.

El señor CABRERO PALOMARES: Gracias.

Intervengo para dar por defendidas las enmiendas números 34 a 46, 455 a 457 y 478 a 480, así como la 553 del señor Mur y el bloque que comprende las enmiendas números 637 a 640, del señor don Anxo Quintana.

Gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Caneda Morales): Pasamos a las enmiendas números 1313 a 1329 y 1615 a 1617, del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés.

Tiene la palabra el senador Aleu.

El señor ALEU I JORNET: Muchas gracias, señor presidente.

Se trata de un conjunto de enmiendas que tienen que ver con el dinero que llega, fundamentalmente, a los ayuntamientos y a las demás instituciones.

Una de ellas propone que el reparto se haga en función de los acuerdos que se han alcanzado con la FEMP, no solamente por una fórmula matemática.

Un par de enmiendas más pretenden incrementar el dinero destinado a subvencionar el transporte colectivo urbano.

Otras dos enmiendas pretenden dotar una partida para gastos de representación de los pequeños municipios, es decir, de aquellos que tienen menos de mil habitantes.

Otra enmienda trata de que se compense a los ayuntamientos afectados por el paso de autopistas y que por la Ley 7/1992 no tributan IBI. Se trata de que se les compense por esta falta de tributación.

En conjunto, estas enmiendas tienen que ver con los gastos sanitarios y con la modificación del Fondo de Compensación Interterritorial.

Son suficientemente claras como para que merezcan mayor explicación.

Nada más y muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Caneda Morales): Muchas gracias, senador Aleu.

Pasamos a las enmiendas números 1635 y 1636, y números 1868 a 1872, presentadas por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió.

Tiene la palabra el senador Cambra.

El señor CAMBRA I SÁNCHEZ: Muchas gracias, señor presidente.

Efectivamente, mantenemos dos enmiendas al Título VII. La número 1635 la presentamos al artículo 85.2.A, apartado b), y con ella pretendemos eliminar el límite de 36.000 unidades urbanas como condición de acceso por parte de las corporaciones locales a las subvenciones para servicios de transporte colectivo urbano.

En cuanto a la enmienda número 1636, al artículo 86, solicitamos la compensación a los ayuntamientos por la bonificación del Impuesto de Bienes Inmuebles concedido a las concesionarias de autopistas de peaje.

Por lo que se refiere a las cinco enmiendas que hemos presentado a la Sección 32, la primera de ellas, la número 1868, solicita un incremento de 85 millones de euros en el concepto 450, a la autoridad del transporte metropolitano de Barcelona para la financiación del transporte regular de viajeros en el año 2004 y la regularización de ejercicios anteriores, todo ello según el contrato-programa que tiene suscrito dicha autoridad con el Estado.

La enmienda número 1869 pretende incrementar en 48.737.000 euros la partida destinada a financiar el coste provisional de la policía autónoma, incluyendo en este coste las liquidaciones definitivas pendientes de ejercicios anteriores.

En cuanto a la enmienda número 1870, pretendemos crear un nuevo fondo dotado con 100 millones de euros para dar cumplimiento al principio de lealtad institucional. Ya defendí anteriormente una enmienda en este sentido y he insistido en la intervención sobre el posicionamiento global a esos proyectos de ley en el sentido de dotar a las comunidades autónomas de recursos para iniciar el cumplimiento del principio de lealtad institucional, tal y como prevé el nuevo sistema de financiación autonómica. Éste es uno de los aspectos importantes que nosotros echamos a faltar en estos presupuestos.

La enmienda número 1871 pretende dotar con 8.950.000 euros la financiación de los gastos de implantación del servicio de atención de llamadas de urgencia 112.

Por último, con la enmienda 1872 solicitamos un incremento de 3.966.000 euros con objeto de poder compensar a los ayuntamientos afectados por la bonificación del 95 por ciento en la cuota del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, de la que son beneficiarias las sociedades concesionarias de autopistas, tanto las de titularidad estatal como las autonómicas. Esta enmienda complementa la número 1636, que hemos presentado al Título VI.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Caneda Morales): Muchas gracias, señoría.

Para la defensa de las enmiendas números 858 a 872 y números 1270 a 1279, por el Grupo Socialista tiene la palabra el senador Mesa.

El señor MESA CIRIZA: Gracias, señor presidente.

Damos por defendidas todas las enmiendas que ha relacionado la Presidencia, correspondientes al Título VII y a las Secciones 32 y 33, en los términos en que están expresadas en la publicación correspondiente.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Caneda Morales): Gracias, señoría.

En turno en contra, por el Grupo Popular tiene la palabra el senador Gil-Ortega.

El señor GIL-ORTEGA RINCÓN: Muchas gracias, señor presidente.

Al Título VII, Capítulo I, al que yo me voy a referir —al resto lo hará mi compañera, la senadora Carrasco—, se han presentado un total de 26 enmiendas, aunque muchas de ellas son idénticas en lo que a su contenido se refiere, especialmente las que mantienen vivas los Grupos de la Entesa y Socialista. Por otro lado, algunas enmiendas ya se presentaron el año pasado, cambiando sólo su número y el año de presentación. Por ello, permítanme que dé una respuesta conjunta a los distintos grupos, ya que, como digo, todas esas enmiendas aluden a los mismos conceptos.

Un total de 11 enmiendas se refieren al transporte urbano, solicitando que se apliquen ayudas estatales por los servicios de transporte colectivo urbano a los municipios de más de 20.000 habitantes sin que se tenga en cuenta el número de unidades urbanas censadas. Pues bien, vamos a

rechazar todas esas enmiendas ya que, como saben sus señorías, dicha subvención se estableció en favor de municipios con una población superior a los 50.000 habitantes. Posteriormente, en el ejercicio de 1993, y a petición de la propia Federación Española de Municipios y Provincias, se aprobó que también tuviesen derecho a esa subvención los municipios a que se hace referencia en las citadas enmiendas, pero, eso sí, cuando tuviesen censadas más de 36.000 unidades urbanas.

Como entenderán, si aprobáramos esas enmiendas los perjudicados serían los actuales beneficiarios, sin que hubiéramos contado con ellos. Así pues, vamos a seguir manteniendo el texto del dictamen en todos esos puntos. Por ello, también vamos a rechazar las enmiendas números 859 y 1315, que proponen modificarlo. Y lo hacemos, porque las ayudas a las entidades locales para el sostenimiento del servicio de transporte colectivo se reparten tomando como referencia los datos disponibles, es decir, los correspondientes al momento del reparto, y éstos, evidentemente, son los relativos a 2003 y no a enero de 2004, al que todavía no hemos llegado.

Otras enmiendas solicitan una dotación suplementaria de 6.344 euros para cada uno de los municipios menores de 1000 habitantes. También vamos a rechazarlas, dado que ese grupo, de 4.905 municipios, ya obtiene una fuente de financiación a través de su participación en los tributos del Estado.

Por otro lado, se presentan una serie de enmiendas relacionadas con las autopistas, como la número 1636, de *Convergència i Unió*, la número 860, del Grupo Socialista, la número 1317, de la Entesa, y la número 43, de *Izquierda Unida*, proponiendo todas ellas compensaciones en las cuotas del IBI correspondientes a autopistas en régimen de peaje a favor de los ayuntamientos que estén cercanas a ellas. Vamos, asimismo, a rechazar esas enmiendas. En primer lugar, porque la Ley Reguladora de las Haciendas Locales no reconoce esa compensación. Y en segundo lugar, porque los ayuntamientos afectados por la existencia de esas autopistas de peaje ya se benefician implícitamente en lo que a su participación en los tributos del Estado se refiere a través de la variable de esfuerzo fiscal.

Por seguir en la misma tónica, las enmiendas números 862 y 1319 solicitan una compensación a los ayuntamientos equivalente a las cuotas del IBI no recaudadas por retrasos catastrales, y también vamos a rechazarlas, ya que en el Programa 912.C del servicio 23 de la Sección 32 no está previsto; además, los enmendantes proponen un gasto sin que a su vez propongan ninguna baja en estos programas.

Señorías, podía haberme remitido a las respuestas del pasado año y de otros anteriores, pero he creído conveniente contestar al menos algunos de los bloques. Como es evidente, rechazamos también el resto de enmiendas que no he enumerado.

El señor VICEPRESIDENTE (Caneda Morales): Gracias, senador Gil-Ortega.

A continuación, tiene la palabra la senadora Carrasco.

La señora CARRASCO LORENZO: Gracias, señor presidente.

Efectivamente, intervengo para rechazar las enmiendas que se presentan al Capítulo II del Título VII y a las Secciones 32 y 33, correspondientes las primeras a los artículos 92 a 96.

Al artículo 92 se han presentado 7 enmiendas, aunque bien es verdad que tres corresponden a Entesa Catalana de Progrés y otras tres al Grupo Parlamentario Socialista, que son idénticas, y una del Grupo Parlamentario Mixto.

Los artículos 92 y 94 hacen referencia a las entregas a cuenta del Fondo de suficiencia. Al artículo 93 no se han presentado enmiendas. Al artículo 94 corresponde la aplicación de las garantías de financiación de los traspasos de los servicios de asistencia sanitaria en el año 2002. Al artículo 95 sólo hay una enmienda, que hace referencia al coste de los nuevos servicios traspasados y el artículo 96 relativo al Fondo de Compensación Interterritorial.

No voy a decir que se han repetido las enmiendas del pasado año, entre otras razones, porque yo no era senadora, por tanto, voy a contestar a las que se han planteado este año. Me sorprenden las enmiendas presentadas a todos estos artículos y a las propias Secciones 32 y 33 porque todas hacen referencia a modificaciones, tanto en las entregas a cuenta como en las liquidaciones o en la garantía de los servicios sanitarios pero, fundamentalmente, a un modelo de financiación autonómica que, como ha dicho el ministro en su presentación, y algunos hemos vivido, firmamos por unanimidad todas las comunidades autónomas en el año 2001, que ha comenzado a entrar en vigor en el año 2002, y en el propio Consejo de Política Fiscal y Financiera ya se determinó que a mediados del período se comprobaría si se iba a producir de nuevo una sentada de las comunidades autónomas en cuanto al funcionamiento del sistema; por ello, no comprendo la presentación de las enmiendas que considero sólo corresponderían si la Administración del Estado no hubiera cumplido con los compromisos adoptados en el mencionado Consejo de Política Fiscal y Financiera.

Por otra parte, algunas enmiendas hacen referencia a la tan traída y llevada deuda histórica de Andalucía y Extremadura, que el resto de comunidades nos negamos a admitir como tal, porque se podría establecer un manual de deuda histórica de otras comunidades autónomas hasta hace pocos años que, afortunadamente, se eliminó.

Me voy a referir a algunas enmiendas. Los números 1320, 1321 y 1322, de Entesa, son idénticas a los números 863, 864 y 865 del Grupo Parlamentario Socialista, al artículo 92 que, como he dicho, se refiere a las entregas a cuenta del Fondo de suficiencia, donde se propone la adición de un nuevo apartado 2 al artículo 92 con una modificación fundamentalmente de cantidades; como ya dijimos en comisión, se ignora cómo se ha calculado el importe de esas entregas, el importe de los créditos figura en la Sección 32 de los Presupuestos Generales, calculado de acuerdo con las normas que se regulan en la Ley 21/2001, de Financiación de las Comunidades Autónomas. Las cantidades que se incluyen carecen totalmente de justificación porque no contienen los criterios sobre la base de los cuales se ha llegado a esa determinación.

La enmienda número 1321 coincide con la número 864 del Grupo Parlamentario Socialista y también propone una adición al artículo 92 sobre la liquidación definitiva del Fondo de suficiencia del año 2004 y su introducción en los Presupuestos Generales para el próximo año. He de decir que el sistema de financiación vigente desde el año 2002 se caracteriza por su vocación de estabilidad y, por ello, el sistema se ha elevado a rango de norma por la citada Ley 21/2001. Las normas que se regulan figuran en sus artículos 7.2 y 15.2 y en ellas se encuentran las incluidas en esta enmienda y, por tanto, no se considera conveniente incluirla en los presupuestos del próximo año.

La enmienda número 1322 coincide con la número 865, del Grupo Parlamentario Socialista, y es una adición del artículo 92, que es la liquidación definitiva de la participación de los ingresos del Estado y las garantías de la Comunidad Autónoma de Andalucía del quinquenio 1997-2001. Hay que decir que el año pasado habían presentado otra enmienda igual a la que contestó en los mismos términos la Secretaría de Estado, pero esta enmienda no será aceptada porque el modelo al que hacen referencia ya ha caducado a 31 de diciembre de 2001, y siguen pendientes los recursos de inconstitucionalidad interpuestos por la Junta de Andalucía y, lógicamente, no parece congruente acordar un modelo para una comunidad que lo ha recurrido ante el Tribunal Constitucional hasta que no se desista o recaiga sentencia firme al efecto.

A ese mismo artículo el Grupo Parlamentario Mixto ha presentado la enmienda número 44, en la que solicitan la creación de un nuevo artículo 92 bis. En él se establece la introducción de un fondo de nivelación de servicios por una cuantía de 250.000 euros que se distribuirá de acuerdo con los criterios del Consejo de Política Fiscal y Financiera. Hay que decir que hacen siempre referencia al artículo 15 de la LOFCA, artículo que no regula un fondo de nivelación sino asignaciones de nivelación. Hubo un grupo de trabajo de todas las comunidades autónomas que estableció los criterios del artículo 15 de la LOFCA y del fondo de nivelación que, lógicamente, se ha modificado por el nuevo sistema de financiación de las comunidades autónomas desde el año 2001 hasta el 2003, sistema en el que se establece en el artículo 67 de la Ley 21, apartados 1 y 2, cuándo se va a proceder a llevar a cabo las asignaciones de nivelación y las desviaciones que tienen que producirse para que el modelo que ha entrado en vigor el 1 de enero de 2002 dé lugar a estas asignaciones de nivelación. Hasta el momento no se han producido realmente esas circunstancias.

Al artículo 94, como he dicho, se han presentado tres enmiendas de la Entesa y otras tres del Grupo Parlamentario Socialista que son idénticas. Son los números 1323, 1324 y 1325 y los números 866, 867 y 868 respectivamente. Hacen referencia a la aplicación de las garantías de financiación de los servicios de asistencia sanitaria para el año 2002. Los criterios son casi los mismos que les he venido diciendo. Todos ellos están establecidos en la Ley 21/2001 en los diversos artículos de cómo se lleva a cabo la liquidación del sistema de financiación no solamente de servicios comunes, sino también de servicios sanitarios,

porque para eso es un modelo integrador. Por tanto, no lo podemos admitir.

En la enmienda número 1324, que es coincidente con la número 867 del Grupo Parlamentario Socialista, se solicita la modificación del artículo 93, que también hace referencia a estos mismos criterios. Por tanto, y al ser coherente con la enmienda anterior no la admitimos. Igual ocurre con la enmienda número 1325, que coincide con la número 868 del Grupo Parlamentario Socialista, enmienda que propone una modificación del artículo 94 bis para asignaciones complementarias de la deuda histórica de las Comunidades Autónomas de Andalucía y de Extremadura. Como es lógico, la rechazamos en los mismos términos.

Al artículo 95 solamente se ha presentado una enmienda por parte del Grupo Parlamentario Mixto. En ella se propone la adición de un artículo 95 bis para las comunidades autónomas que optaron por el modelo de financiación anterior al actual para que se les transfieran unas cantidades correspondientes al ejercicio de aplicación del nuevo modelo de financiación. Realmente ésta es una enmienda que no se acaba de entender porque en la actualidad no existe ninguna comunidad autónoma que no haya adoptado el modelo de financiación que está vigente desde 2002.

Al artículo 96 también se han presentado una serie de enmiendas bastante prolijas. Hay 11 enmiendas; cuatro de ellas han sido presentadas por el Grupo de la Entesa Catalana de Progrés, y el Grupo Parlamentario Socialista ha presentado otras cuatro que son idénticas. La enmienda número 1326 coincide con la número 869 del Grupo Parlamentario Socialista. En ella se propone modificar el artículo 96, que hace referencia al fondo de compensación interterritorial, y las cantidades de este fondo. Hay que decir que esta dotación está ya recogida, como casi todas las que se contemplan en este artículo, en el proyecto de ley de presupuestos, donde se respeta el importe mínimo que se estableció en el artículo 16 de la Ley Orgánica 8/1990, de financiación de las comunidades autónomas, y en el artículo 2 de la Ley 22/2001, que regula los fondos de compensación interterritorial. Además, esta dotación respeta el apartado 3 del acuerdo del Consejo de Política Fiscal y Financiera de 1992, que estableció como porcentaje mínimo el 35 por ciento de la base de cálculo de la inversión pública por un importe mínimo de 128.844 millones de pesetas, que equivalen a 774.333,44 miles de euros.

La enmienda número 1327 hace también referencia a unas cantidades similares. Tenemos que rechazarla por los mismos argumentos referidos al fondo de compensación interterritorial.

La número 1328 es idéntica a la número 871 y con ella ocurre lo mismo, pues ya está recogida la dotación a este fondo complementario para las comunidades autónomas y ciudades con estatuto de autonomía para la financiación de gastos de inversión. Lógicamente, se tiene que rechazar por las mismas razones que la anterior. Igual ocurre con la número 1329, que coincide también con la número 872 en el mismo sentido que todas las anteriores.

Me gustaría dar respuesta a algunas de las enmiendas presentadas a la Sección 32, sobre todo a las que ha presentado el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de

Convergència i Unió por varias razones. A la Sección 32 hay 25 enmiendas y a la Sección 33 sólo hay una del Grupo Parlamentario Mixto. A la Sección 32 algunas enmiendas del Partido Socialista también coinciden con las tres que ha presentado Entesa. En términos generales, algunas de ellas hacen referencia a convenios que se firmarán en su día para el metro de Sevilla, de Granada, de Málaga —a mí me gustaría también que hubiera metro en todas las provincias de mi Comunidad Autónoma— en el sentido de que tanto la Comunidad Autónoma de Andalucía como algunos ayuntamientos ya tienen consignadas partidas presupuestarias para firmar un convenio con la Administración del Estado, pero lógicamente hasta que la Administración del Estado no firme el convenio no tiene ninguna obligación ni es necesario hacer una consignación en el presupuesto. Por lo tanto, todos los convenios, porque así se establece en la Sección 32, que el Estado ha firmado con las comunidades autónomas o con los ayuntamientos se cumplen escrupulosamente.

La enmienda de CIU número 1868 es igual que la número 1617 de Entesa. Propone, efectivamente, un aumento de 85 millones de euros para el apoyo al transporte terrestre, a fin de incrementar el contrato-programa con Barcelona, lo cual supone un fuerte incremento ante las necesidades del transporte de Barcelona. Basándose en el nuevo volumen de necesidades, se solicita una aportación adicional de 150 millones de euros frente a la media del período de vigencia del contrato-programa que se ha firmado para el período 1998-2001, que son 97. En el momento actual se está negociando el escenario de aportaciones de la Administración General de Estado para el período 2002-2005 y no contempla un escenario tan abultado, pero hay que decir que, teniendo en cuenta las aportaciones que se han efectuado en 2002 y en 2003 incluidas en el proyecto y las que están incluidas en este proyecto de presupuestos, se produce un incremento notable de la Administración General de Estado que es suficientemente representativo para lo que piden.

La enmienda número 1869 también solicita una ampliación para cubrir el coste provisional de la policía autónoma. En los presupuestos del año que viene se recoge un incremento sobre el año 2003 de 67 millones de euros, y en el caso de que en el año 2004, como usted dice, fueran necesarias mayores dotaciones para atender a las liquidaciones del año 2003, el crédito tiene naturaleza ampliable y, lógicamente, siempre se podría llegar a atender esas necesidades.

La enmienda número 1870 propone otra transferencia a las comunidades autónomas en concepto del fondo complementario para el cumplimiento del principio de lealtad institucional. Efectivamente, la Ley 21 establece el principio de lealtad institucional que se determinará, como usted sabe, de acuerdo con los impactos positivos o negativos que las normas de la Administración del Estado produzcan sobre las comunidades autónomas, lo que se decidirá en el Consejo de Política Fiscal y que en tanto no se modifiquen las obligaciones a atender, en su caso por aplicación del principio indicado, no ha lugar a establecer dotación alguna.

La enmienda número 1871 hace referencia al incremento en la dotación del servicio de atención de llamadas de urgencia 112. Pues bien, se trata de actuaciones cuya competencia corresponde a las comunidades autónomas. En su momento se hizo la transferencia a las comunidades autónomas. Imagino que respecto del coste de servicio, el consejero competente valoraría bien en su momento el traspaso de servicios que ha ido evolucionando como ha evolucionado el modelo de financiación y, por tanto, no procede esta nueva dotación presupuestaria para atender a esta finalidad.

Por último, la enmienda número 1872 hace referencia a otras aportaciones a corporaciones locales para la bonificación del 95 por ciento en la cuota del IBI, de las que son beneficiarias las sociedades concesionarias de las autopistas, que es el Programa 912.C. El artículo 9 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales dice que las leyes que establezcan beneficios fiscales en tributos locales determinarán las fórmulas de compensación que procedan. En este sentido se señala que no existe una norma en la que se contemple esta situación, por lo que creemos que el Estado no tiene obligación de efectuar dicha compensación.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Caneda Morales): Muchas gracias, senadora Carrasco.

Turno de portavoces.

¿Grupo Parlamentario Mixto? (*Pausa.*)

¿Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria? (*Pausa.*)

¿Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió? (*Pausa.*)

Por el Grupo Parlamentario de Entesa Catalana de Progrés, tiene la palabra el senador Aleu.

El señor ALEU I JORNET: Uno y otro lo han dicho. Sobre el IBI tiene que haber una forma de compensación, pero yo, que soy el que tengo que hacer la forma de compensación, no la pongo y así no pago. ¡Hombre, eso no es serio! Lo han dicho los dos, además. Me parece que debería caer por su propio peso. Debe ser el Estado, que es el

que ha fijado la exención, el que recompense a los ayuntamientos por esa exención que ha hecho.

Nada más y muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Caneda Morales): Muchas gracias, senador Aleu.

¿Grupo Parlamentario Socialista? (*Pausa.*)

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la senadora Carrasco.

La señora CARRASCO LORENZO: Muchas gracias, señor presidente.

No es hora de entrar en un debate, porque podríamos hacer uso de la memoria histórica. Independientemente de lo que usted dice sobre crear la norma para hacerla, encaje o no, sí que encaja en el tema de la lealtad institucional y en los efectos que han tenido las diversas modificaciones de la Administración central, que lógicamente han tenido repercusión en las comunidades autónomas y en la Administración local.

No vamos a entrar en discrepancias porque podríamos llegar a determinar los efectos más que negativos que han tenido algunas normas estatales de hace tiempo, que han sido incluso anuladas por los tribunales y por el Tribunal Constitucional y que la Administración del Estado se negó, no a compensar, sino a cumplir con las sentencias y con algunas de sus propuestas.

Ésta es la respuesta y, efectivamente, no existe esa norma. Pero, si existe un principio de lealtad institucional de las comunidades autónomas y de la Administración central, en la misma medida tiene que existir para la Administración local.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Caneda Morales): Gracias, señoría.

Terminado el debate del Título VII, se suspende la sesión hasta mañana a las nueve y media.

Eran las veintidós horas y cinco minutos.